



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO  
PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN  
DERECHO**

**Ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de  
defensa del denunciado - Distrito Judicial La Libertad,  
2019.**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:**  
Doctor en Derecho

**AUTOR:**

Ms. Martínez Gonzáles, Raúl (ORCID: 0000-0002-2175-9062)

**ASESOR:**

Dr. Aguirre Bazán Luis Alberto (ORCID: 0000-0002-5642-1213)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Derechos fundamentales

**TRUJILLO - PERÚ**

**2020**

## **DEDICATORIA**

### **A mi padre Francisco**

*Por brindar su vida a cambio de la mía,  
Por ser el mejor de mis maestros y guía  
en cada uno de mis pasos*

*Porque a pesar de la distancia y el  
tiempo, sus consejos y enseñanzas  
siempre están presentes.*

### **A mi madre Flor**

*Por inculcar en mí los deseos de  
superación y enseñarme a ser  
perseverante*

*Por creer y confiar en mí aun en los  
peores momentos*

*Por comprender mis reiteradas  
ausencias debido al Doctorado.*

**A mí mismo: ¡Meta 2020 cumplida!**

**Raúl Martínez Gonzáles**

## **AGRADECIMIENTO**

### **A Dios**

Por ser el Padre que nunca falla, estar presente en cada instante de mi vida, escuchar mis ruegos y permitirlo todo con su infinita voluntad.

### **A mis padres**

Por su eterno apoyo, amor y dedicación.

**A los Doctores** Luis Alberto Aguirre Bazán, Carlos Yengle Ruiz y **a la Doctora** Carmen Olinda Neyra Alvarado, por su apoyo incondicional en cada etapa de la elaboración de la presente tesis.

**Raúl Martínez Gonzáles**

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	iv
ÍNDICE DE TABLAS.....	v
ÍNDICE DE FIGURAS.....	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	5
III. METODOLOGÍA.....	22
3.1. Tipo y Diseño de Investigación.....	22
3.2. Variables y Operacionalización.....	23
3.3. Población, muestra y muestreo.....	24
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	25
3.5. Procedimientos.....	26
3.6. Método de análisis de datos.....	28
3.7. Aspectos éticos.....	30
IV. RESULTADOS.....	31
V. DISCUSIÓN.....	59
VI. CONCLUSIONES.....	75
VII. RECOMENDACIONES.....	77
VIII. PROPUESTA.....	78
REFERENCIAS.....	82

## ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1 .....	31
Tabla 2 .....	33
Tabla 3 .....	35
Tabla 4 .....	38
Tabla 5 .....	40
Tabla 6 .....	42
Tabla 7 .....	44
Tabla 8 .....	46

## ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1 .....	32
Figura 2 .....	32
Figura 3 .....	36
Figura 4 .....	37

## RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo general determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado, en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019. Para lo cual se utilizó una investigación mixta, no experimental y correlacional causal, en la que se encuestó a los 18 jueces competentes en el ámbito de tutela especial, se entrevistó a 5 expertos en el ámbito de tutela especial y derecho de defensa; asimismo, se analizó resoluciones judiciales y escritos de las partes referidos al ámbito de tutela especial y el derecho de defensa. En los resultados estadísticos se obtuvo que existe correlación entre el ámbito de tutela especial y el derecho de defensa del denunciado; y, en los resultados cualitativos se obtuvo que el ámbito de tutela especial restringe el derecho de defensa del denunciado en casos de riesgo leve y moderado, mientras que en casos de riesgo severo lo suprime. Lo que ha permitido concluir que el ámbito de tutela especial incide negativamente en el derecho de defensa del denunciado, restringiéndolo y suprimiéndolo, pues a mayor ámbito de tutela, mayor vulneración del derecho de defensa.

**Palabras clave:** ámbito de tutela especial, derecho de defensa del denunciado, medidas de protección y cautelares.

## ABSTRACT

The purpose of this work is to determine the incidence of the area of special protection in the defense right of the accused, in the La Libertad Judicial District during 2019. For this, a mixed, non-experimental and causal correlational investigation was used in the that the 18 competent judges in the field of special protection were surveyed, 5 experts in the field of special protection and the right of defense were interviewed; Likewise, the judicial resolutions and writings of the parties referring to the area of special protection and the right of defense were analyzed. In the statistical results it was obtained that there is a correlation between the scope of special protection and the right of defense of the accused; and, in the qualitative results, it was obtained that the scope of special protection restricts the right of defense of the accused in cases of mild and moderate risk, while in cases of severe risk it suppresses it. This has allowed us to conclude that the scope of special protection negatively affects the right of defense of the accused, restricting and eliminating it, since the greater the scope of protection, the greater the violation of the right of defense.

**Keywords:** scope of special protection, right of defense of the accused, protection and precautionary measures.



## **I. INTRODUCCIÓN**

En diversos países la violencia es un reto principal para la salud pública (Da Silva y Dalbosco, 2016), pues causa muertes, lesiones, traumas emocionales y espirituales, además de afectar significativamente la calidad de vida de las víctimas (Macedo y Godoy, 2016); es por ello que a nivel internacional se han adoptado convenciones con la finalidad de combatirla, siendo las más destacadas la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En Perú, una de las medidas de lucha contra la violencia fue asumida por la ley N° 26260, publicada el 24 de diciembre de 1993, cuyo texto establecía que los procesos judiciales por violencia de tipo familiar se sometían a las reglas del proceso único regulado por el Código de Niños y Adolescentes, es decir, primero se planteaba la demanda por violencia familiar, luego de admitida se corría traslado a la parte demandada para que la conteste, posteriormente se realizaba la audiencia única y finalmente se sentenciaba.

Ya en el año 2011, el Centro Nacional de Planeamiento estratégico de la Presidencia del Consejo de Ministros elaboró el denominado Plan Bicentenario, en el que se estableció como uno de los lineamientos en política de derechos humanos: buscar que la sociedad cambie de actitud de cara a eliminar gradualmente la violencia familiar, asimismo garantizar que el Estado tenga presencia efectiva en zonas que resulten vulnerables a la violencia.

Tiempo después, la ley N° 26260 fue derogada por la ley N° 30364, publicada el 23 de noviembre del 2015, la misma que conjuntamente con su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, publicado el 27 de julio del 2016, establecieron un nuevo proceso para el trámite de ya no demandas por violencia familiar sino denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sustentándose en enfoques de género, integridad, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad y generacional.

En este nuevo proceso se contempla una audiencia especial ante el juez de familia, la misma que en los textos originarios del artículo 16 de la Ley N° 30364 y artículo 35 de su Reglamento, sólo se hacía referencia a la notificación de la víctima a efectos de realizar la audiencia de emisión de medidas de protección y/o cautelares; pero no hacían referencia alguna a la citación del denunciado, a quien en todo caso, de concurrir a la audiencia sin haber sido emplazado, se le tenía por notificado con el contenido del acta en el mismo acto de la audiencia.

Asimismo, indicaban que la audiencia se realizaba con o sin la presencia de la víctima; incluso el primigenio artículo 36 del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP establecía que en los casos donde la ficha de valoración determine que existe riesgo severo, el Juzgado de Familia prescindía de la audiencia y tenía que dictar medidas de protección y cautelares en favor de la presunta víctima.

Luego, el Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 de setiembre del 2018, modificó, entre otros, el artículo 16 de la Ley N° 30364 donde ahora se establece que en caso no se pueda determinar el nivel de riesgo, el juez de familia tiene el plazo de 72 horas para evaluar el caso y resolver en audiencia; por otro lado, si la ficha de valoración determina que existe riesgo leve o moderado, el juez tiene el plazo de 48 horas para evaluar el caso y resolver en audiencia la emisión de las medidas de protección y/o cautelares necesarias; y, si la ficha de valoración determina que existe riesgo severo, el juez tiene 24 horas para dictar las medidas de protección y/o cautelares en favor de la víctima, pudiendo prescindir de la audiencia.

De este modo, el juez tiene la facultad de prescindir de la audiencia para emitir directamente medidas de protección y/o medidas cautelares sin haber escuchado a ninguna de las partes, sobre todo sin dar la oportunidad al denunciado de ejercer su derecho de defensa frente a la denuncia planteada en su contra.

Si en los casos de riesgo indeterminado, leve, moderado o severo se cita al denunciado a la audiencia, contará con plazos ínfimos para conseguir un

abogado, preparar su defensa, recabar medios probatorios e incluso tomar las previsiones para asistir a la audiencia; pero a su vez, citarlo a la audiencia implica inevitablemente confrontarlo con la parte denunciante, a pesar de que ello está prohibido por el artículo 25 de la Ley 30364; entonces, si no se le cita a la audiencia, se cumple con la prohibición de no confrontación, pero a cambio se suprime completamente su derecho de defensa, el mismo que, de por sí, ya se encuentra bastante restringido por los plazos antes mencionados.

Por otro lado, si en los casos de riesgo severo se prescinde de la audiencia y se emiten medidas de protección a favor de la presunta víctima, el denunciado ve suprimida toda posibilidad de ejercer su derecho de defensa en el ámbito de tutela.

Aunado a ello, la mayoría de los medios de prensa en Perú difunde numerosas noticias sobre violencia familiar y feminicidios, generando indignación en la población que exige a las autoridades medidas severas contra los agresores; sin embargo, la lucha contra la violencia debe ajustarse a los estándares mínimos de respeto a los derechos fundamentales tanto de la víctima como del presunto agresor, y ello no se consigue otorgando poder casi total a la televisión y a la imagen (Sartori, 1997).

Es así que bajo el actual esquema del ámbito de tutela, según el Informe N° 28-2019-ADM-MJIVMIGF-CSJLL (2019) elaborado por la Administración del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, desde enero del 2019 hasta el 01 de diciembre del 2019, se dictaron 10 204 medidas de protección (anexo 13).

Por lo expuesto, se plantea el siguiente problema general de investigación: **¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019?**; y, como problemas específicos: ¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado?, ¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en las

manifestaciones del derecho de defensa del denunciado? y ¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado?

La investigación se justifica porque los resultados obtenidos constituyen conocimiento original sobre un tema aún no abordado en el campo académico respecto al ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado.

Para tal efecto, el objetivo general de esta investigación es: determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019; mientras que los objetivos específicos son: OE1: determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado; OE2: determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado y OE3: determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado.

Como hipótesis general se plantea: existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019; mientras que las hipótesis específicas son: existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado; existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado y existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado.

## **II. MARCO TEÓRICO**

Como antecedentes de estudio en el contexto internacional, destaca la investigación realizada por Rodríguez (2015), quien en su tesis doctoral titulada: “La perspectiva de género como aporte del feminismo para el análisis del derecho y su reconstrucción: el caso de la violencia de género”, refiere que el sistema interamericano aborda la violencia de género exigiendo a los Estados el respeto y garantía de los derechos humanos, no dejar impune los crímenes de violencia, exigir la reparación a las víctimas; asimismo, impulsa la sanción para aquellos operadores de justicia que obstruyan a las víctimas acceder a la justicia, proscribire el uso de estereotipos o perjuicios discriminatorios de género, promueve que la manifestación de la agraviada se valore como prueba testimonial en igualdad con las demás pruebas del proceso, rechaza la doble victimización de la parte agraviada y exige la emisión de medidas de protección y/o cautelares a favor de la víctima y su familia.

Yugueros (2016), en su trabajo titulado: “La protección de los menores víctimas de violencia de género en España”, refiere que los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, también son víctimas, y que tal realidad ha sido reconocida en las últimas reformas legislativas ante la necesidad de regular las medidas para su protección social y legal; asimismo, Rosser (2017) en su trabajo titulado: “Menores expuestos a violencia de género. Cambios legislativos, investigación y buenas prácticas en España”, reconoce que existen cambios significativos en la atención de los investigadores, administraciones y profesionales respecto a los menores expuestos a contextos de violencia de género, lo que ha conllevado a evidenciar cambios medulares en el marco legal y los protocolos referidos a casos de violencia de género, dando prioridad a la intervención de las víctimas menores de edad.

En Chile, Martínez y Vega (2013), en su trabajo titulado: “la obligación estatal de prevención a la luz del corpus iuris internacional de protección de la mujer contra la violencia de género”, afirman que no es suficiente tipificar como delito la violencia intrafamiliar a efectos de combatir la violencia contra la

mujer, sino que es necesario mecanismos administrativos y legislativos que permitan a las víctimas protegerse frente a nuevas agresiones; ante lo cual, Villa (2014), en su tesis de maestría titulada: “El delito de desacato por incumplimiento de ciertas prohibiciones impuestas en favor de víctimas de violencia intrafamiliar: Valor del consentimiento de la víctima”, refiere que tanto en el ámbito civil como penal, las prohibiciones de residencia, aproximación y comunicación se pueden adoptar como medidas cautelares para dar protección a la víctima y al grupo familiar frente al presunto agresor.

Por su parte, Silva (2017), en su trabajo titulado: “Convenio 169 de la OIT y los acuerdos reparatorios en delitos de violencia intrafamiliar”, afirma que, en Chile, la Ley N° 20.066, publicada el 07 de octubre de 2005, tiene como finalidad prevenir, sancionar, erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas; y su emisión pretende instaurar cambios debido a que la anterior Ley 19.325 permitía una defectuosa aplicación de medidas precautorias, sanciones ineficaces, no existía seguimiento a las medidas y muchos casos culminaban en conciliaciones que no garantizaban que la voluntad de la víctima haya sido libre.

En México, Espinoza, Gutiérrez, Mena-Muñoz y Córdoba (2008) en su trabajo titulado: “Domestic violence surveillance system: a model”, afirman que siempre es necesario implementar políticas públicas para fortalecer las redes de atención interinstitucionales en beneficio de las víctimas; por su parte, Nares, Martínez, y Colín (2015), en su trabajo titulado: “Violencia de género en la familia: perspectiva jurídica penal”, afirman que el desarrollo logrado por la sociedad respecto a la equidad de género no es suficiente para alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres, pues aún existen modos de dominación y violencia que deben erradicarse.

Voria (2019), en su trabajo titulado: “Las políticas públicas frente al dilema de la violencia de género y del cuidado: paradojas del programa “Ellas Hacen” en Argentina”, sostiene que la violencia es sintomática de la ausencia de normativas de protección y cuidado, así como de la búsqueda constante de respuestas solidarias, pero a la vez precarias. Es decir, existe violencia

de género porque, en gran parte, es una manifestación de la ausencia de acciones por parte del Estado frente a ello.

En Colombia, Gómez y Estrada (2017), en su trabajo titulado: “Dificultades en las competencias jurisdiccionales en materia de violencia intrafamiliar de las comisarías de familia”, sostienen que existen dificultades en las competencias jurisdiccionales de la comisaría de familia y las autoridades administrativas respecto a la inmediata ejecución de las medidas dictadas para proteger a las víctimas.

No debe perderse de vista que las medidas procesales asumidas para combatir la violencia deben ir de la mano con el respeto al debido proceso y al derecho de defensa del denunciado; es por ello que Sánchez (2014) en su tesis doctoral titulada: “Terrorismo y derecho de defensa. De la garantía de los derechos fundamentales a la investigación penal contraterrorista”, refiere que el derecho de defensa tiene como supuesto esencial al derecho a ser informado de la acusación, pues a partir de este se puede tener certeza que el contradictorio será en igualdad de condiciones, ello resulta evidente pues si no se conoce qué se imputa ¿Cómo se podría contradecir? ¿Cómo defenderse de una acusación que no conocemos?, entonces, de vulnerarse el derecho a ser informado se estará produciendo una manifiesta indefensión.

Vera (2014), en su tesis de maestría titulada: “Violencia Intrafamiliar: Las medidas de amparo y el principio de contradicción” en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador, concluye que la Ley de violencia contra la familia y mujer permite otorgar indiscriminadamente una o más medidas de amparo a favor del presunto agredido, de forma inmediata y sin la necesidad de citación; por ello, propone un anteproyecto en el que se establezca de manera obligatoria la previa notificación al demandado a fin de garantizar su derecho a la contradicción e igualdad de armas.

Asimismo, Terán (2017) en su tesis: “Procedimiento Directo aplicado en delitos flagrantes de violencia intrafamiliar aspecto psicológico según el Código Penal Ecuatoriano”, afirma que el procedimiento de delitos flagrantes

de violencia intrafamiliar es demasiado expeditivo y célere a tal punto que no posibilita al abogado del denunciado realizar una adecuada defensa, no existe igualdad procesal ni de armas entre el denunciado y el fiscal, quien si tiene a su favor todos los instrumentos para alcanzar su condena.

En Brasil, Apostólico, Yoshikawa, Fabiana y Gessner (2017), en su trabajo titulado: “Accuracy of nursing diagnoses for identifying domestic violence against children”, determinaron que la violencia doméstica es un fenómeno cuya severidad se ve reflejado en los 21 199 informes de violencia en contra de niños de edades entre 0 a 09 años en los años 2009 y 2010.

Entonces, los antecedentes internacionales permiten apreciar que el sistema interamericano exige a los Estados el respeto y garantía de los derechos, la lucha contra la impunidad de los crímenes de violencia, el efectivo resarcimiento y reparación a la víctima, sancionar a quienes obstruyan el acceso a la justicia, erradicar el uso de estereotipos o perjuicios discriminatorios, valorar la declaración de la parte agraviada, así como dictar medidas de protección y cautelares de manera adecuada y oportuna; asimismo, la violencia dentro de una pareja también afecta a los hijos y ello es recogido en legislaciones como la española, es decir, la violencia no solo es propia del género sino que traspasa otras categorías como la edad y la relación de dependencia; por otro lado, en Chile se admite que las medidas de prohibición para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar sean adoptadas como medidas cautelares tanto en el ámbito civil como penal, también se ha suprimido la figura de la conciliación en este tipo de procesos, pues no existía garantía de que la víctima exprese su voluntad de manera libre; a su vez, en México se destaca la importancia de las políticas públicas en la lucha contra la erradicación de la violencia de género dentro de la familia pero también se reconoce que mientras más ausente se encuentre el Estado, mayor será la impunidad de los actos de violencia, de allí que existen deficiencias en las competencias jurisdiccionales para dar respuesta y ejecutar las medidas de protección a favor de la víctima; pero dicha lucha contra la violencia debe ir siempre de la mano del respeto al derecho de defensa del denunciado, pues mientras no existan indicios suficientes y



razonables de la verosimilitud de los hechos de violencia que se denuncia, la presunción de inocencia se mantiene incólume; es por ello que en toda investigación debe observarse necesariamente el derecho a ser informado de los hechos que se atribuyen al denunciado, para que a su vez se respete el principio de contradicción; así lo advierten los estudios realizados en Ecuador, donde se determina que no debe vulnerarse el derecho de defensa e igualdad de armas del denunciado en los procesos de violencia intrafamiliar.

Como antecedentes de estudio en el contexto nacional, Salas (2019), en su tesis de maestría titulada: “Incidencia de la incorporación de los artículos 23-A, 23-B y 23-C, en la ejecución de las medidas de protección por violencia contra la mujer, dictadas por los Juzgados de Familia – Tarapoto, en el año 2018”, al estudiar el cumplimiento de las medidas de protección en Tarapoto, determinó que los procesos de violencia contra la mujer pretenden proteger la dignidad de las víctimas a partir de una mínima presunción de riesgo o peligro en ellas; de tal manera que tras la emisión de las medidas de protección, se presume que la víctima necesita con urgencia la intervención del Estado para lograr la verdad judicial, teniendo la facultad de ofrecer sus medios probatorios en la audiencia de medidas de protección y/o cautelares.

Por otro lado, Contreras (2019), en su tesis de maestría titulada: “Efectos de las medidas de protección en el delito de la violencia familiar en la Corte Superior de Lima Este”, afirma que en la jurisprudencia nacional permite evidenciar procesos en los que no se cumplen las medidas de protección, no se brinda la atención necesaria a la víctima y se emiten decisiones erradas amparándose en el principio de presunción de inocencia del agresor.

Infante (2019), en su tesis de maestría titulada: “Análisis de las medidas de protección frente a la violencia contra la mujer. Los Olivos, 2018”, al investigar las medidas de protección, determinó que tienen como finalidad proteger a las víctimas frente a nuevos actos de violencia de connotación física, psicología, sexual y/o económica, es por tal razón que el objetivo de la ley 30364 es garantizar el derecho de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres.

Santillán (2019), en su tesis titulada: “La vulneración del derecho de defensa del denunciado y los procesos de violencia psicológica en la provincia de Moyobamba, durante el año 2018”, al investigar el derecho de defensa del denunciado en los procesos de violencia psicológica, determinó que en los procesos por violencia psicológica se vulnera el derecho de defensa de la persona denunciada, pues la redacción de la Ley N° 30364 recorta diversos derechos como el de ser notificado previamente con la denuncia, la oportunidad de presentar pruebas o el hecho mismo de citar a audiencia con pocas horas de anticipación.

Burgos (2002), en su tesis de maestría titulada: “El Proceso Penal Peruano: una investigación sobre su constitucionalidad”, refiere que el derecho de defensa es una garantía de alcance constitucional atribuible a toda persona con legítimo interés en la solución de una controversia o incertidumbre para comparecer a lo largo de todo el proceso y defender sus intereses.

Entonces, conforme a los antecedentes nacionales, las medidas de protección y cautelares se dictan porque la presunta víctima se encuentra en la necesidad de ser protegida frente a cualquier tipo de violencia que le pueda ocasionar su presunto agresor, necesidad que se determina a partir de la presunción de veracidad de los hechos denunciados y de la existencia de situación de riesgo en la víctima; asimismo, el ámbito de tutela pretende garantizar la igualdad entre hombre y mujer; sin embargo, dicho ámbito garantiza la protección de la presunta víctima, sea hombre o mujer, a costa del recorte del derecho de defensa del presunto agresor o agresora, pues este último en algunos casos no es notificado con la denuncia y en los casos que si lo es cuenta con muy poco tiempo para preparar su defensa, pese a que tal derecho tiene alcance constitucional.

En este sentido, los antecedentes nacionales e internacionales permiten apreciar que el problema de la violencia contra la mujer y las poblaciones vulnerables ha conllevado a una reacción por parte de los Estados desde distintos frentes, uno de ellos es el judicial, pues se han instituido procesos que judicializan la violencia a fin de prevenir, sancionar y erradicarla; sin embargo, en el afán de lograr dichos objetivos, no se ha observado

adecuadamente el derecho de defensa del denunciado, pese a ser una garantía de alcance constitucional atribuible a toda persona, pues se ha maximizado las posibilidades de proteger a la presunta víctima pero a costa de incidir en el derecho de defensa del denunciado, problemática que en nuestro país se da a partir del ámbito de tutela establecido por la Ley N° 30364 y su reglamento.

**En lo referente al derecho de defensa**, se tiene que es una garantía de alcance constitucional atribuible a toda persona con legítimo interés en la solución de una controversia o incertidumbre para comparecer a lo largo de todo el proceso y defender sus intereses (Burgos, 2002); permite a las partes ser oídas, alegando, probando y rebatiendo cada una de sus posiciones; irradia a todo el ordenamiento jurídico sentando las bases de su irrenunciabilidad (Castillo, 2015); es uno de los elementos principales que sustentan el proceso actual, al ser una garantía esencial del debido proceso, revestido de distintas expresiones ya sean técnicas o materiales (Andía, 2013); así, aparece reconocido en el artículo 2° numeral 23 de la Constitución Política del Perú, resultando de aplicación a todo tipo de procesos, pues es parte del debido proceso y su observancia es obligatoria (Santillán, 2019) y hasta característico de un estado democrático de derecho (Alarcón, 2007); de tal manera, es inconcebible la existencia de una ley que lo desconozca, caso contrario, el Juzgador estaría habilitado para emplear el control difuso de la Constitución e inaplicarla (Monroy, 2007).

Así, el derecho de defensa es un derecho constitucional y fundamental que irradia a todo el ordenamiento jurídico y su observancia es obligatoria en todo tipo de proceso o procedimiento por cuanto siempre se debe garantizar que las partes tengan la posibilidad de ser oídas en el contradictorio, salvo que exista una restricción debidamente justificada en la proporcionalidad y razonabilidad.

El contenido esencial de los derechos fundamentales se delimita por el intérprete en función a los cánones constitucionales involucrados y en el marco de una interpretación unitaria y sistemática de la constitución, teniendo presente los valores morales que lo fundan y el examen teleológico

de los mismos (Martínez, 2005); así, jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, como la recaída en la STC 1230-2002-HC/TC, se ha establecido que el contenido esencial del derecho de defensa se afecta cuando, en un proceso judicial, cualquiera de las partes es impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios suficientes, eficaces y necesarios para defender sus derechos e intereses legítimos.

Entonces, la afectación al contenido esencial del derecho de defensa constituye una afectación directa al contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, lo que a su vez conlleva a colegir que todo procedimiento, proceso o norma que transgreda dicho contenido esencial, devendrá en inconstitucional.

Por regla general, el derecho de defensa puede ejercerse de manera inmediata, es decir, todo acto procesal debe realizarse con conocimiento de las partes, sobre todo de la parte contraria, no necesariamente para que ejercite su defensa a través del contradictorio, sino para que tenga la posibilidad de hacerlo, más allá de que haga efectiva o no su resistencia frente a la pretensión de la otra parte; de esta manera el juez no podrá resolver la pretensión planteada si es que previamente no se ha dado la oportunidad a la otra parte de ejercitar su derecho de defensa; caso contrario, incurriría en nulidad por contravenir el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva (Veramendi, 2010); asimismo, la Corte Suprema, en la Casación N° 4693-2015-La Libertad (2016), citando a Chamorro, sostiene que el derecho de defensa es un componente indivisible del debido proceso, pues garantiza a los litigantes el derecho a ser oídos, a contar con las posibilidades de oposición y defensa adecuadas para la protección de sus pretensiones, al amparo del principio *audiatur et altera pars*, que consiste en la igualdad de oportunidades de los litigantes para alegar y probar durante todo el decurso del proceso, puesto que nadie puede ser sentenciado sin que previamente se le haya dado la oportunidad de ser escuchado.

El ejercicio del derecho de defensa, en tanto aparece reconocido y protegido por la constitución, no puede ser restringido en su contenido esencial como es el permitir a las partes ser oídas en igualdad de condiciones dentro del

contradictorio, esa es la regla general; sin embargo, atendiendo a los intereses en juego y a los derechos bajo protección, se podría variar el momento en que el titular pueda ejercer ese derecho.

En este orden, como excepción, el derecho de defensa puede ejercerse bajo la modalidad *in audita pars*. Esto ocurre en el proceso cautelar donde el Juez resuelve la solicitud cautelar sin conocimiento de la otra parte, quien tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de manera diferida, esto es después de ejecutada la medida cautelar (Veramendi, 2010); diferimiento que se justifica porque la medida cautelar obedece a la urgencia de proteger la relación material objeto del proceso frente a los altamente probables actos de mala fe del ejecutado (Monroy, 2007); así, la postergación o diferimiento de la defensa no lesiona derechos fundamentales pues se basa en la ponderación entre las necesidades de tutela del demandante y el demandado, otorgando a éste último la posibilidad de plantear su oposición después de ejecutada la medida, para así generar un equilibrio razonable entre las partes (Ortells, 2000); entonces, como refiere Peyrano (como se citó en Ledesma, 2014) no es en realidad una excepción al contradictorio, pues su restricción no es definitiva, sino temporal debido a que posteriormente aparece la bilateralidad una vez dejada de ser adversa a los fines del proceso.

El ejercicio del derecho de defensa, entonces, no puede suprimirse, pero si restringirse o postergarse para un tiempo u oportunidad distinta a la que normalmente sería dentro del contradictorio, diferimiento que se justifica por exigencias propias existentes en los procesos cautelares donde es de observancia la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la razonabilidad de la medida.

Una expresión del derecho de defensa sustentado en el principio *audiatur et altera pars*, es la contestación de demanda, pues admitida la demanda, el juez la pone en conocimiento de la otra parte a fin de que ejerza su derecho de defensa a través de la contestación de demanda, luego, contestada o no, se continúa con las respectivas etapas procesales.

Por otro lado, una expresión del derecho de defensa en el proceso cautelar o in audita pars, es la oposición del ejecutado frente a la pretensión cautelar amparada por el juez (Castillo, 2015); es la expresión de voluntad del demandado ante el órgano jurisdiccional tendiente a obstruir la pretensión cautelar del demandante, con ella no se cuestiona una resolución judicial, sino que se contradice la tesis de la otra parte (Ortells, 2002); de esta manera, en el proceso cautelar, el derecho de defensa del afectado con la medida cautelar queda diferido hasta después de la ejecución de la misma, pues una vez ejecutada, él tiene habilitado su derecho de contradecir la tesis cautelar a fin de obtener pronunciamiento en la misma instancia, (Martínez, 2017); así, permite al afectado alegar aspectos que no fueron analizados al dictarse la medida cautelar, a fin de desacreditar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora o la razonabilidad que en un inicio fueron estimados por el juez; por ello, se afirma que la naturaleza de la oposición es la de una contradicción, pues le permite al afectado ejercer su derecho de defensa frente a la solicitud cautelar amparada y ejecutada (Guerra, 2016); así lo establece el artículo 637 del Código Procesal Civil al precisar que después de dictada la medida cautelar, la parte afectada podrá formular oposición para efectuar la defensa pertinente.

De esta manera, la oposición se convierte en el mecanismo que garantiza y preserva el derecho de defensa del afectado en los procesos in audita pars, el mismo que hasta ahora resulta ser el mecanismo más salomónico para garantizar el derecho de la parte solicitante y el derecho de defensa de la parte afectada con la medida cautelar, pues al dictarse la medida cautelar se está protegiendo el derecho invocado por la parte demandante, pero a su vez también se está garantizando el derecho de defensa del afectado con la medida, esto a través de la oposición, así pues la medida cautelar se dicta y ejecuta en armonía con el derecho de defensa del afectado.

Por otro lado, en países como Chile existe el proceso monitoreo, el mismo que en términos de Montero (2014) es un instrumento procesal destinado a crear sumarísimamente un título ejecutivo sin tener la necesidad de acudir a un proceso ordinario previo, con el solo sustento de que la parte demandante

presente al juez un documento con el cual sustente una deuda dineraria por cualquier monto, líquida, determinada, vencida y exigible. Sin embargo, para alcanzar dicha finalidad, restringe el derecho de defensa, ya que al postergar el ejercicio del derecho de contradicción del demandado, se invierte la iniciativa del contradictorio.

Este tipo de proceso inicia con un mandato de pago dirigido al demandado, sustentado en la afirmación del demandante respecto a la existencia de un crédito a su favor; luego, si el deudor no se opone, dicho mandato se transforma en definitivo obteniéndose así un título ejecutivo. Caso contrario, si el demandado se opone al mandato inicial, el proceso culmina y da paso, en caso lo desee el demandante, al proceso de conocimiento ordinario.

Así, para Ariano (2017), si bien el proceso monitoreo modifica la oportunidad del contradictorio, que es lo nuclear del verdadero método procesal; sin embargo, no lo suprime sino que únicamente difiere la oportunidad del mismo, pues el demandado tiene la oportunidad de oponerse al mandato de pago y de esta manera reestablecer la normalidad del contradictorio.

Por otro lado, **en lo referente al ámbito de tutela especial**, el artículo 6-A: 6-A.1 del Reglamento de la Ley N° 30364 lo define como el ámbito de actuación en el cual el juez de familia, tras conocer de la denuncia de violencia, dicta las medidas de protección o cautelares a favor de la presunta víctima de los hechos denunciados, a fin de proteger su vida e integridad, así como garantizar su bienestar y protección social.

Su característica esencial gira en torno a su finalidad protectora, pues en ella la actividad probatoria no está destinada a acreditar los hechos de violencia denunciados, sino que, conforme lo establece el artículo 10.2 del Reglamento de la Ley N° 30364, está destinada a dictar medidas de protección o cautelares a partir de la actividad probatoria tendiente a acreditar el riesgo, la urgencia, la necesidad de la protección de la víctima y el peligro en la demora; es decir, busca aproximarse a la probable verdad judicial que pueda alcanzarse en la etapa de sanción.

Cabe destacar que Taruffo (2015) afirma que la teoría de la verdad judicial se sustenta en el correcto establecimiento de los hechos, la incorporación de los más relevantes elementos de prueba y la consecuente aplicación de las normas jurídicas sustantivas pertinentes, de tal manera que las decisiones judiciales resulten más justas, correctas y cercanas a la verdad.

Por ello es que en el ámbito de tutela, si bien no se va a determinar la verdad o falsedad de los hechos, pues ello corresponde al ámbito de sanción, lo cierto es que busca una aproximación lo más razonable posible a la verosimilitud de los hechos denunciados, para de esta manera determinar si resulta necesario o no emitir medidas de protección y/o cautelares a favor de la presunta víctima.

En lo referente a su naturaleza jurídica, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la resolución de vista número DOS del 11 de junio del 2018, emitida en el Expediente N° 005098-2017-93-1601-JR-FC-02, señaló que la Ley 30364 exige al juez una respuesta casi inmediata frente a las denuncias por violencia a fin de proteger a las víctimas, de allí que el proceso y las medidas de protección tengan una naturaleza sui generis y especial, regida por principios inherentes y únicos que buscan proteger a las víctimas.

Este ámbito se inicia con la denuncia sobre hechos de violencia, la misma que conforme al artículo 15 de la Ley N° 30364, puede interponerse de manera escrita o verbal por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor ante la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial; luego, dicha denuncia es remitida al Juez de familia, quien programa audiencia de decisión de medidas de protección y cautelares, citando en algunos casos a ambas partes y en otros solo a la víctima.

Las medidas de protección, según Cerda y Felices (2011) y Salas (2019), son órdenes dictadas por el juez, las mismas que pueden ser de oficio o a pedido de parte (Ledesma, 2017) cuyo objetivo fundamental es garantizar que la víctima no vuelva a ser maltratada (Straka, 2015) y a diferencia de las medidas cautelares en las que se otorga tutela anticipada, en las medidas



de protección se otorga tutela de prevención, de allí que no es necesaria una minuciosa actividad probatoria, pues en algunos casos basta la mera alegación para dictarlas (Ledesma, 2017).

Entonces, la diferencia entre las medidas cautelares y las medidas de protección viene marcada porque en la primera se brinda tutela anticipada, es decir un pronunciamiento sobre el altamente probable sentido de la futura decisión final; mientras que en la segunda, no se busca determinar cómo es que probablemente culminará el proceso, esto es si con una decisión favorable o no al agraviado, sino que se sustenta en una tutela de prevención lo que implica analizar el estado actual de las cosas y determinar si la parte denunciante se encuentra en riesgo de ser agredida o no.

En lo referente a las medidas cautelares, Montero (como se citó en Sevilla, 2014) sostiene que existe la posibilidad que no se satisfaga las pretensiones planteadas en sede judicial, debido a que por su propia naturaleza, estos procesos requieren de un amplio decurso del tiempo para su resolución final, tiempo que por sí solo y/o en mérito a una indebida conducta del demandado, pueden convertir en inservible la decisión final que el juez dicte. Sin embargo, para paliar esta deficiencia, aparece la denominada cautela o subfunción jurisdiccional de seguridad que se efectúa mediante el proceso cautelar. De esta manera, el fin de la tutela cautelar es bloquear los peligros que pudieran surgir a raíz de la duración del proceso, a fin de hacer posible la efectividad y ejecución de la tutela jurisdiccional sentencial, sea de condena, constitutiva o simplemente declarativa (Ariano, 2003). Así, busca garantizar la eficacia de la decisión judicial final (Castillo, 2015) y justifica su existencia a partir de la necesidad social de contar con una justicia capaz de otorgar respuestas rápidas y eficaces que bloqueen indebidas dilaciones frente a una sociedad que no acepta excusas en cuanto a las demoras judiciales (Valle, 2010); por lo que, la razón de ser del proceso cautelar es garantizar la eficacia del acto jurisdiccional pretendido (Ledesma, 2014).

En este contexto, el derecho a la tutela cautelar es fundamental porque le asiste a todos los ciudadanos interesados en solicitar y obtener la emisión y

ejecución de las medidas cautelares que permitan garantizar la efectividad de la sentencia a emitirse (Priori, 2005).

Se caracterizan por importar un prejuizgamiento pues el juez dictará la medida sobre la base de una conclusión anticipada del probable resultado final en el proceso; sin embargo, ello no significa que el sentido final asuma inevitablemente dicho prejuizgamiento, pues atendiendo al decurso procesal, el fallo final puede desestimar la pretensión en debate (Ledesma, 2008).

En efecto, el juzgador al amparar la solicitud cautelar está anticipando el altamente probable resultado final del proceso, es decir, constituye el pronóstico de una futura sentencia estimatoria. No obstante ello, el desarrollo del debate procesal puede destruir dicha probabilidad y obtener como resultado una decisión final completamente opuesta a la pronosticada, lo cual resulta plenamente válido, ya que la medida cautelar no vincula ni ata al juzgador a emitir una decisión final necesariamente alineada al sentido de la decisión cautelar, máxime si se tiene en cuenta que el proceso cautelar es un instrumento del proceso principal, pero nunca un fin (Martínez, 2017).

Son medidas provisorias ya que por sí solas no tienen un fin, sino que sirven a un proceso principal y dependen de las contingencias de este.

Son instrumentales, pues la tutela cautelar es dependiente de la tutela principal y tiene una relación de servicio con ésta última; asimismo, es una tutela mediata del derecho sustancial, ya que más allá de buscar la realización de justicia, su finalidad inmediata es ser la herramienta que asegure el cumplimiento eficaz de la futura decisión final; de tal manera que su propósito es generar las condiciones necesarias para el éxito de la decisión definitiva a expedirse en el proceso principal; de esta manera la tutela cautelar es una tutela mediata pues no busca realizar justicia sino que coadyuva a garantizar el eficaz desarrollo de la justicia; ello en la medida que el proceso principal es un instrumento del derecho sustantivo, mientras que la medida cautelar es el instrumento del proceso principal (Calamandrei, 2005); entonces, como refiere Ortels (como se cita en Del Río, 2016) es

instrumental porque va a facilitar la eficacia de la resolución final, pero nunca aportará los elementos de la constitución de la decisión principal.

Son variables debido a que pueden ser modificadas (variabilidad positiva) o suprimidas (variabilidad negativa), atendiendo al principio *rebus sic stantibus*, cuando se transforma la situación de hecho que originó su emisión (Montero, Gomez, Monton y Barona, 2003).

Para la emisión de estas medidas, Guarriniello (como se cita en Del Río Labarthe, 2016) sostiene que el juzgador habrá de realizar un juicio de verosimilitud respecto del derecho cuya existencia se intenta declarar en la sentencia definitiva; de tal manera que no se valora la certeza de la responsabilidad penal, dado que ello queda reservado para la sentencia final, por el contrario, lo que se asume en este aspecto cautelar es una hipótesis que podrá comprobarse en la resolución sentencial.

Del mismo modo, debe existir peligro en la demora, el cual consiste en el temor razonable de que en el decurso procesal se pueda modificar el statu quo por el deudor, provocándose un grave daño jurídico al acreedor, se refiere a los efectos negativos que generaría el tiempo requerido por el proceso para expedirse un fallo final, pues es justamente a raíz del decurso del tiempo que los efectos del fallo resultarían inoperantes; dado que el tiempo es la imperfección más esencial e inevitable del proceso (Priori, 2007); no obstante ello, este requisito no se refiere a la demora como un retraso fuera de lo normal, sino como el tiempo necesario para realizar los actos que componen el proceso, tiempo que per se genera oportunidades para que el investigado efectúe actos destinados a la frustración de la eventual ejecución de la sentencia condenatoria; por ello es que el tiempo constituye un parámetro para determinar si existe un riesgo de frustración procesal (Pujadas, 2007).

Asimismo, debe concurrir el requisito de la razonabilidad, que se identifica con el concepto de proporcionalidad (Del Río, 2016), que a su vez se conceptúa como el margen de discrecionalidad judicial en tanto el Juzgador debe ponderar la adecuación de la medida cautelar con el fin que se persigue

(Pujadas, 2007), en función a la idoneidad, intervención mínima y proporcionalidad en *strictu sensu*.

Conforme al artículo 16 de la Ley N° 30364, en caso de que los hechos denunciados constituyan riesgo leve, moderado o severo, el análisis sobre la emisión de medidas de protección y cautelares es realizado en la audiencia especial; sin embargo, solo en el caso de riesgo severo, el Juez está facultado para prescindir de la audiencia y dictar inmediatamente medidas de protección.

Por lo general, la audiencia suele entenderse como el acto procesal, usualmente público, en el que un juez o colegiado escucha las pretensiones y fundamentos de las partes para luego resolver las controversias e incertidumbres planteadas (Enciclopedia Jurídica, 2019); resultando ser el mecanismo más eficiente para desarrollar los principios de inmediación y concentración, para lo cual es importante la presencia de las partes (Polanco, 2019); asimismo, su existencia viene preestablecida por la ley y se realiza en la hora y día programada (Diccionario Jurídico del Poder Judicial del Perú, 2019).

No obstante ello, el artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 30364 no establece de manera clara si se debe citar al denunciado a la audiencia de medidas de protección o cautelares; asimismo, su artículo 36 establece que la audiencia se desarrolla garantizando que la víctima esté libre de cualquier forma de intimidación o violencia de parte del denunciado, por lo que la medida más efectiva para tal fin es la ausencia del denunciado en la audiencia, lo que en buena cuenta significa el no emplazamiento del denunciado a la audiencia, posición que resulta concordante con el artículo 25 de la Ley N° 30364 que establece que en la audiencia está prohibida la confrontación y conciliación entre víctima y agresor.

Ahora bien, conforme al artículo 16-C de la Ley N° 30364, la resolución que emite (sea o no en audiencia) pronunciamiento por las medidas de protección o cautelares, es apelable en la misma audiencia o dentro de los tres días posteriores de ser notificada, sin efecto suspensivo.

La apelación es un recurso superior basado en el principio de pluralidad de instancias y garantiza el derecho fundamental de acceso al recurso y, por ende, a la revisión de la decisión judicial por un órgano o instancia superior (Guerra, 2016); es una garantía constitucional en tanto es el medio impugnatorio del que se encuentran previstos los sujetos procesales para cuestionar la decisión de un juez, buscando se revoque total o parcialmente por el superior jerárquico (Rioja, 2016); para ello, el recurrente tiene que expresar y sustentar los agravios que le causan la resolución apelada, teniendo en cuenta que el agravio es un elemento característico y fundamental de la apelación, que no viene a ser otra cosa que el perjuicio concreto sufrido por el sujeto a raíz de la decisión emitida por el juzgador, basada en la errónea valoración de la prueba, interpretación de las disposiciones, etc.

En lo **referente al término “incidencia”**, el Diccionario de la Real Academia Española (2020) lo define como **influencia o repercusión**; es por ello que en el presente trabajo se investigó el grado de influencia o repercusión del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado, al amparo de un modelo correlacional, que según Yengle (2020) mide el grado o intensidad de relación entre variables.

### III. METODOLOGÍA

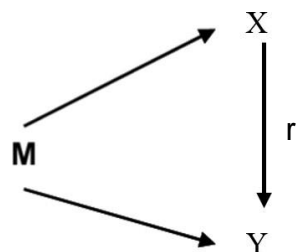
#### 3.1. Tipo y Diseño de Investigación

**Tipo de investigación:** Es no experimental, porque no se manipuló las variables y sólo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.

**Diseño de investigación:** es correlacional causal porque se investigó el ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado, en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, a fin de proponer una solución al problema advertido.

Según el enfoque de la investigación es mixta porque se emplearon cuestionarios de encuesta para recabar datos con medición numérica y, se emplearon guía de entrevista y guía de análisis documental para recabar datos sin medición numérica, todos ellos referidos al ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado, en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, con la finalidad de desarrollar capacidades de comprensión, descripción y teorización relacionados al tema de estudio.

Estableciéndose el siguiente esquema:



Dónde:

M: Muestra: 18 Jueces de la Corte Superior de Justicia de la Libertad con competencia para conocer el ámbito de tutela especial.

X: Variable x (independiente): ámbito de tutela especial

Y: Variable y (dependiente): derecho de defensa del denunciado

r: Correlación entre dichas variables

## **3.2 Variables y Operacionalización**

### **3.2.1. Variable Independiente**

Se trata del ámbito de tutela especial

#### **Definición conceptual:**

(...) formular una denuncia por violencia familiar puede ser por medios escritos u orales y las instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y Juzgados de Familia están en el deber de atender y brindar acciones de protección a todas aquellas (...) víctimas de violencia o tentativa de feminicidio. (...) la denuncia puede ser hecha (...) también por terceros; (...) se debe tener en cuenta los grados de violencia (...) y de acuerdo a ello los operadores de justicia y las autoridades pertinentes deberán actuar de manera inmediata en plazos de 24 y 48 horas como máximo y en forma inaplazable. En caso de flagrancia delictiva, la Policía Nacional deberá actuar deteniendo al agresor de inmediato (...), y quizá lo más importante, (...) es que la víctima puede denunciar funcionalmente a quien no le brinde la atención inmediata, oportuna u obstruye los procesos que se deben seguir en estos casos. (Infante, 2019, p. 2).

**Definición operacional:** En el Distrito Judicial La Libertad, el proceso denominado ámbito de tutela especial, se inicia con la denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, luego el juez de familia cita a audiencia donde decide sobre las medidas de protección y/o cautelares necesarias para proteger la vida e integridad de las víctimas, así como para garantizar su bienestar y protección social. Frente a ello, el denunciado y afectado con dichas medidas puede formular apelación. La variable está conformada por las siguientes dimensiones: denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, medidas de protección, medidas cautelares, audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares e impugnación de la resolución que emite medidas de protección y/o cautelares.

**Indicadores:** Requisitos de la denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; naturaleza, presupuestos y alcances de las

medidas de protección; presupuestos y alcances de las medidas cautelares; desarrollo de la audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares; presupuestos de la impugnación de la resolución que emite medidas de protección y/o cautelares.

**Escala de medición:** ordinal (para la encuesta)

### **3.2.2. Variable dependiente**

Es el derecho de defensa del denunciado.

**Definición conceptual:** El derecho de defensa es una garantía de alcance constitucional atribuible a toda persona con interés directo en la resolución jurídica del proceso (penal) para comparecer a lo largo de todo el proceso, a fin de defender con eficacia sus intereses en juego. (Burgos, 2002).

**Definición operacional:** La ley 30364 y su reglamento establecen que la audiencia del ámbito de tutela se realiza sin la presencia del denunciado, y si está disconforme con las medidas de protección emitidas en dicha audiencia, puede apelar. La variable cuenta con las siguientes dimensiones: contenido esencial del derecho de defensa, manifestaciones del derecho de defensa y restricciones al derecho de defensa.

**Indicadores:** Contenido esencial del derecho de defensa, principio de contradicción, derecho a ser informado de la acusación; manifestaciones del derecho de defensa, contestación de hechos denunciados; restricciones al derecho de defensa, procesos inaudita parts, procesos monitoreos.

**Escala de medición:** ordinal.

## **3.3. Población, muestra y muestreo**

### **Población:**

Para el logro de la realidad problemática expuesta se tuvo que fijar una Población-muestral, que sirvió para aplicar una encuesta a los 18 Jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con competencia para conocer el ámbito de tutela especial; de los cuales 9 son Jueces de familia con sub



especialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y los otros 9 son jueces superiores civiles.

**Muestreo:**

Se empleó el muestreo no probabilístico puesto que se utilizó como muestra toda la población.

**Unidad de análisis:**

Cada juez de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con competencia para conocer el ámbito de tutela especial, cada experto entrevistado y cada expediente o escrito estudiado en función a las incidencias relacionadas al estudio.

### **3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

#### **3.4.1. Técnicas:**

Se aplicó **encuesta** a los 18 Jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con competencia para conocer el ámbito de tutela especial, se aplicó **entrevista** a 5 expertos en el ámbito de tutela especial y se realizó **análisis documental** de resoluciones judiciales así como escritos de las partes referidos al ámbito de tutela especial, todo ello con el propósito de determinar su incidencia en el derecho de defensa del denunciado.

#### **3.4.2. Instrumento:**

Se utilizó el **cuestionario de encuesta**, validado por los expertos Dr. Luis Alberto Aguirre Bazán, catedrático en investigación; Dr. Jhon Elionel Matienzo Mendoza, Director de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo – Trujillo; Dr. Juan Virgilio Chunga Bernal, Juez Superior Titular y Presidente de la Comisión Distrital de Implementación de la Ley N° 30364 en la Corte Superior de Justicia de La Libertad; Dr. Gilmer Alarcón Requejo, investigador y docente universitario y el Dr. José Luis Tejada Ruiz, docente universitario. Además, para su **confiabilidad** se tuvo como guía la Escala

Alfa de Cronbach, obteniéndose el valor de 0.978560467, resultado que demuestra un alto nivel de confiabilidad del instrumento.

Asimismo, se utilizó la **guía de entrevista** y la **guía de análisis documental**.

### 3.5. Procedimientos

Para la variable independiente: ámbito de tutela especial, el instrumento se conformó por 5 dimensiones como son: denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, medidas de protección, medidas cautelares, audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares, impugnación de la resolución que emite medidas de protección y/o cautelares; integradas por 2, 6, 4, 5 y 3 ítems respectivamente a fin de ser evaluados en el instrumento aplicado para determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado.

El ámbito de tutela especial fue valorado a partir de ítems con alternativas ordinales como son: nunca, a veces y siempre y sus respectivos equivalentes cuantitativos como son:

Niveles	Equivalente
Nunca	0
A veces	1
Siempre	2

#### El ámbito de tutela especial

Dimensiones	Ítems
Denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar	Del 01 al 02
Medidas de protección	Del 03 al 08
Medidas cautelares	Del 09 al 12

Audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares	Del 13 al 17
Impugnación de la resolución que emite medidas de protección y/o cautelares	Del 18 al 20

Para la variable dependiente: derecho de defensa del denunciado, el instrumento se conformó por 3 dimensiones como son: contenido esencial del derecho de defensa, manifestaciones del derecho de defensa y restricciones al derecho de defensa; integradas por 8, 4 y 8 ítems respectivamente a fin de ser evaluados en el instrumento aplicado para determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado.

El derecho de defensa del denunciado fue valorado a partir de ítems con alternativas ordinales como son: nunca, a veces y siempre y sus respectivos equivalentes cuantitativos como son:

<b>Niveles</b>	<b>Equivalente</b>
Nunca	0
A veces	1
Siempre	2

#### **Derecho de defensa del denunciado**

<b>Dimensiones</b>	<b>Ítems</b>
Contenido esencial del derecho de defensa	Del 21 al 28
Manifestaciones del derecho de defensa	Del 29 al 33
Restricciones al derecho de defensa	Del 34 al 40

### 3.6. Método de análisis de datos

• **Método estadístico:** Porque en la investigación se utilizó programas como el Microsoft Excel y SPSS V23 para procesar, describir y analizar la información obtenida con la encuesta y representarla a través de tablas y figuras; asimismo, se utilizó la escala Alfa de Cronbach, para determinar la confiabilidad del instrumento, obteniéndose que la confiabilidad del cuestionario de encuesta fue de 0.978560467, lo que demuestra un alto nivel de confiabilidad.

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left[ 1 - \frac{\sum s^2}{S_T^2} \right]$$

Dónde:

k= El número de ítems

$\sum s^2$ = Sumatoria de varianzas de los ítems

$s_T^2$ = Varianza de la suma de los ítems

$\alpha$  = Coeficiente de alfa de Cronbach

Por otra parte, como la muestra fue de 18 sujetos, es decir menor de 50, se empleó la prueba de normalidad Shapiro – Wilk a los valores numéricos de las variables y sus dimensiones, con el propósito de identificar si cumplen con las condiciones de normalidad, obteniéndose que ninguna de las variables tuvieron distribución normal.

$$W = \frac{\left( \sum_{t=2}^n a_t y_t \right)^2}{\sum_{t=1}^n (x_t - \bar{y})^2}$$

Dónde:

n= número de observaciones

$y_i$ = valores de la muestra

$a_i$ = coeficientes tabulados

Frente a ello, se empleó de la prueba de correlación no paramétrica Rho de Spearman para la prueba de hipótesis general y específica.

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dónde:

$r_s$ = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman

$d$ = Diferencia entre los rangos (X menos Y)

$n$ = Número de datos

- **Método Deductivo:** Porque la investigación parte del derecho de defensa en general hasta arribar de manera específica a la expresión del derecho de defensa de la persona procesada por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, conforme al proceso especial de la ley N° 30364 y su reglamento.

- **Método Teórico fundamentado:** Porque se analizó la teoría general del proceso, así como los fundamentos teóricos del derecho de defensa del proceso especial de la ley N° 30364 y su reglamento.

- **Método Hermenéutico Jurídico:** Porque se interpretó y comprendió el contenido normativo de los artículos de la ley N° 30364 y su reglamento, referidos al ámbito de tutela y el derecho de defensa.

### **3.7. Aspectos éticos**

Validez de la información: La información resulta válida y confiable porque se recabó de fuentes tales las bibliotecas de las Universidades Privadas y Nacional de Trujillo, así como las recientes publicaciones de editoriales como Instituto Pacífico, Gaceta Jurídica, repositorios de tesis oficiales de la Universidad Alicante de España, Universidad Complutense de Madrid, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad César Vallejo, artículos de revistas indexadas, entre otros; asimismo, la información obtenida de las resoluciones judiciales es real, del mismo modo que los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas.

Fuentes de información: Las tablas, figuras, citas y referencias bibliográficas se realizaron conforme a las normas internacionales APA.

Reserva de datos: no se contó con la autorización para la difusión de la identidad de los entrevistados y encuestados, quienes, por razón de su cargo, exigieron que su identidad se mantenga en reserva a efectos de evitar incurrir en responsabilidad frente a las instituciones que representan; de esta manera, los datos obtenidos a partir de esta investigación, que afectan la intimidad y privacidad de las personas intervinientes, quedan reservados solo para el investigador.

## IV. RESULTADOS

### 4.1. Descripción de resultados estadísticos

**4.1.1** Descripción de resultados de los niveles del ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado, en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

En la siguiente tabla se aprecian los valores obtenidos en los niveles del ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado.

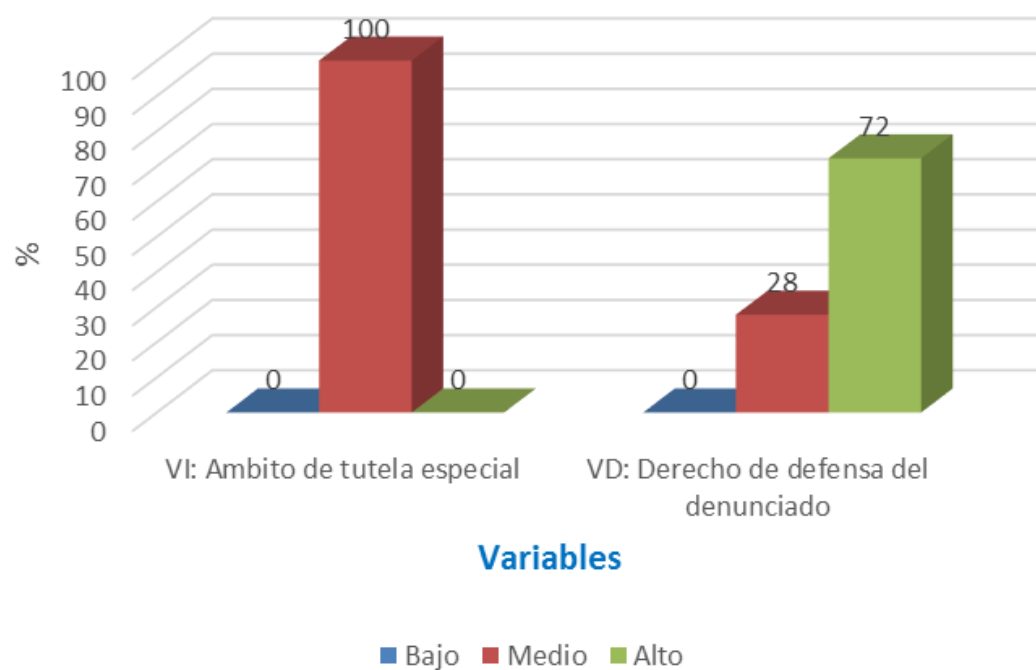
**Tabla 1**

*Comparación de los puntajes obtenidos del ámbito de tutela especial y el derecho de defensa del denunciado, en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.*

Niveles	VI: Ámbito de tutela especial		VD: Derecho de defensa del denunciado	
	F	%	F	%
Bajo	0	0%	0	0%
Medio	18	100%	5	28%
Alto	0	0%	13	72%
Total	18	100%	18	100%

**Fuente:** Encuesta efectuada del 03 de enero al 14 de abril del año 2020

**Interpretación:** En la tabla 1 y figura 1, se observa que el nivel que destaca en la variable independiente: ámbito de tutela especial, es el nivel medio con un 100%, mientras que los niveles bajo y alto obtuvieron 0%; mientras que en la variable dependiente: derecho de defensa del denunciado, predomina el nivel alto con un 72%, seguido del nivel medio con 28%, mientras que el nivel bajo obtuvo 0%.



**Figura 1.** Niveles del ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado, en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

**Fuente:** Tabla 1.



**4.1.2. Descripción de resultados de los niveles de las dimensiones del ámbito de tutela especial (variable independiente): denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, medidas de protección, medidas cautelares, audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares e impugnación de la resolución de medidas de protección y/o cautelares.**

En la siguiente tabla se aprecia la matriz con los niveles alcanzados en las cinco dimensiones del ámbito de tutela especial:

**Tabla 2**

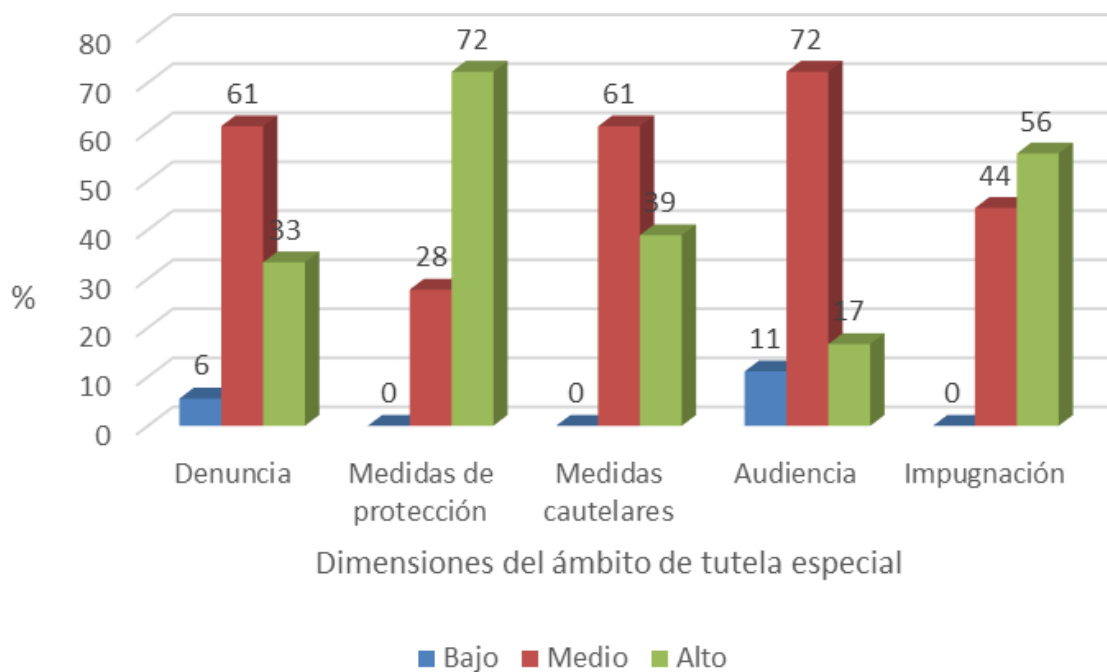
*Comparación de los puntajes de los niveles de las dimensiones del ámbito de tutela especial en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.*

Niveles	D1: Denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar		D2: Medidas de protección		D3: Medidas cautelares		D4: Audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares		D5: Impugnación de la resolución de medidas de protección y/o cautelares	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
<b>Bajo</b>	1	6%	0	0%	0	0%	2	11%	0	0%
<b>Medio</b>	11	61%	5	28%	11	61%	13	72%	8	44%
<b>Alto</b>	6	33%	13	72%	7	39%	3	17%	18	56%
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Encuesta efectuada del 03 de enero al 14 de abril del año 2020.

**Interpretación:** En la tabla 2 y figura 2, se observa que las 5 dimensiones del ámbito de tutela se encuentran mayormente ubicadas en los niveles medio y alto. Así, la dimensión *denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar* alcanzó el 61% en el nivel medio; la dimensión *medidas de protección*

alcanzó el 72% en el nivel alto; la dimensión *medidas cautelares* alcanzó el 61% en el nivel medio; la dimensión *audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares* alcanzó el 72% en el nivel medio; y, la dimensión *impugnación de la resolución que emite medidas de protección y/o cautelares* alcanzó el 56% en el nivel alto.



**Figura 2.** Niveles comparativos de las dimensiones del ámbito de tutela especial en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

**Fuente:** Tabla 2.

**4.1.3. Descripción de resultados de los niveles de las dimensiones del derecho de defensa del denunciado (variable dependiente): contenido esencial del derecho de defensa, manifestaciones del derecho de defensa y restricciones al derecho de defensa.**

En la siguiente tabla se aprecia la matriz con los niveles alcanzados en las tres dimensiones del derecho de defensa del denunciado:

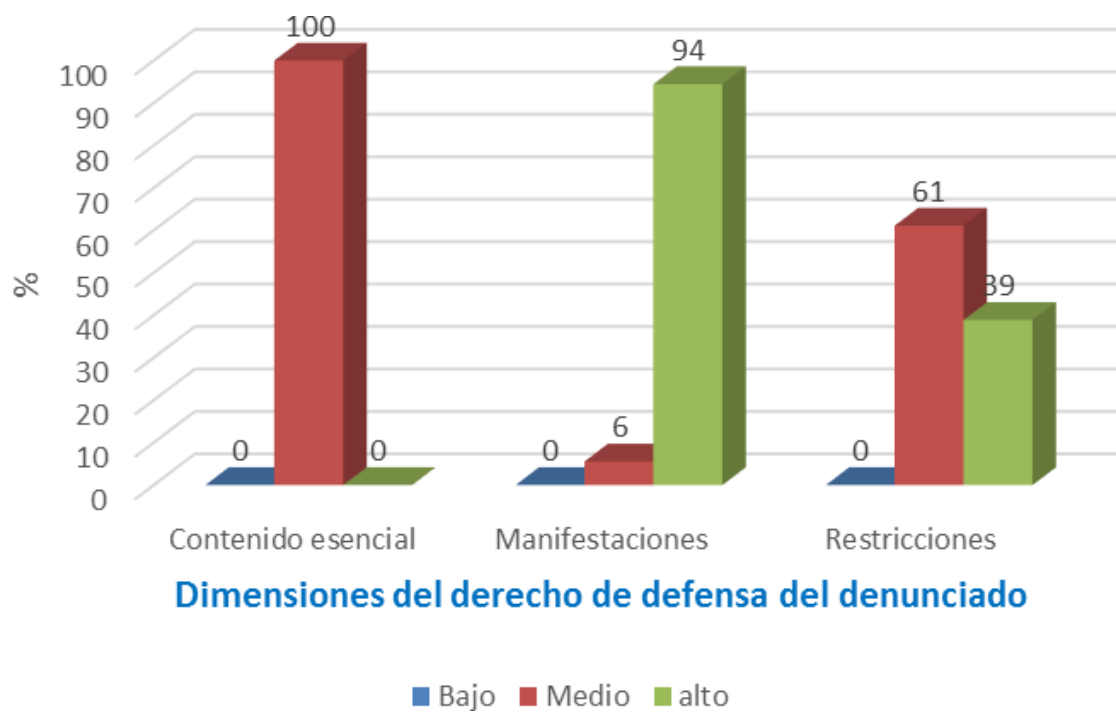
**Tabla 3**

*Comparación de los puntajes de los niveles de las dimensiones del derecho de defensa del denunciado (Ley 30364) en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019*

Niveles	D1: Contenido esencial del derecho de defensa		D2: Manifestaciones del derecho de defensa		D3: Restricciones al derecho de defensa	
	F	%	F	%	F	%
<b>Bajo</b>	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Medio</b>	18	100%	1	6%	11	61%
<b>Alto</b>	0	0%	17	94%	17	39%
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Encuesta efectuada del 03 de enero al 14 de abril del año 2020.

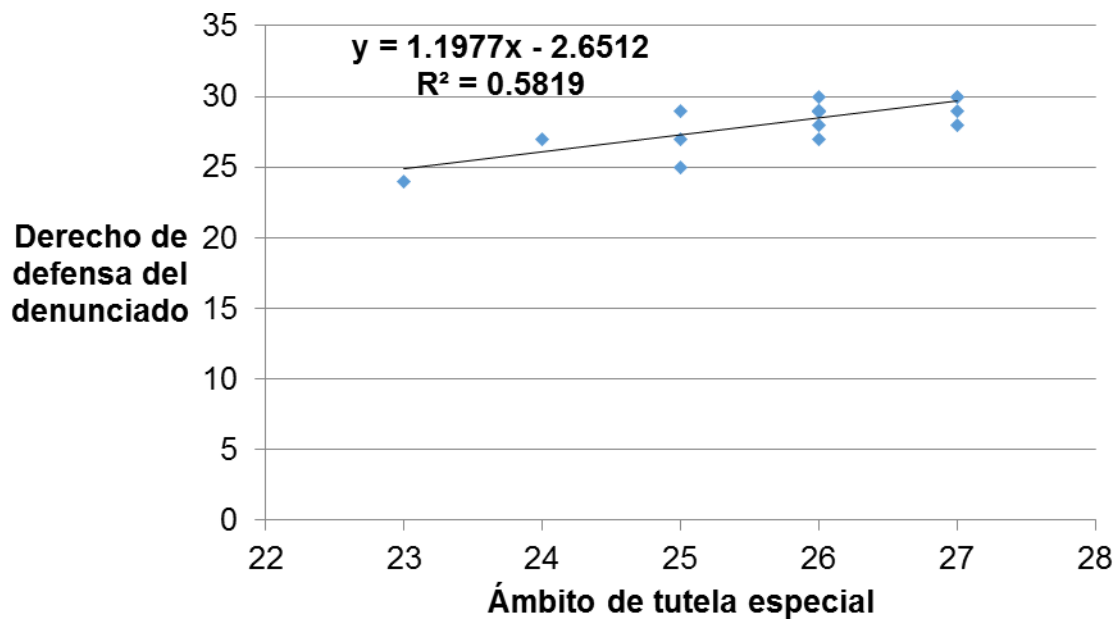
**Interpretación:** En la tabla 3 y figura 3, se observa que las 3 dimensiones del derecho de defensa se encuentran mayormente ubicadas en los niveles medio y alto. Así, la dimensión *contenido esencial del derecho de defensa* alcanzó el 100% en el nivel medio; la dimensión *manifestaciones del derecho de defensa* alcanzó el 94% en el nivel alto; y, la dimensión *restricciones al derecho de defensa* alcanzó el 61% en el nivel medio.



**Figura 3.** Niveles de las dimensiones del derecho de defensa del denunciado (Ley 30364) en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

**Fuente:** Tabla 3.

#### 4.1.4. Diagrama de dispersión de puntos



**Figura 4.** Diagrama de puntos, relación funcional y coeficiente de determinación

Según la Figura 4, asumiendo una relación funcional de regresión lineal, la relación que mejor se ajusta a los puntos es la recta  $Y = 2.65 + 1.19 X$ , con un coeficiente de determinación de  $R^2 = 0.58$ . Se puede interpretar, según esta ecuación de regresión lineal y el coeficiente de determinación, que el ámbito de tutela especial explica en 58% al derecho de defensa del denunciado, en el Distrito Judicial La Libertad, y el 42 % es explicado por otros factores.

La recta de relación nos muestra una relación positiva y directa, cuando los puntajes del ámbito de tutela especial aumentan, derecho de defensa del denunciado también aumenta.

La relación funcional que expresa la relación entre la variable independiente: “ámbito de tutela especial” y la variable dependiente: “derecho de defensa del denunciado” es:

Derecho de defensa del denunciado =  $1.1977 + 2.6512$  Ámbito de tutela especial

A mayor ámbito de tutela especial, mayor derecho de defensa del denunciado. Por cada punto que aumente el ámbito de tutela especial, el derecho de defensa se incrementará en 2.6512.

## 4.2. Contrastación de hipótesis

### 4.2.1. Pruebas de normalidad de las variables y sus dimensiones

**Tabla 4**

*Prueba de normalidad Shapiro – Wilk para una muestra*

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
<b>D1VI</b>	.280	18	.001	.820	18	.003
<b>D2VI</b>	.213	18	.031	.916	18	.108
<b>D3VI</b>	.197	18	.063	.901	18	.060
<b>D4VI</b>	.186	18	.099	.908	18	.080
<b>D5VI</b>	.297	18	.000	.844	18	.007
<b>Ámbito de tutela especial</b>	<b>.305</b>	<b>18</b>	<b>.000</b>	<b>.839</b>	<b>18</b>	<b>.006</b>
<b>D1VD</b>	.196	18	.065	.872	18	.019
<b>D2VD</b>	.281	18	.001	.776	18	.001
<b>D3VD</b>	.317	18	.000	.809	18	.002
<b>Derecho de defensa del denunciado</b>	<b>.291</b>	<b>18</b>	<b>.000</b>	<b>.829</b>	<b>18</b>	<b>.004</b>
a. Corrección de significancia Lilliefors						

**Interpretación:** La tabla 4 proporciona la prueba de normalidad Shapiro – Wilk ( $n < 50$ ), aplicada a los valores numéricos de las variables y sus dimensiones, con el propósito de identificar si cumplen con las condiciones de normalidad.

Para tal fin, se plantean las siguientes hipótesis:

Ho: Los puntajes tienen una distribución NORMAL

H<sub>1</sub>: Los puntajes NO tienen una distribución NORMAL

Decisión:

Si  $p > 0.05$ , se acepta  $H_0$ , es decir, los puntajes tienen distribución normal.

Si  $p < 0.05$ , se rechaza  $H_0$  y se acepta  $H_1$ , es decir, los puntajes no tienen distribución normal.

La variable independiente Ámbito de tutela especial, no tiene distribución normal ( $p=0.006 < 0.05$ ); y la variable dependiente Derecho de defensa del denunciado, tampoco tiene distribución normal ( $p=0.004 < 0.05$ ); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, los puntajes no tienen una distribución normal. Por ello, corresponde el empleo de la prueba de correlación no paramétrica Rho de Spearman.

#### 4.2.2. Pruebas de hipótesis general entre la variable independiente y la variable dependiente

Formulamos las hipótesis estadísticas:

**Hi:** Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

**Ho:** No existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

**Tabla 5**

*Correlación Rho de Spearman entre el ámbito de tutela especial y el derecho de defensa del denunciado*

Correlaciones				
			Ámbito de tutela especial	Derecho de defensa del denunciado
Rho de Spearman	Ámbito de tutela especial	Coeficiente de correlación	1.000	,649**
		Sig. (2-tailed)		.004
		N	18	18
	Derecho de defensa del denunciado	Coeficiente de correlación	,649**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.004	
		N	18	18
		**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed).		



**Interpretación:** La tabla 5 muestra la correlación Rho de Spearman entre los resultados de las variables en estudio, que a su vez permite apreciar la existencia de una correlación positiva altamente significativa entre el ámbito de tutela especial y el derecho de defensa del denunciado ( $R_s=0,649$ ;  $p<0,01$ ).

El valor 0,649 permite apreciar que el grado de correlación es alto y considerando que la correlación es positiva, la relación entre las variables es directa. La significación bilateral  $P\text{-valor}<0,01$  nos da evidencia altamente significativa suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa.

Hipótesis General:

**H<sub>i</sub>:** Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

#### 4.2.3. Prueba de primera hipótesis específica

Formulamos las hipótesis estadísticas:

**Hi:** Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

**Ho:** No existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

**Tabla 6**

*Correlación Rho de Spearman entre el ámbito de tutela especial y el contenido esencial derecho de defensa del denunciado*

Correlación				
			Ámbito de tutela especial	contenido esencial del derecho de defensa
Rho de Spearman	Ámbito de tutela especial	Coeficiente de correlación	1.000	,631**
		Sig. (2-tailed)		.005
		N	18	18
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed).				

**Interpretación:** La tabla 6 muestra la correlación Rho de Spearman entre los resultados de la variable independiente: “ámbito de tutela especial” y la primera dimensión de la variable dependiente: “contenido esencial del derecho de defensa”, que a su vez permite apreciar la existencia de una correlación positiva altamente significativa entre el ámbito de tutela especial y el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado ( $R_s=0,631$ ;  $p<0,01$ ).

El valor 0,631 permite apreciar que el grado de correlación es alto, y considerando que la correlación es positiva, la relación entre la variable y la dimensión de la

variable dependiente es directa. La significación bilateral  $P\text{-valor} < 0,01$  nos da evidencia altamente significativa suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa.

Primera hipótesis específica:

**Hi:** Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

#### 4.2.4. Prueba de segunda hipótesis específica

##### Formulamos las hipótesis estadísticas

**Hi:** Existe incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

**Ho:** No existe incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

**Tabla 7**

*Correlación Rho de Spearman entre el ámbito de tutela especial y las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado.*

Correlación				
			Ámbito de tutela especial	manifestaciones del derecho de defensa
Rho de Spearman	Ámbito de tutela especial	Coeficiente de correlación	1.000	<b>,520*</b>
		Sig. (2-tailed)		.027
		N	18	18
*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed).				

**Interpretación:** La tabla 7 muestra la correlación Rho de Spearman entre los resultados de la variable independiente: “ámbito de tutela especial” y la segunda dimensión de la variable dependiente: “manifestaciones del derecho de defensa”, que a su vez permite apreciar la existencia de una correlación positiva moderada altamente significativa entre el ámbito de tutela especial y las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado ( $R_s=0,520$ ;  $p < 0,01$ ).

El valor 0,520 permite apreciar que el grado de correlación es moderado, y considerando que la correlación es positiva, la relación entre la variable independiente y la dimensión de la variable dependiente es directa. La significación bilateral  $P\text{-valor} < 0,01$  nos da evidencia altamente significativa suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa.

Segunda hipótesis específica:

**H<sub>i</sub>:** Existe incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

#### 4.2.5. Prueba de tercera hipótesis específica

##### Formulamos las hipótesis estadísticas

**Hi:** Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

**Ho:** No existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

**Tabla 8**

*Correlación Rho de Spearman entre el ámbito de tutela especial y las restricciones del derecho de defensa del denunciado.*

Correlación				
Rho de Spearman	Ámbito de tutela especial	restricciones del derecho de defensa		
		Ámbito de tutela especial		
		restricciones del derecho de defensa		
		restricciones del derecho de defensa		
Rho de Spearman	Ámbito de tutela especial	Coeficiente de correlación	1.000	<b>-.128</b>
		Sig. (2-tailed)		.613
		N	18	18

**Interpretación:** La tabla 8 muestra la correlación Rho de Spearman entre los resultados de la variable independiente: “ámbito de tutela especial” y la tercera dimensión de la variable dependiente: “restricciones del derecho de defensa”, que a su vez permite apreciar que no existe correlación entre el ámbito de tutela especial y las restricciones del derecho de defensa del denunciado ( $R_s = -0,128$ ;  $p > 0.05$ ), por lo tanto no se acepta la tercera hipótesis específica de investigación.

Tercera hipótesis específica: **Ho:** No existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

### **4.3. Descripción de resultados cualitativos en relación al primer objetivo específico: Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019**

#### **4.3.1. Entrevistas**

A la pregunta: ¿Citar al denunciado a la audiencia de tutela especial garantiza el contenido esencial de su derecho de defensa, específicamente del contradictorio y el derecho a ser informado de la acusación?:

- El Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (en adelante, el Juez Superior) respondió que: Si se cita al denunciado a la audiencia, entonces se está garantizando su derecho al contradictorio, pues se le está dando la posibilidad de que en la audiencia refute las acusaciones hechas en su contra; por otro lado, la sola citación no garantiza el derecho a ser informado de la acusación, pues ello se verá garantizado siempre y cuando se haya puesto oportunamente en conocimiento del denunciado los hechos que se le imputan, lo cual debería de ordenarse en la misma resolución que cita a audiencia, tal como ocurre con la notificación del auto admisorio en los procesos civiles.
- El primer Juez Mixto de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (en adelante el primer Juez Mixto), respondió que: La citación a audiencia trae consigo dos aspectos jurídicos claros, el primero es que se pone en conocimiento del denunciado la existencia de una denuncia en su contra por violencia, la segunda es que se le notifica para que participe en la audiencia a fin de que ejerza su derecho a la contradicción; sin embargo, no siempre se cita al denunciado.
- El segundo Juez Mixto en la Corte Superior de Justicia de La Libertad (en adelante segundo juez mixto), respondió que: En teoría si, pues con la citación se informa al denunciado de la acusación en su contra y se le permite participar en la audiencia; sin embargo, en la práctica ello ocurre raras veces, pues dada la carga procesal, la escasez de personal, la zona geográfica y la obligación de cumplir con los plazos para la emisión de medidas de protección,

la propia ley permite no citar al denunciado y de citarlo éste contará con poco tiempo para preparar su defensa.

- El Juez de Paz Letrado en la Corte Superior de Justicia de La Libertad (en adelante juez de paz letrado), respondió que: En los casos en los que se cita al denunciado, pues si se garantiza su derecho de defensa; sin embargo, no siempre es lo más adecuado, pues su citación a audiencia pondría en peligro la finalidad del ámbito de tutela que es proteger a la víctima, quien estaría expuesta al presunto agresor y de esta manera cambiar su versión de los hechos.

A la pregunta: De citar a audiencia al denunciado ¿Qué medidas emplea para evitar la confrontación y revictimización?:

- El Juez Superior Titular respondió que: A nivel de Sala hemos realizado audiencias especiales a fin de tener mayores elementos de convicción para resolver las apelaciones planteadas; sin embargo, la presencia de ambas partes hace inevitable la confrontación e incomodidad entre ellos mismos, indistintamente de si el caso amerita o no medidas de protección; esto se debe principalmente a la actual normatividad que existe respecto al ámbito de tutela.
- El primer Juez Mixto respondió que: En cumplimiento de la Ley N° 30364 no cito al denunciado cuando se trata de casos de riesgo severo o moderado; sin embargo, en los casos de riesgo leve si cito al demandado, y la única medida que este esquema procesal nos permite es dirigir la audiencia exhortando a las partes evitar una actitud conformacional inadecuada bajo apercibimiento de multa, aunque en el fondo, el propio ejercicio del contradictorio implica confrontación de posiciones opuestas.
- El segundo juez mixto respondió que: Aun cuando se trata de casos de riesgo moderado, no se suele citar al denunciado debido a la carga procesal, lejanía del domicilio del denunciado, etc; sin embargo, en los casos de riesgo leve que se cita al denunciado, la confrontación es inevitable, pues la parte denunciada y denunciante se encontrarán en el juzgado y más allá de si



emplean o no medios violentos para confrontarse, la experiencia permite apreciar casi siempre un ambiente tenso entre ambos.

- El juez de paz letrado respondió que: Se debe dirigir la audiencia evitando en lo posible que las partes se confronten y las preguntas que se formulen no deben conllevar a una revictimización; sin embargo, cabe precisar que dichas medidas por lo menos ocurren en el juzgado, ya que antes o después de la realización de la audiencia, el comportamiento de las partes es incierto.

A la pregunta: ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en el ámbito de tutela de la ley 30364 en su calidad de abogado de la parte denunciada o de la parte agraviada?, El abogado Juan Alberto Castañeda Méndez (en adelante abogado Castañeda), Director del Instituto Apex Iuris y ponente en temas relacionados a la Ley N° 30364, respondió que: La ventaja y/o desventajas dependerá del tipo de riesgo considerado en la ficha de valoración de riesgo (leve, moderado o severo). Dependiendo del riesgo, hay derechos de la parte denunciada que se encuentran restringidos o limitados de manera razonable, por la naturaleza del hecho.

A la pregunta: Cuando asume el rol de abogado del denunciado ¿Cuál es la estrategia de defensa que emplea para garantizar el contenido esencial de su derecho de defensa?, El abogado Castañeda respondió que: La estrategia responde al tipo de riesgo, en tanto que el derecho a la defensa no se comprende del mismo modo. Por ejemplo, no podría solicitar actuación de pruebas periféricas cuando existe un examen médico que certifica la severidad de la violencia física. Ahí no puedo discutir que se está vulnerando el derecho a la defensa en su vertiente del contradictorio o actuación probatoria, toda vez el derecho de defensa se desplaza a otra etapa procesal pertinente para su ejercicio.

#### **4.3.2. Análisis documental**

Se aplicó el instrumento de investigación a las resoluciones judiciales relacionadas al objeto de estudio, emitidas por los Jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con competencia para conocer el ámbito de tutela especial regulado por la Ley N° 30364 y su Reglamento, durante el 2019, así como a los escritos de las

partes, con el propósito de determinar su incidencia en el derecho de defensa del denunciado.

Cabe precisar que se realizó la censura de determinados datos debido a que no se obtuvo la autorización para su divulgación.

**El documento N° 1** (Anexo 14) es la resolución número UNO del 20 de junio del 2019, emitida por el 15° Juzgado de Familia – Sub especialidad en violencia contra la mujer de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante la cual se citó a audiencia para el 21 de junio del 2019 a las ocho de la mañana; asimismo, se dispuso que ambas partes, tanto presunta agraviada como supuesto agresor sean notificados vía telefónica, para que asistan a la audiencia; sin embargo, no existe constancia de que mediante vía telefónica el denunciado haya sido informado de los hechos que se le atribuyen y de las pruebas en su contra, ni siquiera se hace referencia a qué pruebas existen.

**El documento N° 2** (anexo 15) es la resolución de vista número TRES del 05 de noviembre del 2019, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la misma que en su considerando número 4.7, los jueces superiores afirmaron que el denunciado tiene innegable derecho al debido proceso y a la defensa, comprendiendo este último la necesidad de conocer los cargos que se le imputan y producir la prueba y contraprueba correspondiente; que son derechos fundamentales contemplados en el artículo 139, incisos 3° y 14 de la Constitución, y que todo Juez debe observar como condición de validez de sus decisiones.

**El documento N° 3** (anexo 16) es la resolución número UNO, emitida por el Juzgado Mixto de Otuzco de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde se observa que antes de que el artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 30364 sea modificado por el D.S. N° 004-2019-MIMP (publicado el 07 de marzo del 2019), el juez, teniendo en cuenta las recargadas labores del juzgado, la falta de personal jurisdiccional y la lejanía del domicilio de la parte agraviada, citó únicamente a esta última vía telefónica.

**4.4. Descripción de resultados cualitativos en relación al segundo objetivo específico: Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.**

**4.4.1. Entrevistas**

A la pregunta: ¿El trámite que se utiliza para obtener medidas de protección es el mismo que el utilizado para obtener medidas cautelares en el ámbito de tutela de la ley 30364?

- El Juez Superior Titular respondió que: Las medidas de protección y las cautelares son tramitadas en el mismo procedimiento denominado ámbito de tutela, incluso los requisitos para su concesión son casi los mismos, tales como verosimilitud del derecho, peligro en la demora y razonabilidad.
- El primer Juez Mixto respondió que: Si, pues, conforme a la ley y su reglamento, ambas medidas se tramitan y resuelven en la audiencia del ámbito de tutela.
- El segundo juez mixto respondió que: La Ley N° 30364 no contempla trámites distintos para dichas medidas, sino que ambas son tramitadas y resueltas en el ámbito de tutela durante la audiencia, sin embargo, no necesariamente la emisión de una conlleva al dictado de la otra, es decir, en algunos casos solo se dictan medidas de protección y en otros cautelares y viceversa.
- El juez de paz letrado respondió que: La ley no ha establecido distinción para la tramitación de las medidas de protección y/o cautelares, pues se tramitan como si se trataran de medidas iguales.

A la pregunta: En su experiencia como magistrado ¿los denunciados citados a la audiencia suelen asistir para ejercer su derecho de defensa?

- El Juez Superior Titular respondió que: Tras la revisión de lo actuado en primera instancia, se puede apreciar que los denunciados debidamente notificados casi siempre asisten a la audiencia a efectos de manifestar su derecho de defensa; asimismo, a nivel de sala, hasta ahora en todos los casos que hemos citado a

audiencia especial o realizado la vista de la causa, el denunciado ha intervenido activamente contradiciendo los hechos que se le imputan.

- El primer Juez Mixto respondió que: Si asisten a la audiencia pero con las limitaciones que implica el tiempo entre la notificación y la audiencia, la ubicación de su domicilio y el lugar donde se realiza la audiencia, entre otros aspectos que no permiten un adecuado ejercicio del derecho de defensa del denunciado.
- El segundo juez mixto respondió que: En las ciudades es usual que asistan a la audiencia; sin embargo, en la serranía liberteña es difícil que a pesar de ser notificados incluso vía telefónica, puedan asistir pues domicilian en caseríos alejados del juzgado y su traslado implica horas de viaje, sumado los factores climatológicos, entre otros.
- El juez de paz letrado respondió que: No cabe duda de que asisten, pero el problema radica en que acuden a la audiencia con las manos vacías, pues los plazos son extremadamente cortos como para que el denunciado pueda tener la oportunidad de acopiar sus medios probatorios y elaborar adecuadamente su defensa para manifestarla en la audiencia.

A la pregunta: Las medidas cautelares se caracterizan por ser *inaudita pars*; sin embargo ¿dicho principio significa la supresión o diferimiento del derecho de defensa?

- El Juez Superior Titular respondió que: el procedimiento cautelar civil peruano es *inaudita pars*, es decir la solicitud cautelar es resuelta sin conocimiento de la otra parte; sin embargo, de ninguna manera elimina el ejercicio del derecho de defensa, sino que lo suspende para después de dictada la medida; por lo tanto, no estamos ante la supresión del derecho de defensa, sino solo de una suspensión temporal y definida, que es el diferimiento.
- El primer Juez Mixto respondió que: No, pues el derecho de defensa del afectado con la medida cautelar solamente se aplaza para después de

realizada la medida, es decir, se difiere para luego manifestarse a través de la oposición.

- El segundo juez mixto respondió que: Parecería que al resolver la solicitud cautelar sin haber oído a la otra parte se estaría suprimiendo su derecho de defensa, sin embargo, no es así, pues atendiendo a que justamente se trata de una medida para cautelar los intereses del proceso, es que la defensa del demandado debe de manifestarse después de ejecutada la medida, caso contrario, es decir si se le permite ser oído antes, la medida cautelar correría el riesgo de ser inejecutable ante una conducta evasiva del demandado.
- El juez de paz letrado respondió que: Aun tratándose de un proceso cautelar, el demandado tiene derecho a manifestar su defensa, es por ello que en el proceso civil se le permite plantear oposición, la misma que se permite tan pronto es ejecutada la medida cautelar, así pues el juez que dictó la medida podrá escuchar al afectado y si los argumentos y medios probatorios que presente logran desvirtuar la tesis del solicitante de la medida, el juez la dejará sin efecto.

A la pregunta: ¿la oposición es un recurso o una manifestación del derecho de defensa?

- El Juez Superior Titular respondió que: la oposición es una manifestación del derecho de defensa, incluso el propio artículo 637 del Código Procesal Civil lo señala cuando dice que después de dictado el embargo, el ejecutado podrá formular oposición para ejercer la defensa pertinente, es decir, la misma norma precisa el carácter de la oposición, constituyéndose en la expresión del derecho de defensa que le asiste al ejecutado frente a la pretensión cautelar del demandante. Por otro lado, debido a que la Ley N° 30364 no contempla la oposición en el ámbito de tutela, el denunciado viene empleando el recurso de apelación para cuestionar la vulneración a su derecho de defensa; en este punto debo precisar que en sala solo nos pronunciamos por el derecho de defensa si es que ha sido invocado como agravio y en caso de determinarse dicha vulneración, atendiendo al nivel de riesgo, declaramos la nulidad de la

resolución apelada y ordenamos al juez de primera instancia emita nueva resolución previo emplazamiento del denunciado a fin de garantizar su derecho de defensa.

- El primer Juez Mixto respondió que: Con la oposición no se impugna la decisión asumida por el juez, pues para ello se tiene a la apelación; la oposición es una forma de contestar la pretensión cautelar, esto es una manifestación del derecho de defensa del afectado con la medida cautelar, la misma cuya oportunidad para ejercer se da después de ejecutada la medida.
- El segundo juez mixto respondió que: En el proceso principal el derecho de defensa se manifiesta por ejemplo a través de la contestación de demanda; mientras que en el proceso cautelar, este derecho se manifiesta a través de la oposición que pueda formular el afectado con la medida cautelar, por ende, no se trata de un recurso o medio impugnatorio sino de una manifestación del derecho de defensa.
- El juez de paz letrado respondió que: La oposición es el medio que el afectado con la medida cautela tiene para ejercer su derecho de defensa, pues a través de él puede contradecir los fundamentos de la solicitud cautelar y obtener que el juez deje sin efecto la medida dictada en su contra.

A la pregunta: Cuando asume el rol de abogado del denunciado ¿Considera que la oposición empleada en las medidas cautelares civiles resultaría una manifestación efectiva de defensa para el denunciado en el ámbito de tutela de la ley 30364?, El abogado Castañeda respondió que: Si bien es cierto hay una delgada línea que diferencia las medidas de protección de las cautelares a razón de sus características como son la temporalidad, variabilidad y la urgencia, no quiere decir que sean de misma naturaleza. La diferencia puntual radica justamente en la intención del legislador manifiesto en el Art 25 de la ley 30364, que consiste en otorgar la medida de protección mediante audiencia prohibiendo la confrontación y conciliación, además de la naturaleza de urgencia que tiene en su trámite.

#### **4.4.2. Análisis documental**

**El documento N° 4** (anexo 17) es la resolución de vista número TRES del 20 de agosto del 2019, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde se observa que al pronunciarse por la apelación contra el auto que dicta medidas de protección, la Sala precisó que la ausencia del agravio conlleva al rechazo de la apelación, pues en dicho recurso debe exponerse de manera precisa lo que se considera erróneo en la resolución cuestionada, pues sólo de esa manera se delimita la labor de revisión del órgano superior y, a la vez, determina cuales extremos, al no ser impugnados, quedan firmes para las partes.

**El documento N° 5** (anexo 18) es la apelación del denunciado contra la resolución que dicta medidas de protección, constituyéndose en el primer escrito que el denunciado presenta, en ella expone que de un día para otro se le citó vía telefónica a fin de que asista a la audiencia de medidas de protección, asimismo agrega que el juez que dictó las medidas solo se sustentó en medios probatorios elaborados a partir de la sola declaración de la denunciante.

#### **4.5. Descripción de resultados cualitativos en relación al tercer objetivo específico: Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019**

##### **4.5.1. Entrevistas**

A la pregunta: ¿Considera que ante la restricción del derecho de defensa del denunciado en el ámbito de tutela, debería de brindársele el derecho a formular oposición, al igual que en el procedimiento cautelar del proceso civil peruano?

- El Juez Superior Titular respondió que: El ámbito de tutela contempla el mismo procedimiento para las medidas de protección y cautelares; sin embargo, ello termina afectando a ambas medidas, pues si se cita al denunciado a la audiencia, entonces las medidas cautelares dejarán de ser *inaudita pars*, asimismo se pondrá en peligro a la víctima al confrontarla con su presunto

agresor y todo ello a costa de maximizar el derecho de defensa del denunciado; de allí que en muchos casos, el juez opte por no notificar al denunciado a la audiencia; sin embargo, teniendo en cuenta que ambos tipos de medidas tienen el mismo tratamiento, nada obsta para que se introduzcan modificaciones en la Ley y su reglamento a fin de que se establezca que el denunciado puede formular oposición a las medidas cautelares y de protección.

- El primer Juez Mixto respondió que: La restricción del derecho de defensa en los procesos cautelares se encuentra justificada porque entre otras cosas se busca asegurar el cumplimiento de una probable sentencia estimatoria; por otro lado, en el ámbito de tutela se faculta al juez a no solo restringir el derecho de defensa del denunciado sino de suprimirlo, pues en los casos que no se le notifica a la audiencia, éste no tiene otro mecanismo más que apelar la resolución que dicta medidas en su contra, pero no cuenta con un mecanismo que le permita ejercer su derecho de defensa; por ello, creo que las medidas de protección deberían de ser tratadas como medidas cautelares y de esta manera otorgar al denunciado la posibilidad de formular oposición a fin de que el juez que dictó las medidas las pueda dejar sin efecto.
- El segundo juez mixto respondió que: La ley 30364 y su reglamento tiene una orientación pro víctima, de tal suerte que el proceso mismo está diseñado para favorecer a la presunta víctima, y ello se debe en gran parte a los reiterados casos de violencia contra la mujer que han conmocionado a nuestro país; sin embargo, ello no implica que debemos tratar a todos los denunciados como culpables y suprimir su derecho a ser oídos; por ello, para que la balanza procesal se encuentre equilibrada, lo mínimo que debería de hacer por el denunciado es brindarle la oportunidad de ser oído a través de la oposición; sin embargo, ello no sucede mientras no se modifique la Ley, pues el ámbito de tutela no lo contempla y como jueces no podemos agregar una nueva etapa al proceso, máxime si debemos cumplir con los plazos preestablecidos bajo responsabilidad.
- El juez de paz letrado respondió que: Ya bastantes beneficios y facilidades se le brinda a la presunta víctima, mientras que al denunciado se le restringe en sobremanera su participación en el ámbito de tutela; por ello, la forma más



adecuada de ejercer su derecho de defensa seria a través de la instauración de la oposición, pues le permitirá contar con la oportunidad y tiempo necesario para preparar su defensa y ser escuchado por el propio juez que dictó las medidas en su contra a fin de que las deje sin efecto.

A la pregunta: ¿Cree que el ámbito de tutela de la ley 30364 es prácticamente un proceso monitoreo?

- El Juez Superior Titular respondió que: En un proceso monitoreo, se invierte el contradictorio, el demandante afirmará un hecho, ante lo cual el juez ordena al demandado pague, si el demandado guarda silencio entonces se crea un título ejecutivo, de lo contrario formulará oposición. Por otro lado, en el ámbito de tutela el juez puede dictar medida de protección sin contar con medios probatorios pero sustentándose en la gravedad de los hechos denunciados, ello por cuanto en el ámbito de tutela se busca no sancionar, sino prevenir hechos de violencias. Entonces, no creo que el ámbito de tutela sea un proceso monitoreo, puede tener la técnica y matices monitoreos pero recordemos que en dicho ámbito no se emite un pronunciamiento sobre el fondo, sino provisional.
- El primer Juez Mixto respondió que: Para empezar, en nuestro país no existen procesos monitoreos, de allí que es imposible considerar que el ámbito de tutela sea un proceso monitoreo, a pesar de que en la práctica pareciera que si, pues en algunos casos basta la acusación de la víctima para dictar medidas de protección por la gravedad de los hechos que se imputan, pero ello no implica que se trate de un proceso monitoreo.
- El segundo juez mixto respondió que: En teoría no, pero en la práctica deja muchas dudas sobre su monitoriedad o no, ya que de todas maneras el contradictorio no se ve satisfecho adecuadamente, pues incluso permite que las medidas de protección se dicten sustentándose en la sola denuncia de un tercero, ni siquiera de la víctima, y es el denunciado quien tiene que probar que tales acusaciones son falsas, lo cual, por la estructura del proceso no lo hace en el ámbito de tutela sino en el ámbito de sanción.

- El juez de paz letrado respondió que: Creo que no debemos equiparlo a un proceso monitoreo, pues en nuestro país no existe ese tipo de procesos; creo que lo más adecuado es catalogar al ámbito de tutela como un proceso *sui generis* que si bien busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia, aún tiene deficiencias respecto al ejercicio del derecho de defensa de denunciado.

A la pregunta ¿Considera que el derecho de defensa del denunciado debería de restringirse o hasta suprimirse a fin de salvaguardar la integridad de la presunta víctima? el abogado Castañeda respondió que: Para nada, la tutela de una población vulnerable no implica la desnaturalización del proceso o la vulneración de derechos fundamentales. No obstante, toda excepción debe ser justificada por un bien mayor determinado (derechos de la supuesta víctima), y respecto a los derechos por no tener una naturaleza absoluta, pueden ser restringidos. Sobre esto último, reitero mi posición, únicamente debe ser restringido dependiendo el tipo de riesgo y justo en ese punto, resultan constitucionales las medidas de protección.

#### **4.5.2. Análisis documental**

**El documento N° 6** (anexo 19) es la resolución de vista número TRES del 18 de abril del 2019, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; en ella, la Sala precisa que el derecho de defensa del denunciado no puede ser afectado cuando se trata de casos de riesgo leve o moderado, y que se le debe notificar para concurrir a la audiencia; sin embargo, cuando se trata de riesgo severo, se puede prescindir de su citación; asimismo, precisa que cualquier decisión no puede hacerse en instancia única porque se afectaría los derechos constitucionales como el de defensa del denunciado.

**El documento N° 7** (anexo 20) es la resolución de vista número TRES del 14 de octubre del 2019, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, y en ella la Sala precisa que no se puede admitir forma alguna de supresión del derecho defensa.

## V. DISCUSIÓN

La tabla 1 y figura 1, permiten apreciar que el nivel destacado en la variable independiente: ámbito de tutela especial, es el nivel medio con un 100%, es decir, los encuestados muestran una posición intermedia entre la aceptación y rechazo del ámbito de tutela, pues si bien es necesario para la lucha contra la violencia, también puede mejorar en cuanto al tratamiento que le da al derecho de defensa del denunciado. Por otro lado, el nivel que destaca en la variable dependiente: derecho de defensa del denunciado, es el nivel alto con un 72%, seguido del nivel medio con 28%; es decir, los encuestados manifiestan en su mayoría que se debe observar y garantizar el derecho de defensa, mientras que la minoría admitió la posibilidad de flexibilizarlo, tal como sucede en los procesos inaudita pars.

En cuanto a los niveles alcanzados en las cinco dimensiones del ámbito de tutela especial, la tabla 2 y figura 2 permiten apreciar que en la dimensión: “denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” destaca el nivel medio con 61 %, es decir, la mayoría de encuestados muestra una posición intermedia entre la aceptación y el rechazo del trámite establecido para este tipo de denuncias, pues basta la sola alegación de hechos que constituyen riesgo severo para dictar medidas de protección, que a pesar de vulnerar el derecho de defensa resultan efectivas en caso el riesgo sea cierto, pero en caso no serlo, las medidas no son justas ni efectivas y vulneran el derecho de defensa del denunciado. En la dimensión: “medida de protección” destaca el nivel alto con 72%, pues la mayoría de encuestados concuerda en que las medidas de protección son necesarias para salvaguardar la integridad de la presunta víctima, pero el procedimiento para dictarlas debe respetar el derecho de defensa de la parte denunciada. En la dimensión: “medidas cautelares” destaca el nivel medio con 61%, pues la mayoría de encuestados reconoce la importancia de las medidas cautelares, pero los plazos del ámbito de tutela no permiten un adecuado análisis de las pretensiones cautelares. En la dimensión: “audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares” destaca el nivel medio con 72%, pues los encuestados si bien se muestran conformes

con la realización de la audiencia en el ámbito de tutela, muestran su preocupación por la confrontación de las partes y el escaso tiempo con el que el denunciado cuenta para preparar su defensa de cara a la audiencia. Y en la dimensión: “impugnación de la resolución que emite medidas de protección y/o cautelares” destaca el nivel alto con el 56%, pues la mayoría de encuestados reconocen que la única forma que el denunciado tiene para al menos invocar su derecho de defensa, es la apelación contra la resolución que dicta medidas de protección y/o cautelares, sobre todo en los casos de riesgo severo donde se prescinde de la audiencia y se emite medidas de protección en única instancia.

Por otra parte, sobre los niveles alcanzados en las tres dimensiones del derecho de defensa del denunciado, la tabla 3 y gráfico 3 permiten apreciar que en la dimensión: “contenido esencial del derecho de defensa” destaca el nivel medio con el 100%, pues la totalidad de los encuestados reconoce que no siempre se vulnera el derecho de defensa del denunciado, ya que en los casos de riesgo indeterminado, leve o moderado, existe la posibilidad de permitirle ejercer su derecho de defensa en la audiencia, pero en los casos de riesgo severo, donde se prescinde de la audiencia, no. En la dimensión: “manifestaciones del derecho de defensa”, destaca el nivel alto con 94%; pues la mayoría de encuestados coincide en afirmar que todo proceso debe garantizar la posibilidad de que el denunciado manifieste su derecho de defensa, ya sea de manera directa (*audiatur et altera pars*) o diferida (*inaudita pars*). Y en la dimensión restricciones al derecho de defensa, destaca el nivel medio con 61%, pues la mayoría de encuestados respondió que no siempre se debe restringir el derecho de defensa, ya que dicha medida es excepcional y debe estar justificada como en los procesos cautelares.

Al realizarse la prueba de correlación Rho de Spearman a los resultados de encuesta correspondientes a la variable independiente: “ámbito de tutela especial” y a la primera dimensión de la variable dependiente: “contenido esencial del derecho de defensa”, conforme se aprecia en la Tabla 6, se obtuvo una **correlación** positiva altamente significativa, esto es la incidencia

significativa del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado, de tal manera que a mayor ámbito de tutela, mayor vulneración del contenido esencial del derecho de defensa del denunciado.

La encuesta (anexo 8) permitió apreciar que en lo referente al contenido esencial del derecho de defensa del denunciado, la mayoría de jueces respondió que solo a veces el denunciado se halla presente en el ámbito de tutela, ya que solo en los casos de riesgo leve es notificado a la audiencia; solo a veces es oído, pues no en todos los casos es citado a la audiencia, y de ser citado no cuenta con el tiempo necesario para preparar su defensa y ser oído; siempre tiene menor capacidad probatoria que la parte denunciante, pues la denuncia puede interponerse con la sola invocación de hechos de violencia, sin necesidad de acompañar medios probatorios, pero para contradecir los hechos denunciados si se requiere de medios probatorios; solo a veces cuenta con el tiempo necesario para formular su defensa ante la denuncia, pues en caso de ser citado solo cuenta con horas para preparar su defensa; solo a veces es informado del contenido de la denuncia antes de la audiencia de medidas de protección y/o cautelares, pues dicha información no ocurre en casos como los de riesgo severo, además en casos como los de riesgo leve o moderado se informa hasta por vía telefónica sobre los hechos que se le imputa, sin mayores detalles; solo a veces conoce qué medidas de protección o cautelares se debatirán en la audiencia, pues solo tomará conocimiento de ello en los casos de riesgo leve; nunca es informado de los medios probatorios que serán valorados en la audiencia, pues en los casos que se le cita a la audiencia solo es emplazado con la denuncia, mas no con los medios probatorios, porque no existen, porque están en proceso de acopio o porque de existir la premura del tiempo hace imposible su notificación física, de allí que en muchos casos solo se cite vía telefónica; y solo a veces en la audiencia suele introducirse hechos distintos a los expuestos en la denuncia, pues en la audiencia se da la oportunidad a la presunta víctima de agregar algo más a los hechos denunciados, de tal manera que en los casos en que el denunciado es citado

a la audiencia afrontará hechos nuevos por los cuales no fue emplazado, vulnerándose aún más su derecho de defensa.

Contrastando estos resultados con las preguntas del cuestionario correspondientes a la variable independiente se aprecia que (anexo 8) la mayoría de jueces entrevistados respondió que siempre se exigen los mismos requisitos a las denuncias interpuestas por hombres que a las denuncias interpuestas por mujeres, pues la calificación de víctima no es en función al género sino al riesgo frente a los hechos de violencia que se denuncian; siempre las denuncias se interponen con la sola invocación de un hecho de violencia, pues ni la ley ni los criterios de los magistrados exigen algún otro requisito, pero no es así respecto a la contestación de la denuncia ya que en esta última si se exige carga probatoria; siempre las medidas de protección son tratadas como medidas cautelares, pues la ley contempla el mismo procedimiento para ambas, pero omite regular la oposición; siempre se dictan las medidas de protección, sobre todo en los casos de riesgo moderado y severo, pues conforme lo teoriza Ledesma (2017) dichas medidas no solo buscan sancionar los presuntos hechos de violencia, sino que otorgan tutela de prevención, de allí que no es necesaria una minuciosa actividad probatoria, pues en algunos casos basta la mera alegación para dictarlas; siempre se dictan las medidas de protección en función a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que permite colegir que si se vienen cumpliendo, al menos en este extremo las exigencia de la Ley 30364; a veces se dictan medidas de protección en los casos de riesgo leve, con la finalidad no de sancionar, sino de estrictamente prevenir actos de violencia.

Esto se contrasta con el análisis del documento N° 1 (anexo 14), donde podemos observar que el 20 de junio del 2019 se citó a audiencia para el 21 de junio del 2019 a las ocho de la mañana y se le citó vía telefónica informándosele que debería de asistir a la audiencia debido a que existe una denuncia por violencia en su contra, es así que el denunciado pocas veces optará por asistir, pues no conoce cuales son los hechos que se le imputan, las pruebas en su contra ni las medidas que se debatirán, y aun informándole

de tales aspectos, la prontitud de la audiencia hace casi imposible que el denunciado prepare su defensa y acopie los medios probatorios la sustenten.

Situación aún más complicada es la advertida en el documento N° 3 (anexo 16), pues antes de que el artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 30364 sea modificado por el D.S. N° 004-2019-MIMP (publicado el 07 de marzo del 2019), el juez citó únicamente a la parte agraviada y dejó constancia de las recargadas labores del juzgado, la falta de personal jurisdiccional y la lejanía del domicilio de la parte agraviada.

No obstante ello, en el documento N° 2 (anexo 15), los jueces superiores determinaron que el denunciado tiene derecho a la defensa, que a su vez comprende la necesidad de conocer los cargos que se le imputan y producir la prueba y contraprueba correspondiente; que son derechos fundamentales contemplados en el artículo 139, incisos 3° y 14 de la Constitución, y que todo Juez debe observar como condición de validez de sus decisiones.

Contrastando con los resultados de la entrevista, todos los magistrados entrevistados respondieron que citar al denunciado a la audiencia de tutela especial si garantiza, al menos en parte, el contenido esencial de su derecho de defensa, específicamente del contradictorio y el derecho a ser informado de la acusación, pues para El Juez Superior Titular también se requiere se haya puesto oportunamente en conocimiento del denunciado los hechos que se le imputan, mientras que los jueces mixtos y paz letrado afirmaron que no siempre se cita al denunciado debido a factores como la carga procesal, la escasez de personal, la zona geográfica y la obligación de cumplir con los plazos para la emisión de medidas de protección, y de citarlo éste contará con poco tiempo para preparar su defensa y se correrá el riesgo de que las partes se confronten.

Dichos magistrados también respondieron que citan a los denunciados solo en los casos de riesgo leve o moderado y que en dichos casos es inevitable la confrontación por cuanto el contradictorio en sí mismo implica

confrontación, solo en los casos de riesgo severo omiten notificar al denunciado a fin de evitar la revictimización.

Por otra parte, el entrevistado abogado Castañeda, al ser consultado sobre las ventajas y desventajas que encuentra en el ámbito de tutela de la ley 30364 en su calidad de abogado de la parte denunciada o de la parte agraviada, respondió que dependiendo del riesgo hay derechos de la parte denunciada que se encuentran restringidos o limitados de manera razonable, por la naturaleza del hecho.

No obstante ello, lo cierto es que para la **teoría general del proceso**, como bien afirma Monroy (2007), el derecho de defensa es parte fundamental del proceso y no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia, incluso en los procesos cautelares su ejercicio solo se difiere pero no se suprime; del mismo modo, a decir del Tribunal Constitucional Peruano, el derecho de defensa: queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos (STC 1230-2002-HC/TC).

En este orden, los resultados obtenidos en la encuesta, análisis de documentos, entrevistas, y teoría general del proceso expuesta por autores como Monroy (2007) y el Tribunal Constitucional, permiten colegir que el contenido esencial del derecho de defensa se ve afectado cuando se cita al denunciado pero no se le pone en conocimiento los hechos denunciados, las pruebas en su contra y las medidas a debatirse en la audiencia, asimismo, cuando no se le otorga el tiempo necesario para preparar su defensa; también se ve vulnerado en los casos de riesgo severo, donde no se le cita y se emiten medidas de protección en instancia única.

Así pues, se confirman los resultados de los antecedentes como los de Santillán (2019), quien al abordar el estudio de la vulneración del derecho de defensa del denunciado y los procesos de violencia psicológica en la provincia de Moyobamba, durante el año 2018, determinó que en los procesos por violencia psicológica se vulnera el derecho de defensa de la



persona denunciada, pues la redacción de la Ley N° 30364 recorta diversos derechos como el de ser notificado previamente con la denuncia, la oportunidad de presentar pruebas o el hecho mismo de citar a audiencia con pocas horas de anticipación.

De esta manera, el ámbito de tutela especial incide significativamente en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado, pues si bien se otorga tutela de protección a las presuntas víctimas dictando medidas de protección incluso en casos de riesgo leve, sin embargo, para alcanzar tal fin, sus plazos restringen el contenido esencial del derecho de defensa en los casos de riesgo indeterminado, leve y moderado, mientras que en los casos de riesgo severo donde se prescinde de la audiencia, lo suprime; de tal manera que a mayor ámbito de tutela, mayor vulneración del contenido esencial del derecho de defensa del denunciado.

Al realizarse la prueba de correlación Rho de Spearman a los resultados de la encuesta correspondientes a la variable independiente: “ámbito de tutela especial” y a la segunda dimensión de la variable dependiente: “manifestaciones del derecho de defensa”, se determinó, conforme a la tabla 7, la existencia de una correlación positiva moderada altamente significativa, esto es, existe incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado; es decir, a mayor ámbito de tutela, mayor vulneración de las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado.

Así pues, la encuesta permitió apreciar que en lo referente a las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado (anexo 8), la mayoría de jueces respondió que siempre el denunciado busca contestar los hechos denunciados en el ámbito de tutela, lo cual es una clara evidencia de la necesidad e importancia de estudiar y proponer una modificación en el ámbito de tutela a fin de que el denunciado tenga las condiciones necesarias para ejercer su derecho de defensa; siempre ve restringido el ejercicio de su defensa material a diferencia de la parte denunciante, pues mientras que la denuncia puede interponerse sin la necesidad de abogado e incluso no

necesariamente por el agraviado sino mediante un tercero, no sucede lo mismo con el denunciado, pues este no puede acudir al proceso si no es con la representación de un abogado; siempre no tiene acceso a la defensa técnica gratuita en las mismas condiciones que la parte denunciante, pues mientras que la parte denunciante puede hacer uso de la asesoría legal gratuita de los Centros de Emergencia Mujer, DEMUNA, Ministerio de Justicia y otros, el denunciado no; en los casos que asiste a la audiencia, siempre contradice los hechos que se le imputan, lo que ratifica la necesidad de garantizar el derecho de defensa del denunciado en todos los casos, pero a su vez observando la prohibición de confrontación entre las partes; y, siempre en los procesos cautelares se posterga el derecho de defensa del afectado hasta después de ejecutada la medida cautelar, pues si bien se realiza inaudita pars, el Código Procesal Civil permite que el afectado con la medida tenga la posibilidad de hacer un ejercicio diferido de su derecho de defensa.

Contrastando estos resultados con las preguntas del cuestionario correspondientes a la variable independiente se aprecia que la mayoría de jueces encuestados respondió que siempre el denunciado suele cumplir las medidas de protección, ello debido a que van acompañadas de un apercibimiento de iniciar proceso penal en caso de incumplimiento; siempre suelen dictarse medidas de protección genéricas sobre todo en los casos de riesgo leve, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; siempre las medidas cautelares se dictan en función a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues con ello se pretende compensar la supresión del derecho de defensa del denunciado; a veces suelen dictarse medidas cautelares de oficio, por cuanto se trata de una facultad propia del Juez atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados y las pruebas existentes, pero ello no constituye una regla, sino una excepción, de allí que no siempre se dicten de oficio; siempre el denunciado suele cumplir las medidas cautelares, pues al igual que las medidas de protección, su incumplimiento acarrea un apercibimiento de iniciarle proceso penal; a veces suelen dictarse medidas cautelares sobre tenencia y alimentos, ya sea

porque que el caso lo amerita o también como herramienta para posteriormente iniciar un proceso autónomo sobre dichas materias, es decir, lamentablemente la denuncia de violencia puede ser falsa y su único fin es perjudicar al denunciado para luego iniciar un proceso sobre tenencia y/o alimentos teniendo el denunciante a su favor medidas de protección genéricas y habiendo estigmatizado al denunciado como un presunto agresor; a veces suele citarse al denunciado para la audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares, sobre todo en los procesos con riesgo leve, sin embargo el citarlo a la audiencia, si bien garantiza su derecho de defensa, resulta contrario a la Ley N° 30364 que prohíbe la confrontación de las partes; siempre debería citarse al denunciado para la audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares, lo que en realidad refleja la necesidad de modificar la estructura del ámbito de tutela especial, ya que recordemos que no está permitida la confrontación y por ende resultaría inviable citar a ambas partes al mismo tiempo a la audiencia, sino que su participación debería de ser diferida.

Esto se debe a que en los casos de riesgo severo, al no ser citado a la audiencia, no podrá contestar los hechos denunciados, y solo lo hará en aquellos casos de riesgo leve o moderado donde si se le cite previamente; asimismo, se encuentra en desventaja frente a la parte denunciante, pues mientras que la denuncia puede interponerse sin necesidad de abogado e incluso por un tercero distinto al agraviado, el demandado citado asistirá a la audiencia sin haber tenido el tiempo necesario para preparar siquiera una adecuada defensa material; además, mientras que la supuesta agraviada puede contar con la asesoría legal gratuita de los Centros de Emergencia Mujer, el denunciado no y tampoco goza del tiempo suficiente para agenciarse de una adecuada defensa técnica gratuita o particular; sin embargo, en los pocos casos que el denunciado llega a asistir a la audiencia, ha manifestado su derecho de defensa contradiciendo los hechos que se le atribuyen.

Al contrastar con los resultados de la entrevista, se advierte que los magistrados entrevistados coincidieron en afirmar que el trámite de las

medidas de protección es el mismo que el utilizado para obtener medidas cautelares en el ámbito de tutela de la ley 30364; asimismo, manifestaron que aquellos denunciados que si son citados a la audiencia suelen asistir para ejercer su derecho de defensa pero con las limitantes de tiempo, distancia y falta de preparación adecuada de su defensa técnica y material; por otro lado, reconocieron que las medidas cautelares se caracterizan por ser inaudita pars y por ende se difiere el derecho de defensa del afectado hasta después de ejecutada la medida; y finalmente precisaron que la oposición es una manifestación del derecho de defensa del afectado con medida cautelar. Entonces, dado que las medidas de protección y cautelares tienen el mismo trámite, no existe impedimento alguno para que se brinde al denunciado la posibilidad de formular oposición a las medidas de protección y cautelares a fin de que se garantice de manera más efectiva su derecho de defensa, pues si bien su derecho de defensa se diferirá para después de ejecutada la medida, contará con el tiempo necesario para preparar su defensa en el ámbito de tutela y ante el mismo juez que dictó las medidas; asimismo, el diferimiento de la defensa resulta el mecanismo más eficaz para evitar, como refiere el abogado Castañeda en la entrevista, la confrontación entre las partes, además de atender de manera célere y oportuna la denuncia por violencia, pues no se tendrá que citar previamente al denunciado, sino después de dictada la medida.

Contrastando con el análisis documental, esta necesidad de incorporar la oposición a las medidas de protección se refleja en el ámbito del recurso de apelación, pues al no tener un adecuado mecanismo de defensa, el denunciado no tiene más que apelar e invocar entre sus agravios la vulneración a su derecho de defensa; así se aprecia en el documento N° 5 (anexo 18), donde podemos observar que la apelación es el primer escrito que el denunciado presenta y en ella expone que se vulneró su derecho de defensa debido a que no contó con un plazo razonable para preparar su defensa; es así que la apelación no es la solución al esquema del proceso, pues conforme al análisis al documento N° 4 (anexo 17), la Sala precisa que la ausencia del agravio conlleva al rechazo de la apelación, esto es, si no se

invoca entre los agravios la vulneración al derecho de defensa, la sala no se pronunciará de oficio porque se entenderá que el denunciado dejó consentir dicho extremo, lo cual no resulta del todo cierto, pues probablemente se deba más a una deficiencia en la argumentación del recurso por motivos de tiempo que un consentimiento tácito de la vulneración de su derecho de defensa; por tal motivo, se reafirma la necesidad de incorporar la oposición a favor de denunciado a efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa.

De esta manera, contrastando con la teoría, se confirma la teoría referida a la oposición, pues conforme a Castillo (2015), Guerra (2016) y Ortells (2002), una expresión o manifestación del derecho de defensa en el proceso cautelar o *in audita pars*, es la oposición del ejecutado frente a la pretensión cautelar amparada por el juez, con ella no se cuestiona una resolución judicial, sino que se contradice la tesis de la otra parte, es decir, permite al afectado ejercer su derecho de defensa frente a la solicitud cautelar amparada y ejecutada.

En consecuencia, existe incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa, pues el primero no otorga las garantías necesarias para que el denunciado pueda expresar su derecho de defensa frente a los hechos de violencia que le atribuyen, de tal manera que a mayor ámbito de tutela, mayor vulneración de las manifestaciones del derecho de defensa.

Al realizarse la prueba de correlación Rho de Spearman a los resultados de la encuesta correspondientes a la variable independiente: “ámbito de tutela especial” y la tercera dimensión de la variable dependiente: “restricciones del derecho de defensa”, se determinó que, conforme a la tabla 8, no existe correlación entre el ámbito de tutela especial y las restricciones del derecho de defensa del denunciado, es decir, no existe incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado.

La encuesta permitió apreciar que en lo referente a las restricciones al derecho de defensa del denunciado, la mayoría de jueces respondió que siempre la postergación del derecho de defensa del afectado con medida

cautelar debe justificarse con la concurrencia de la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y razonabilidad, pues se está difiriendo el normal ejercicio del derecho de defensa y ello no puede quedar al arbitrio del juez sino que debe sustentarse en razones suficientes como son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la razonabilidad; siempre las medidas de protección se dictan como proceso *inaudita parts*, pues tiene el mismo procedimiento que se emplea para las medidas cautelares; nunca el afectado con medidas de protección puede ejercer su derecho de defensa después de ejecutadas dichas medidas, pues el ámbito de tutela no contempla un mecanismo para tal fin; siempre los procesos monitoreos garantizan el derecho de defensa del demandado, es decir, incluso en este tipo de procesos donde se busca obtener un título ejecutivo se garantiza el derecho de defensa del demandado, pues solo se invierte la carga de la prueba, mas no se suprime el derecho de defensa; a veces los procesos monitoreos garantizan el derecho a la pluralidad de instancias, ello por cuanto su celeridad o permite a los apelantes contar con el tiempo necesario para estructurar una adecuada impugnación; siempre los procesos monitoreos son más céleres que los procesos comunes, pues su finalidad es dotar al demandante de un título ejecutivo en el menor tiempo posible; nunca el ámbito de tutela se viene tramitando como proceso monitoreo, pues en el ámbito de tutela no se permite al denunciado ejercer su derecho de defensa, mientras que en el proceso monitoreo sí.

Contrastando estos resultados con las preguntas del cuestionario correspondientes a la variable independiente (anexo 8) se aprecia que a veces el denunciado suele enterarse de manera extrajudicial de la realización de la audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares, pues no en todos los casos es citado a la audiencia, de tal manera que de llegar a tomar conocimiento del mismo, lo hace a través de terceros, del relato de la propia víctima o al residir en el mismo domicilio con la víctima; a veces existe confrontación entre las partes cuando el denunciado acude a la audiencia de medidas de protección y/o cautelares, pues solo existe confrontación en los casos en que el denunciado es citado

a la audiencia, mas no en aquellos casos en los que no se le emplaza; siempre deberían tramitarse las medidas de protección conforme al procedimiento cautelar establecido en el Código Procesal, pues así se garantizaría el derecho de defensa del denunciado, brindándole la oportunidad de formular oposición a las medidas de protección y cautelares; siempre los denunciados que apelan las medidas de protección invocan como agravios la vulneración a su derecho de defensa, pues no tienen otro mecanismo más que la apelación para invocar la vulneración a su derecho de defensa; la mitad de encuestados respondió que a veces la apelación es empleada como mecanismo para cuestionar, además de las medidas de protección, la falta de citación a audiencia, mientras que la otra mitad respondió que siempre, pues no tienen otro camino más que utilizar el recurso de apelación para introducir en sus agravios la vulneración a su derecho de defensa por no haber sido notificados, agravios que usualmente son desestimados, pues su emplazamiento depende del nivel de riesgo advertido en cada caso concreto; nunca la Sala suele pronunciarse por el derecho de defensa del denunciado si es que no fue objeto de cuestionamiento en la apelación, pues la sala únicamente se pronunciará por tal aspecto si es que se invocó como agravio, ya que consideran que si no se cuestiona la vulneración al derecho de defensa, se tiene por convalidado cualquier vicio al respecto.

Contrariamente a la prueba de correlación Rho de Spearman, los magistrados entrevistados coincidieron en afirmar que el ámbito de tutela si restringe el derecho de defensa del denunciado y que debe de brindársele el derecho a formular oposición, al igual que en el procedimiento cautelar, máxime si como refirió el Juez Superior Titular, la oposición no solo garantiza el derecho de defensa del denunciado, sino que permite evitar la confrontación entre las partes durante la audiencia, además que no desnaturalizaría las medidas cautelares, pues estas últimas pierden su naturaleza *inaudita pars* cuando se resuelven con previo conocimiento del denunciado; aunado a ello, el primer Juez Mixto precisó que el derecho de defensa no puede suprimirse sino restringirse en determinados casos

plenamente justificados como lo son los procesos de violencia donde se busca proteger a la víctima.

Por otra parte, los magistrados entrevistados también coincidieron en precisar que el ámbito de tutela de la ley 30364 no es un proceso monitoreo, sino que como refiere el juez de paz letrado, es un proceso sui generis, tal como también lo afirmó la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la resolución de vista número DOS del 11 de junio del 2018, emitida en el Expediente N° 005098-2017-93-1601-JR-FC-02.

En esta línea, el abogado Castañeda afirmó que los derechos, como el de defensa, por no tener una naturaleza absoluta, pueden ser restringidos de manera justificada y por un bien mayor determinado.

Por otro lado, contrastando con el análisis documental, el análisis del documento N° 6 (anexo 19), permite apreciar que la Sala precisó que el derecho de defensa del denunciado no puede ser afectado cuando se trata de casos de riesgo leve o moderado, y que se le debe notificar para concurrir a la audiencia; sin embargo, cuando se trata de riesgo severo, se puede prescindir de su citación; asimismo, precisa que cualquier decisión no puede hacerse en instancia única porque se afectaría los derechos constitucionales como el de defensa del denunciado. Este razonamiento se sustenta en la actual normatividad de la Ley 30364 y su reglamento, donde en los casos de riesgo leve y moderado se garantiza el derecho de defensa del denunciado pero se genera un problema como lo es la confrontación entre las partes, mientras que en los casos de riesgo severo se resuelve sin la presencia del denunciado evitando la confrontación pero suprimiendo el derecho de defensa del denunciado, convirtiéndose así en instancia única, de tal manera que ninguna de dichas situaciones satisface adecuadamente el derecho de defensa del denunciado en armonía con los derechos de la víctima y la finalidad del ámbito de tutela.

Por otro lado, contrastando con la ya mencionada teoría general del proceso, autores como Monroy (2007) admiten que el derecho de defensa puede restringirse en los procesos cautelares, pero jamás suprimirse, caso



contrario se obtendrían decisiones judiciales injustas, lo cual es completamente opuesto a la teoría de la verdad judicial, que a decir de Taruffo (2015) se sustenta en el correcto establecimiento de los hechos, la incorporación de los más relevantes elementos de prueba y la consecuente aplicación de las normas jurídicas sustantivas pertinentes, de tal manera que las decisiones judiciales resulten más justas, correctas y cercanas a la verdad.

Entonces, si bien la prueba de correlación Rho de Spearman determina que no existe incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones al derecho de defensa del denunciado; sin embargo, el análisis documental y las entrevistas permiten apreciar los motivos por los cuales no se da tal correlación y ello sucede básicamente porque el ámbito de tutela especial no contempla restricciones al derecho de defensa del denunciado en los casos de riesgo severo cuando se prescinde de la audiencia, pues en vez de restricciones contempla la supresión del derecho de defensa, lo cual incluso se advierte al analizar el primer objetivo específico donde se concluye que el ámbito de tutela suprime el contenido esencial del derecho de defensa.

La prueba de correlación Rho de Spearman entre los resultados de la encuesta correspondientes a las variables en estudio, conforme se aprecia de la tabla 5, en concordancia con el diagrama de dispersión de puntos, permitió determinar la existencia de una correlación positiva altamente significativa entre el ámbito de tutela especial y el derecho de defensa del denunciado, esto es, existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019; es decir, a mayor ámbito de tutela, mayor vulneración del derecho de defensa del denunciado, esto por cuanto, conforme se determinó al abordar los objetivos específicos, el ámbito de tutela suprime el contenido esencial del derecho de defensa así como sus manifestaciones, y si bien no se correlaciona con las restricciones al derecho de defensa, ello se debe a que no restringe tal derecho, sino que lo suprime.

Por ello, la medida más adecuada para salvaguardar el derecho de defensa del denunciado y evitar la confrontación entre las partes, es la oposición a las medidas de protección y cautelares, dado que no suprime el derecho de defensa sino que lo restringe temporalmente, máxime si se tiene presente que en el documento N° 7 (anexo 20) la Sala precisó que no se puede admitir forma alguna de supresión del derecho defensa.

## **VI. CONCLUSIONES**

**51.** Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, pues en los casos de riesgo leve y moderado su derecho se ve restringido por la falta de información de los hechos y pruebas en su contra, además del limitado tiempo que cuenta para preparar su defensa, mientras que en los casos de riesgo severo no se le cita y se emiten medidas de protección en instancia única, quedando de esta manera impedido de ejercer los medios eficaces, necesarios y suficientes para defender sus derechos e intereses legítimos.

**52.** Existe incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, pues si bien en los casos de riesgo leve y moderado se cita al denunciado, sin embargo ello no garantiza que pueda manifestar su defensa de manera adecuada, debido a la prontitud del tiempo entre la citación y la audiencia, mientras que en el caso de riesgo severo la posibilidad de manifestar su defensa es nula pues no se le cita a la audiencia; por ello, el denunciado se encuentra en clara desventaja frente a la parte denunciante al momento de manifestar su defensa en el ámbito de tutela.

**53.** No existe incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, pues no restringe el derecho de defensa del denunciado, sino que lo suprime; entonces, si bien dada la finalidad protectora de la ley respecto a la presunta víctima, es justificable restringir el derecho de defensa del denunciado mas no suprimirlo, por ello la medida más adecuada para salvaguardar el derecho de defensa del denunciado y evitar la confrontación entre las partes es la oposición a las medidas de protección y cautelares, dado que no suprime el derecho de defensa sino que lo restringe temporalmente, máxime si desde ya las medidas de protección se tramitan conjuntamente con las medidas cautelares, y en estas últimas, su naturaleza *inaudita pars* contempla a la oposición como mecanismo de defensa del afectado con la medida.

**54.** Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, pues el ámbito de tutela afecta el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado al dejarlo impedido de ejercer los medios eficaces, suficientes y necesarios para defender sus intereses y derechos legítimos; asimismo, afecta la manifestación del derecho de defensa del denunciado porque se encuentra en desventaja frente a la parte denunciante al momento de manifestar su defensa; y, restringe ineficazmente el derecho de defensa del denunciado en los casos de riesgo leve y moderado, mientras que suprime completamente dicho derecho en los casos de riesgo severo.

## **VII. RECOMENDACIONES**

A los interesados en investigar temas relacionados al objeto de estudio del presente trabajo, aborden el estudio de las audiencias virtuales durante el periodo de la cuarentena por el COVID-19 durante el año 2020, ya que es un tema bastante amplio y novedoso.

Asimismo, contar con acceso a los pronunciamientos judiciales referidos al ámbito de tutela especial tanto en primera como en segunda instancia.

Finalmente, emplear recursos digitales para la recolección y procesamiento de la información, a fin de guardar el distanciamiento social con motivo del COVID-19.

## **VIII. PROPUESTA**

### **7.1.- Problema / necesidad.**

Ley Ley N° 30364 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, regulan el proceso judicial para el trámite de denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El Reglamento establece en su artículo 6-A que el proceso especial está integrado por dos ámbitos no preclusivos y paralelos, uno de tutela especial donde se emiten medidas de protección y/o cautelares, y el otro de sanción donde se investigan y sancionan los hechos denunciados sean faltas o delitos.

En el ámbito de tutela, el artículo 16 de la Ley establece que en caso no se pueda determinar el nivel de riesgo, el juez de familia tiene el plazo de 72 horas para evaluar el caso y resolver en audiencia; por otro lado, si la ficha de valoración determina que existe riesgo leve o moderado el juez tiene el plazo de 48 horas para evaluar el caso y resolver en audiencia la emisión de las medidas de protección y/o cautelares necesarias; y, si la ficha de valoración determina que existe riesgo severo, el juez tiene 24 horas para dictar las medidas de protección y/o cautelares en favor de la víctima, pudiendo prescindir de la audiencia.

Como puede apreciarse, si en los casos de riesgo indeterminado, leve, moderado o severo se cita al denunciado a la audiencia, éste contará con plazos ínfimos para conseguir un abogado, preparar su defensa, recabar medios probatorios e incluso tomar las previsiones para asistir a la audiencia; pero a su vez, citarlo a la audiencia implica inevitablemente confrontarlo con la parte denunciante, a pesar de que ello está prohibido por el artículo 25 de la Ley 30364; entonces, si no se le cita a la audiencia, se cumpliría con la prohibición de no confrontación, pero a cambio se suprimiría completamente su derecho de defensa, el mismo que, de por sí, ya se encuentra bastante restringido por los plazos antes mencionados.

Por otro lado, si en los casos de riesgo severo se prescinde de la audiencia y se emiten medidas de protección a favor de la presunta víctima, el denunciado verá suprimida toda posibilidad de ejercer su derecho de defensa en el ámbito de tutela.

## **7.2.- Actividades propuestas**

Sin perjuicio de una propuesta legislativa que incorpore la oposición a las medidas de protección y cautelares en el ámbito de tutela, resulta necesario difundir eventos académicos en los que se aborde la importancia de fundamentar adecuadamente la apelación contra las medidas de protección y cautelares a fin de obtener una decisión más justa por parte del Superior Jerárquico y compense en parte la restricción y supresión del derecho de defensa que el denunciado sufre en primera instancia.

En dichas capacitaciones debe abordarse el estudio teórico y práctico del artículo 360 del Código Procesal Civil, referido a la exigencia de la fundamentación de la apelación, la naturaleza del agravio y la sustentación de la pretensión, pues si el denunciado no tuvo la oportunidad de ser escuchado por el juez de primera instancia, al menos lo será por el superior jerárquico.

Del mismo modo, debe abordarse el estudio del artículo 374 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 2 de la Ley 30293, en el extremo referido al ofrecimiento de medios probatorios en la apelación, pues en caso el denunciado se haya visto imposibilitado de ofrecer medios probatorios en primera instancia, ya sea debido a los plazos del ámbito de tutela o por tratarse de un caso de riesgo severo, puede ofrecer sus medios probatorios en segunda instancia, siempre y cuando cumpla con las exigencias del referido artículo.

De esta manera, la comunidad jurídica contará, al menos, con una adecuada estrategia recursiva que mitigue en parte la vulneración del derecho de defensa que el denunciado sufre en el ámbito de tutela.

## **7.3.- Implementación: Ejecución de propuestas.**

Para tal fin se coordinará con los presidentes de los institutos trujillanos Lex Aequitas, CCátedra, Apex Iuris y Vocatio Iuris a fin de que incorporen los temas propuestos dentro de sus diplomados de alta especialización en Violencia Familiar.

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

N°	ACTIVIDADES	TIEMPO - 2020												Enero 2021
		Agosto				Setiembre				Octubre-Diciembre				
1	Elaboración del contenido de los temas a incorporar en los diplomados	■	■	■	■									
2	Coordinación con los presidentes de los institutos trujillanos Lex Aequitas, CCátedra, Apex Iuris y Vocatio Iuris					■	■							
3	Publicidad de los Diplomados							■	■	■				
4	Ejecución de los diplomados									■	■	■	■	■
5	Verificación de las nuevas apelaciones presentadas												■	■



#### **7.4.- Evaluación**

Realizadas las capacitaciones, se espera que para el próximo año ingresen a sala apelaciones debidamente sustentadas y con los medios probatorios idóneos y necesarios que sustenten la pretensión impugnatoria del denunciado, para que de esta manera se mitigue en parte la vulneración de su derecho de defensa en primera instancia.

## REFERENCIAS

- Alarcón, G. (2007). Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. Pautas para la racionalidad jurídico – política desde Elías Díaz. Madrid, España: Dykinson.
- Andía, G. (2013). Deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas del actual proceso penal. Estudio de las sentencias absolutorias emitidas en los juzgados penales de la ciudad de cusco durante el año 2011 (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5235> (Fecha de consulta: 07 de julio del 2019).
- Apostólico, M., Yoshikawa, E., Fabiana, L. & Gessner, R. (2017). Accuracy of nursing diagnoses for identifying domestic violence against children. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 51, 1-7. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361050485094> (Fecha de consulta: 17 de noviembre del 2019).
- Ariano, E. (2003). La tutela cautelar en el cuadro de la tutela jurisdiccional de los derechos. Problemas del proceso civil, 598-605.
- Ariano, E. (2017). ¿Un ‘monitoreo’ para el Perú? en Derecho material y proceso. Coordinador: Priori Posada Giovanni. Lima, Perú: Palestra Editores.
- Burgos, V. (2002). El Proceso Penal Peruano: una investigación sobre su constitucionalidad (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
- Calamandrei, P. (2005). Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares. Lima, Perú: ARA Editores.
- Castillo, G. (2015). El Plenario Probatorio en la Tutela ejecutiva en la búsqueda de la ponderación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y del derecho de defensa del ejecutado (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de:

<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6883> (Fecha de consulta: 20 de diciembre del 2019).

Centro Nacional de Planeamiento estratégico de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú (2011). Plan Bicentenario. Recuperado de: [https://www.ceplan.gob.pe/documentos/\\_plan-bicentenario/](https://www.ceplan.gob.pe/documentos/_plan-bicentenario/) (Fecha de consulta: 04 de setiembre del 2019)

Cerda, R., y Felices, M. (2011). El Nuevo Proceso Penal: Constitucionalización, principios y racionalidad probatoria (Primera ed.). Lima, Peru: Grijley E.I.R.L.

Contreras, L. (2019). Efectos de las medidas de protección en el delito de la violencia familiar en la Corte Superior de Lima Este. (Tesis para obtener el grado académico de: Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal). Universidad César Vallejo. Lima, Perú.

Corte Suprema de la República del Perú (2016). Casación N° 4693-2015-La Libertad.

Da Silva, D. & Dalbosco, D.(2016). Exposure to Domestic and Community Violence and Subjective Well-Being in Adolescents. Paidéia, 26(65), 299-305. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305447005004> (Fecha de consulta: 11 de noviembre del 2019).

Decreto Legislativo N° 1386. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 04 de setiembre del 2018.

Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 07 de marzo del 2019.

Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 27 de julio del 2016.

Del Río Labarthe, G. (2016). Las Medidas Cautelares Personales del Proceso Penal Peruano (Tesis Doctoral). Universitat d' Alicante, España. Recuperado de: [https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54307/1/tesis\\_gonzalo\\_del\\_rio\\_labarthe.pdf](https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54307/1/tesis_gonzalo_del_rio_labarthe.pdf) (Fecha de consulta: 23 de agosto del 2019).

Diccionario de la Real Academia Española (2020). Recuperado de: <https://dle.rae.es/incidencia> (Fecha de consulta: 16 de julio del 2020).

Diccionario Jurídico del Poder Judicial del Perú (2019). Recuperado de: [https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s\\_cortes\\_suprema\\_home/as\\_servicios/as\\_enlaces\\_de\\_interes/as\\_orientacion\\_juridica\\_usuario/as\\_diccionario\\_juridico/a3](https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_orientacion_juridica_usuario/as_diccionario_juridico/a3) (Fecha de consulta: 03 de enero del 2020).

Enciclopedia Jurídica (2019). Recuperado de: <http://www.enciclopedia-juridica.com/d/audiencia/audiencia.htm> (Fecha de consulta: 16 de diciembre del 2019).

Espinoza, R., Gutiérrez, M., Mena-Muñoz, J. & Córdoba, P. (2008). Domestic violence surveillance system: a model. Salud Pública de México, 50(1), 12-18. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10608915> (Fecha de consulta: 20 de julio del 2019).

Gómez, D. y Estrada, L. (2017). Dificultades en las competencias jurisdiccionales en materia de violencia intrafamiliar de las comisarías de familia. Revista CES Derecho, 8(1), 139-155. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v8n1/v8n1a08.pdf> (Fecha de consulta: 16 de enero del 2020).

Guerra, M (2016). El Principio de Pluralidad de Instancia como fundamento del recurso de apelación. En La Apelación en el proceso civil (pp. 09-22). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Infante, J. (2019). Análisis de las medidas de protección frente a la violencia contra la mujer. Los Olivos, 2018. (Tesis para obtener el grado académico de: Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal). Universidad César Vallejo. Lima, Perú.

Ledesma, M. (2008). Los Nuevos Procesos de ejecución cautelar. Lima: El Búho E.I.R.L.

Ledesma, M. (2014). Estudios Críticos de Derecho Procesal Civil y Arbitraje. Tomo II. Lima: Gaceta Civil y Procesal Civil.

- Ledesma, M. (2017). La tutela de prevención en los procesos por violencia familiar. Revista *Ius Et Veritas*, (54), 172-183. DOI Recuperado de: <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.201702.008> (Fecha de consulta: 30 de setiembre del 2019).
- Macedo, L. & Godoy, R. (2016). Gender subordination in the vulnerability of women to domestic violence. *Investigación y Educación en Enfermería*, 34(2), 261-270. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105246033003> (Fecha de consulta: 21 de julio del 2019).
- Martínez, A. (2005). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales. Trujillo, Perú: Tabla XIII Editores.
- Martínez, J. y Vega, G. (2013). La obligación estatal de prevención a la luz del corpus iuris internacional de protección de la mujer contra la violencia de género. *Ius et Praxis*, 19(2). 335-368. Universidad de Talca – Chile. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19729337010> (Fecha de consulta: 05 de noviembre del 2019).
- Martínez, R. (2017). El embargo como medida de coerción procesal en el código procesal penal peruano y la necesidad de regular la oposición del afectado a fin de garantizar el derecho de defensa (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú.
- Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (2019). Informe N° 28-2019-ADM-MJIVMIGF-CSJLL (2019).
- Monroy, J. (2007). Teoría General del Proceso. Lima, Perú: Palestra.
- Montero, J., Gomez, J., Monton, A. Y Barona, S. (2003). Derecho Jurisdiccional. 2 (12). Valencia, España: Tirant lo Blanch.
- Montero, J. (2014). Derecho Jurisdiccional II. Tomo II. Valencia, España: Editorial Tiran Lo Blanch. Valencia.
- Nares, J., Martínez, D., y Colín, R. (2015). Violencia de género en la familia: perspectiva jurídica penal. *CIENCIA ergo-sum, Revista Científica*

Multidisciplinaria de Prospectiva, 22 (2), 116-124. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10439327002> (Fecha de consulta: 22 de diciembre del 2019).

Ortells, M. (2000). Las Medidas Cautelares. Madrid, España: Editorial La Ley.

Ortells, M. (2002). Derecho Procesal Civil. Navarra, España: Editora Aranzadi.

Polanco, C. (2019). Litigación oral en el proceso civil. Arequipa, Perú: Cromeo Editores E.I.R.L.

Priori, G (2007). La tutela cautelar y el problema del tiempo y el proceso. JUS Doctrina y Práctica (4). Lima, Perú.

Priori, G. (2005). El derecho fundamental a la tutela cautelar: fundamentos, contenido y límites. IUS ET VERITAS, 15(30), 171-200. Recuperado de: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PLfk8lcNxNkJ:revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/11799/12365/+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=pe> (Fecha de consulta: 25 de enero del 2020).

Pujadas, V. (2007). Para una Teoría General de las Medidas Cautelares Penales (Tesis Doctoral). Universitat de Girona - España. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10803/129639> (Fecha de consulta: el 07 de junio del 2019).

Rioja, A. (2016). El agravio en el recurso de apelación. En La Apelación en el proceso civil (pp. 101-117). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Rodríguez, L. (2015). La perspectiva de género como aporte del feminismo para el análisis del derecho y su reconstrucción: el caso de la violencia de género. (Tesis Doctoral). Universidad Carlos III de Madrid. Getafe, España.

Rosser, A. (2017). Menores expuestos a violencia de género. Cambios legislativos, investigación y buenas prácticas en España. Papeles del Psicólogo, 38(2). 116-124. Recuperado de: <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2017.2830> (Fecha de consulta: 29 de noviembre del 2019).

Salas, E. (2019). Incidencia de la incorporación de los artículos 23-A, 23-B y 23-C, en la ejecución de las medidas de protección por violencia contra la mujer,

- dictadas por los Juzgados de Familia – Tarapoto, en el año 2018. (Tesis para obtener el grado académico de: Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal). Universidad César Vallejo. Tarapoto, Perú.
- Sánchez, R. (2014). Terrorismo y derecho de defensa. De la garantía de los derechos fundamentales a la investigación penal contraterrorista. (Tesis Doctoral). Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Getafe, España.
- Santillán, O. (2019). La vulneración del derecho de defensa del denunciado y los procesos de violencia psicológica en la provincia de Moyobamba, durante el año 2018. (Tesis para obtener el grado académico de: Maestro en Derecho Civil Empresarial). Universidad César Vallejo. Tarapoto, Perú.
- Sartori, G. (1999). Homo Videns. La sociedad Teledirigida. Florencia, Italia: Taurus.
- Sevilla, P. (2014). Las causales de contradicción en el proceso de ejecución. Lima: Gaceta Jurídica S.A.
- Silva, D. (2017). Convenio 169 de la OIT y los acuerdos reparatorios en delitos de violencia intrafamiliar. (Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) para optar al grado académico de Magister en Derecho con Mención en Derecho Penal). Universidad de Chile, Temuco, Chile.
- Straka, Ú. (2015). Violencia de género. Área de Posgrado en Derecho Universidad Católica Andrés Bello, 134-135. Recuperado de: [https://www.kas.de/wf/doc/kas\\_43210-1522-4-30.pdf?151111201130](https://www.kas.de/wf/doc/kas_43210-1522-4-30.pdf?151111201130) (Fecha de consulta: 17 de octubre del 2019).
- Taruffo, M. (2015). Teoría de la Prueba (Primera ed.). Lima, Peru: ARA Editores E.I.R.L.
- Teran, M. (2017). Procedimiento directo aplicado en delitos flagrantes de violencia intrafamiliar con carácter psicológico según el código orgánico integral penal. (Tesis de pregrado). Universidad Central de Quito. Quito, Ecuador.
- Tribunal Constitucional Peruano. STC 1230-2002-HC/TC

- Valle, J. (2010). El proceso cautelar en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. *Soluciones Laborales* (34), 55-57.
- Vera, R. (2014). Violencia Intra familiar: Las Medidas de Amparo y El Principio de Contradicción. (Tesis para obtener el Grado de Maestro). Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Guayaquil, Ecuador.
- Veramendi, E. (2010). La impugnación de decisión cautelar: a propósito de la oposición: Recuperado el: <http://boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/Art%C3%ADculo%20-%20LA%20IMPUGNACI%C3%93N%20DE%20DECISI%C3%93N%20CAUTELAR.pdf> (Fecha de consulta: 05 de setiembre del 2019).
- Villa, J. (2014). El delito de desacato por incumplimiento de ciertas prohibiciones impuestas en favor de víctimas de violencia intrafamiliar: Valor del consentimiento de la víctima (Tesis de Maestría en Derecho con mención en derecho penal). Universidad de Chile, Puntarenas, Chile.
- Voria, M. (2019). Las políticas públicas frente al dilema de la violencia de género y del cuidado: paradojas del programa "Ellas Hacen" en Argentina. *Revista de Estudios de Género. La ventana*, VI. 205-230. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7042448> (Fecha de consulta: 11 de diciembre del 2019).
- Yengle, C. (2020, Mayo). Tratamiento de la información recolectada: procesamiento y análisis de datos. En: desarrollo del proyecto de investigación sesiones 5 y 6. Clases desarrolladas en el programa de Doctorado en Derecho de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo - Trujillo.
- Yugueros, A. (2016). La protección de los menores víctimas de violencia de género en España. *Revista de Ciencias Sociales*, 70 (julio-septiembre). pp. 38-52. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495952432002> (Fecha de consulta: 17 de agosto del 2019).



# **ANEXOS**

**ANEXO 1: diplomado de especialización en Derecho de familia y violencia  
contra la mujer y el grupo familiar**



The diploma is titled "DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR". It is awarded to **MARTINEZ GONZALES RAUL** in the capacity of **ASISTENTE**. The text describes the course as being held in Trujillo from April 13 to May 25, 2019, with a duration of 120 academic hours. The course was organized by the Instituto Peruano de Investigación y Capacitación Jurídica "Vocatio Iuris" in conjunction with the Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad. The diploma is signed by **Manuel Alejandro Montoya Cárdenas**, Decano of the Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad, and **Heladio Elmer Maquera Meza**, Director Académico of the Instituto Peruano de Investigación y Capacitación Jurídica "Vocatio Iuris". The date is **Trujillo, mayo del 2019**. The diploma features a star in the top left, a seal of the Instituto Peruano de Investigación y Capacitación Jurídica "Vocatio Iuris" in the top right, and a portrait of the recipient. The background includes a faint illustration of a woman holding scales of justice.

**DIPLOMATURA**  
**DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA Y**  
**VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL**  
**GRUPO FAMILIAR**

Conforme a las últimas modificaciones legislativas, los plenos casatorios, acuerdos plenarios, plenos jurisdiccionales y los precedentes vinculantes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional

*Diploma*

Otorgado a: **MARTINEZ GONZALES RAUL**

En calidad de: **ASISTENTE**

Al haber aprobado en forma satisfactoria la **DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR** conforme a las últimas modificaciones legislativas, los plenos casatorios, acuerdos plenarios, plenos jurisdiccionales y los precedentes vinculantes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, en la modalidad de **PRESENCIAL**, desarrollado en la ciudad de **TRUJILLO** del 13 de abril al 25 de mayo del 2019, los días sábados en el horario de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:30 y los domingos de 09:00 a 14:00 en el auditorio del Hotel La Posada del Rey, organizado por el **Instituto Peruano de Investigación y Capacitación Jurídica "Vocatio Iuris"** en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad, con una duración de 120 horas académicas.

Trujillo, mayo del 2019

**Manuel Alejandro Montoya Cárdenas**  
Decano  
Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad

**Heladio Elmer Maquera Meza**  
Director Académico  
Instituto Peruano de Investigación y Capacitación Jurídica  
"Vocatio Iuris"

CS Scanned with CamScanner

**Anexo 2: Curso “Violencia de género y acceso a la justicia”**



**Anexo 3: Compartir con magistrados con competencia para conocer  
procesos con la Ley N° 30364**





#### Anexo 4: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

	Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores
<b>Independiente</b>	ámbito de tutela especial	“(…) formular una denuncia por violencia familiar puede ser por medios escritos u orales y las instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y Juzgados de Familia están en el deber de atender y brindar acciones de protección a todas aquellas (...) víctimas de violencia o tentativa de feminicidio. (...) la denuncia puede ser hecha (...) también por terceros; (...) se debe tener en cuenta los grados de violencia (...) y de acuerdo a ello los operadores de justicia y las autoridades pertinentes deberán actuar de manera inmediata en plazos de 24 y 48 horas como máximo y en forma inaplazable. En caso de flagrancia delictiva, la Policía Nacional deberá actuar deteniendo al agresor de inmediato (...), y quizá lo más importante, (...) es que la víctima puede denunciar funcionalmente a quien no le brinde la atención inmediata, oportuna u obstruye los procesos que se deben seguir en estos casos”. INFANTE, J. (2019)	En el Distrito Judicial La Libertad, el proceso denominado ámbito de tutela especial, se inicia con la denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, luego el juez de familia cita a audiencia donde decide sobre las medidas de protección y/o cautelares necesarias para proteger la vida e integridad de las víctimas, así como para garantizar su bienestar y protección social. Frente a ello, el denunciado y afectado con dichas medidas puede formular apelación.	Denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar	Requisitos
				Medidas de protección	Naturaleza Presupuestos Alcances
				Medidas cautelares	Presupuestos Alcances
				Audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares	Desarrollo
				Impugnación de la resolución que emite medidas de protección y/o cautelares	Presupuestos

<b>Dependiente</b>	derecho de defensa del denunciado	El derecho de defensa es una garantía de alcance constitucional atribuible a toda persona con interés directo en la resolución jurídica del proceso (penal) para comparecer a lo largo de todo el proceso, a fin de defender con eficacia sus intereses en juego. BURGOS,V. (2002).	La ley 30364 y su reglamento establecen que la audiencia del ámbito de tutela se realiza sin la presencia del denunciado, y si está disconforme con las medidas de protección emitidas en dicha audiencia, puede apelar.	Contenido esencial del derecho de defensa	Principio de contradicción  Derecho a ser informado de la acusación
				Manifestaciones del derecho de defensa	Contestación de hechos denunciados
				Restricciones al derecho de defensa	Procesos inaudita parts  Procesos monitoreos

### Anexo 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: Ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado - Distrito Judicial La Libertad, 2019.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	HIPÓTESIS	OBJETIVOS	VARIABLES	MARCO TEÓRICO (ESQUEMA)	DIMENSIONES	MÉTODOS
<p><i>Problema general</i></p> <p>¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019?</p>	<p><i>Hipótesis General</i></p> <p>Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019</p>	<p><i>Objetivo General</i></p> <p>Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019</p>	<p>Ámbito de tutela especial</p>	<p>Definición:</p> <p>Características:</p> <p>Naturaleza Jurídica:</p> <p>Etapas:</p>	<p>Denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar</p> <p>Medidas de protección</p> <p>Medidas cautelares</p> <p>Audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares</p> <p>Impugnación de la resolución</p>	<p>No experimental</p> <p>Correlacional causal</p>

<i>Problemas específicos</i>	<i>Hipótesis Específicas</i>	<i>Objetivos específicos</i>			que emite medidas de protección y/o cautelares	
Pe1: ¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019?	He1: Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019	OE1: Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019			Fuente: PRIORI POSADA, G. (2005). El Derecho Fundamental a la Tutela Cautelar: Fundamentos, contenido y límites. En Estudios de Derecho Procesal Civil. Lima: lus et veritas.	
Pe2: ¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en las manifestaciones	He2: Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en las manifestaciones	OE2: Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las	Derecho de defensa	Definición: Características:	Contenido esencial del derecho de defensa	



<p>del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019?</p> <p>Pe3: ¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019?</p>	<p>del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019</p> <p>He3: Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019</p>	<p>manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019</p> <p>OE3: Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019</p>	del denunciado	<p>Marco doctrinario:</p> <p>Marco Normativo</p> <p>Jurisprudencia:</p> <p>Alcances:</p> <p>Expresiones:</p> <p>Tipos:</p> <p>Límites:</p>	<p>Manifestaciones del derecho de defensa</p> <p>Restricciones del derecho de defensa</p> <p>Fuente: MONROY GALVEZ, J. (2007). Teoría General del Proceso. Lima: Palestra.</p>	
--	---	--	----------------	--	--	--

**Anexo 6: CUESTIONARIO DE ENCUESTA**  
**ENCUESTA ÁMBITO DE TUTELA ESPECIAL DE LA LEY 30364**

El siguiente cuestionario ÁMBITO DE TUTELA ESPECIAL DE LA LEY 30364.

Se solicita a los participantes sean objetivos, honestos y sinceros con sus respuestas. Se agradece de forma anticipada por su colaboración, los resultados que se obtengan en esta investigación científica permitirán determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

**INSTRUCCIONES:**

El cuestionario incluye tres alternativas de respuestas. Preste atención a cada una estos ítems así como las opciones de respuesta que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (X) en la alternativa que considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces ocurren estas situaciones en su institución.

- Si no ocurre, marca la alternativa **NUNCA (0)**
- Si ocurre pocas veces, marca la alternativa **A VECES (1)**
- Si ocurre continuamente, marca la alternativa **SIEMPRE (2)**

Nº	DIMENSIONES	NUN CA (0)	A VECES (1)	SIEMP RE (2)
<b>Denuncia por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar</b>				
<b>Requisitos</b>	01.- ¿Se exigen los mismos requisitos a las denuncias interpuestas por hombres que a las denuncias interpuestas por mujeres?			
	02.- ¿Las denuncias se interponen con la sola invocación de un hecho de violencia?			

<b>Medidas de protección</b>				
Naturaleza	03.- ¿Las medidas de protección son tratadas como medidas cautelares?			
	04.- ¿Con qué frecuencia se dictan las medidas de protección?			
Presupuestos	05.- ¿Las medidas de protección se dictan en función a los principios de razonabilidad y proporcionalidad?			
	06.- ¿Se dictan medidas de protección en los casos de riesgo leve?			
alcance	07.- ¿El denunciado suele cumplir las medidas de protección?			
	08.- ¿Suelen dictarse medidas de protección genéricas?			
<b>Medidas cautelares</b>				
Presupuestos	09.- ¿Las medidas cautelares se dictan en función a los principios de razonabilidad y proporcionalidad?			
	10.- ¿Suelen dictarse medidas cautelares de oficio?			
alcance	11.- ¿El denunciado suele cumplir las medidas cautelares?			
	12.- ¿Suelen dictarse medidas cautelares sobre tenencia y alimentos?			
<b>Audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares</b>				

desarrollo	13.- ¿Suele citarse al denunciado para la audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares?			
	14.- ¿Debería citarse al denunciado para la audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares?			
	15.- ¿El denunciado suele enterarse de manera extrajudicial de la realización de la audiencia de decisión de medidas de protección y/o cautelares?			
	16.- ¿Existe confrontación entre las partes cuando el denunciado acude a la audiencia de medidas de protección y/o cautelares?			
	17.- ¿Deberían tramitarse las medidas de protección conforme al procedimiento cautelar establecido en el Código Procesal Civil?			
<b>Impugnación de la resolución que emite medidas de protección y/o cautelares</b>				
Presupuestos	18.- ¿Los denunciados que apelan las medidas de protección invocan como agravios la vulneración a su derecho de defensa?			
	19.- ¿La apelación es empleada como mecanismo para cuestionar, además de las medidas de protección, la falta de citación a audiencia?			

	20.- ¿La Sala suele pronunciarse por el derecho de defensa del denunciado pese a que no fue objeto de cuestionamiento en la apelación?			
--	--	--	--	--

### **ENCUESTA DERECHO DE DEFENSA DEL DENUNCIADO**

El siguiente cuestionario DERECHO DE DEFENSA DEL DENUNCIADO.

Se solicita a los participantes sean objetivos, honestos y sinceros con sus respuestas. Se agradece de forma anticipada por su colaboración, los resultados que se obtengan en esta investigación científica permitirán determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

#### **INSTRUCCIONES:**

El cuestionario incluye cuatro alternativas de respuestas. Preste atención a cada una de estos ítems así como las opciones de respuesta que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (X) en la alternativa que considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces ocurren estas situaciones en su institución.

- Si no ocurre, marca la alternativa **NUNCA (0)**
- Si ocurre pocas veces, marca la alternativa **A VECES (1)**
- Si ocurre continuamente, marca la alternativa **SIEMPRE (2)**

Nº	DIMENSIONES	NUN CA (0)	A VECES (1)	SIEMP RE (2)
<b>Contenido esencial del derecho de defensa</b>				
Principio de contradic	21.- ¿El denunciado se halla presente en el ámbito de tutela?			

	22.- ¿El denunciado es oído en el ámbito de tutela?			
	23.- ¿El denunciado tiene menor capacidad probatoria que la parte denunciante en el ámbito de tutela?			
	24.- ¿El denunciado cuenta con el tiempo necesario para formular su defensa ante la denuncia en el ámbito de tutela?			
Derecho a ser informado de la acusación	25.- ¿El denunciado es informado del contenido de la denuncia antes de la audiencia de medidas de protección y/o cautelares?			
	26.- ¿El denunciado conoce qué medidas de protección o cautelares se debatirán en la audiencia?			
	27.- ¿El denunciado es informado de los medios probatorios que serán valorados en la audiencia de medidas de protección y/o cautelares?			
	28.- ¿En la audiencia suele introducirse hechos distintos a los expuestos en la denuncia?			
<b>Manifestaciones del derecho de defensa</b>				
Respuesta a la denuncia	29.- ¿El denunciado busca contestar los hechos denunciados en el ámbito de tutela?			

	30.- ¿El denunciado ve restringido el ejercicio de su defensa material a diferencia de la parte denunciante?			
	31.- ¿El denunciado no tiene acceso a la defensa técnica gratuita en las mismas condiciones que la parte denunciante?			
	32.- En caso de asistir a la audiencia ¿el denunciado contradice los hechos que se le imputan?			
	33.- ¿En los procesos cautelares se posterga el derecho de defensa del afectado hasta después de ejecutada la medida cautelar?			
<b>Restricciones al derecho de defensa</b>				
Procesos inaudita parts	34.- ¿la justificación de la postergación del derecho de defensa del afectado con medida cautelar debe justificarse con la concurrencia de la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y razonabilidad?			
	35.- ¿Las medidas de protección se dictan como proceso inaudita parts?			
	36.- ¿El afectado con medidas de protección puede ejercer su derecho de defensa después de ejecutadas dichas medidas?			

Procesos monitorios	37.- ¿Los procesos monitorios garantizan el derecho de defensa del demandado?			
	38.- ¿Los procesos monitorios garantizan el derecho a la pluralidad de instancias?			
	39.- ¿Los procesos monitorios son más céleres que los procesos comunes?			
	40.- ¿El ámbito de tutela se viene tramitando como proceso monitorio?			



K	40
$\Sigma Vi$	10.9901961
$Vt$	5.62418301
sección 1	1.02564103
sección 2	-0.95409646
absoluto s2	0.95409646

### Anexo 7: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

MATRIZ DE DATOS: Resultado de aplicar un instrumento de 40 ítems a una muestra piloto de 18 sujetos. Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach.

**ALFA 0.97856047**

variable independiente: ámbito de tutela especial

variable dependiente: derecho de defensa del denunciado

Sujeto	it1	it2	it3	it4	it5	it6	it7	it8	it9	it10	it11	it12	it13	it14	it15	it16	it17	it18	it19	it20	it21	it22	it23	it24	it25	it26	it27	it28	it29	it30	it31	it32	it33	it34	it35	it36	it37	it38	it39	it40
1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	0	2	2	1	2	1	2	1	2	2	0	1	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	2	2	2	2	0	2	1	2	0
2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	0	2	2	2	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	1	0	2	2	2	1	0	2	1	2	0
3	1	2	0	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	0	2	2	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	2	2	1	1	1	2	2	0
4	2	2	1	2	2	0	2	2	2	1	2	1	2	1	0	2	1	2	2	0	1	1	2	0	1	2	1	1	1	1	0	2	2	1	2	1	1	1	1	0
5	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	0	1	1	1	1	2	0	0	0	2	2	0	1	2	1	1	0	2	1	1	0
6	2	1	2	1	2	1	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1	2	2	2	0	1	1	2	1	2	1	0	1	1	0	0	2	2	1	2	0	1	2	2	0
7	1	2	0	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	2	2	1	2	1	1	0
8	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	1	2	0	1	2	2	0
9	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	0	1	1	0	1	2	2	2	1	0	2	1	2	0
10	2	1	1	1	1	0	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	1	1	1	2	1	2	0	1	2	2	1
11	1	2	1	2	1	1	2	2	2	0	2	1	1	2	0	2	2	2	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	2	1	2	2	1	2	1	2	0
12	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	0	1	2	2	2	0	1	1	2	0
13	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	0	2	2	2	0	1	0	2	0	0	1	0	1	2	1	1	2	2	2	2	0	1	2	2	1
14	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	1	2	2	2	1	0	1	1	2	0
15	2	2	2	2	2	1	2	1	2	0	2	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	2	0	1	2	0	0	1	0	0	2	2	2	1	0	1	2	2	0
16	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	2	2	2	1	0	1	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	2	1	1	2	1	2	0
17	2	2	0	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1	0	0	2	2	2	1	1	1	2	2	0
18	2	1	2	2	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	1	2	2	1	1	0	1	1	2	0	1	0	2	1	1	0	0	2	2	2	1	0	2	1	2	1
Varianza	0.26	0.21	0.59	0.21	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.21	0.24	0.25	0.24	0.65	0.21	0.45	0.24	0.26	0.26	0.25	0.24	0.33	0.21	0.26	0.53	0.45	0.37	0.18	0.22	0.37	0.24	0.21	0.10	0.21	0.26	0.24	0.26	0.25	0.15	0.15

53  
48  
48  
51  
47  
50  
46  
46  
46  
46  
49  
48  
51  
49  
46  
45  
45  
45

## Anexo 8: Base de datos de encuesta

		VARIABLE INDEPENDIENTE ÁMBITO DE TUTELA ESPECIAL																		VARIABLE DEPENDIENTE: DERECHO DE DEFENSA DEL DENUNCIADO																						
		denuncia		medidas de					medidas				audiencia					impugnación			contenido esencial								manifestaciones					restricciones								
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	
		2	1	2	2	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	1	2	2	1	1	0	1	1	2	0	1	0	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	0	2	1	2	0
		2	2	0	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1	0	2	1	1	2	0	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	0	1
		1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	1	2	2	2	1	0	1	2	1	1	1	0	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2
		2	2	2	2	2	1	2	1	2	0	2	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	0
		1	2	2	2	1	1	2	1	0	0	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	0	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	0
		2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	0	2	1	0	0	2	2	0	1	0	2	0	0	1	0	2	2	0	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1
		2	2	2	1	2	1	2	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	1	2	0
		1	2	1	2	1	1	2	2	0	0	2	1	1	2	0	2	2	2	1	1	1	1	2	1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	0
		2	1	1	1	1	0	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	0	2	2	1	1	2	0	0	2	2	1	2	2	2	1	2	0	1	2	2	2	
		1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	1	2	1
		2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	0	2	2	2	1	1	2	0	1	2	2	2	2	2	1	2	0	1	2	2	1	
		1	1	0	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	0	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	0	
		2	1	2	1	2	1	2	0	2	0	2	1	1	1	1	1	2	2	2	0	1	1	2	2	2	2	0	1	2	1	2	2	2	1	2	0	2	2	2	0	
		1	1	1	2	2	2	1	0	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	0	2	1	2	1	2	0	0	2	2	2	2	2	2	1	2	0	2	1	1	2	
		2	2	1	2	0	0	2	2	2	1	2	1	2	1	0	2	1	2	2	0	1	1	2	0	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	0	
		1	2	0	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	0	2	2	1	1	0	1	2	2	2	2	1	0	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	0
		2	2	1	1	2	1	0	2	1	1	2	1	2	2	1	0	2	2	2	0	1	1	2	2	1	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	1	2	0	
		1	0	2	1	1	1	1	2	2	0	2	2	1	2	1	2	1	2	2	0	2	2	0	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	0	2	1	2	0
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	
Nunca	0	0	1	3	1	1	2	1	2	3	6	0	0	1	4	5	2	2	0	0	11	2	3	1	4	2	4	9	1	0	1	0	0	0	0	0	8	1	0	1	11	
A veces	1	8	6	6	5	8	14	7	6	7	12	7	11	11	6	13	9	6	8	9	7	11	9	3	8	9	9	4	12	1	6	4	0	1	4	5	7	7	11	1	4	
Siempre	2	10	11	9	12	9	2	10	10	8	0	11	7	6	8	0	7	10	10	9	0	5	6	14	6	7	5	5	5	17	11	14	18	17	14	13	3	10	7	16	3	

## **Anexo 9: GUÍA DE ENTREVISTA PARA JUECES**

### **1. PRESENTACIÓN**

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019. Es en este contexto problemático que se plantea como técnica a la entrevista e instrumento a la guía de entrevista que permita tener un contacto directo con los expertos en el tema de estudio y de esta forma validar la hipótesis planteada.

### **2. INSTRUCCIONES.**

Para la ejecución de la entrevista deberá considerarse los grupos o categorías de las personas a entrevistar, luego se debe realizar la primera comunicación con el entrevistado, posterior a ello debe plantearle la problemática, y finalmente concertar la cita que haga efectiva dicha práctica de recojo de información.

En la Entrevista propiamente dicha, deberá realizarse la contextualización del problema y la hipótesis, luego de abordar la vinculación entre variables, iniciar con la entrevista teniendo en cuenta técnicas basadas en la acción comunicación y no dejarlo aislado solo a una secuencia de preguntas y respuestas, sino en base a la habilidad del Entrevistador lograr generar una conversación de intercambio de saberes y de aprendizaje continuo.

### **3. CUERPO.**

En este apartado se deberá tener en cuenta la secuencia de preguntas que se realizarán a los especialistas y la finalidad de cada pregunta para validar la hipótesis, asimismo se indica que con la entrevista se pretende dar cumplimiento a los objetivos específicos, que son los siguientes:

- Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019
  
- Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019
  
- Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

Atendiendo a los objetivos anteriores se propone la siguiente estructura:

**Para el primer objetivo específico**

1. ¿Citar al denunciado a la audiencia de tutela especial garantiza el contenido esencial de su derecho de defensa, específicamente del contradictorio y el derecho a ser informado de la acusación?
  
2. De citar a audiencia al denunciado ¿Qué medidas emplea para evitar la confrontación y revictimización?

**Para el segundo objetivo específico**

3. ¿El trámite que se utiliza para obtener medidas de protección es el mismo que el utilizado para obtener medidas cautelares en el ámbito de tutela de la ley 30364?
  
4. En su experiencia como magistrado ¿los denunciados citados a la audiencia suelen asistir para ejercer su derecho de defensa?
  
5. Las medidas cautelares se caracterizan por ser *inaudita pars*; sin embargo ¿dicho principio significa la supresión o diferimiento del derecho de defensa?
  
6. ¿la oposición es un recurso o una manifestación del derecho de defensa?

### **Para el tercer objetivo específico**

7. ¿Considera que ante la restricción del derecho de defensa del denunciado en el ámbito de tutela, debería de brindársele el derecho a formular oposición, al igual que en el procedimiento cautelar del proceso civil peruano?
8. ¿Cree que el ámbito de tutela de la ley 30364 es prácticamente un proceso monitorio?

### **4. CIERRE.**

Finalmente luego de haber realizado la entrevista, confrontado ideas, aportado al desarrollo de la misma y haber obtenido los presupuestos necesarios para la validación de la hipótesis; se deberá realizar una revisión integral de las respuestas y se agregara algún fundamento que haya quedado aislado en el transcurso de la entrevista, y posterior a ello se presentara a la entrevista final.

## **Anexo 10: GUÍA DE ENTREVISTA PARA ABOGADO**

### **1. PRESENTACIÓN**

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019. Es en este contexto problemático que se plantea como técnica a la entrevista e instrumento a la guía de entrevista que permita tener un contacto directo con los expertos en el tema de estudio y de esta forma validar la hipótesis planteada.

### **2. INSTRUCCIONES.**

Para la ejecución de la entrevista deberá considerarse los grupos o categorías de las personas a entrevistar, luego se debe realizar la primera comunicación con el entrevistado, posterior a ello debe plantearle la problemática, y finalmente concertar la cita que haga efectiva dicha práctica de recojo de información.

En la Entrevista propiamente dicha, deberá realizarse la contextualización del problema y la hipótesis, luego de abordar la vinculación entre variables, iniciar con la entrevista teniendo en cuenta técnicas basadas en la acción comunicación y no dejarlo aislado solo a una secuencia de preguntas y respuestas, sino en base a la habilidad del Entrevistador lograr generar un conversación de intercambio de saberes y de aprendizaje continuo.

### **3. CUERPO.**

En este apartado se deberá tener en cuenta la secuencia de preguntas que se realizaran a los especialistas y la finalidad de cada pregunta para validar la hipótesis, asimismo se indica que con la entrevista se pretende dar cumplimiento a los objetivos específicos, que son los siguientes:

Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

Atendiendo a los objetivos anteriores se propone la siguiente estructura:

Para el primer objetivo específico

- 1.- ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en el ámbito de tutela de la ley 30364 en su calidad de abogado de la parte denunciada o de la parte agraviada?
- 2.- Cuando asume el rol de abogado del denunciado ¿Cuál es la estrategia de defensa que emplea para garantizar el contenido esencial de su derecho de defensa?

Para el segundo objetivo específico

- 3.- ¿Considera que la oposición empleada en las medidas cautelares civiles resultaría una manifestación efectiva de defensa para el denunciado en el ámbito de tutela de la ley 30364?

Para el tercer objetivo específico

- 4.- ¿Considera que el derecho de defensa del denunciado debería de restringirse o hasta suprimirse a fin de salvaguardar la integridad de la presunta víctima?

#### **4. CIERRE.**

Finalmente luego de haber realizado la entrevista, confrontado ideas, aportado al desarrollo de la misma y haber obtenido los presupuestos necesarios para la validación de la hipótesis; se deberá realizar una revisión integral de las respuestas y se agregara algún fundamento que haya quedado aislado en el transcurso de la entrevista, y posterior a ello se presentara a la entrevista final.

## **ANEXO 11: GUÍA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS**

### **1. PRESENTACIÓN**

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019. Es en este contexto problemático que se plantea como técnica al análisis de documentos y como instrumento a la guía de análisis de documentos que permita evaluar cualitativamente las resoluciones judiciales emitidas por los 18 Jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (9 especializados y 9 superiores) con competencia para conocer el ámbito de tutela especial regulado por la Ley N° 30364 y su Reglamento, durante el 2019; para de esta forma validar la hipótesis de estudio.

### **2. INSTRUCCIONES.**

Para la ejecución del análisis de documentos consistentes en las resoluciones judiciales deberá considerarse los extremos referidos a la citación para la audiencia de medidas de protección, tiempo entre la citación y la audiencia, participación del denunciado en la audiencia, pronunciamiento de sala respecto al derecho de defensa y observaciones finales, y en ellas se realizara un análisis cualitativo que permita entender y comprender la incidencia del ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado, en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

En el análisis de documentos deberá realizarse una evaluación integral y con fundamentos razonables atendiendo a la teoría de la verdad judicial, teoría general del proceso y teoría de los derechos fundamentales, se lograra realizar el examen cualitativo.



### 3. PROCEDIMIENTO.

Como se mencionó en las instrucciones, se obtuvieron resoluciones judiciales emitidas en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, sobre el ámbito de tutela especial regulado por la Ley N° 30364, los mismos que se eligieron de manera aleatoria a partir de aquellos expedientes que fueron remitidos en apelación a la Primera Sala Civil de Trujillo, por cuanto ya en segunda instancia resultan más completos para la investigación dado que han recorrido las dos instancias que contempla la mencionada ley, lo cual permite ordenar y sistematizar la información para llevar un orden coherente entre lo propuesto y planteado para la evaluación, y con ello cumplir con todos los objetivos (general y específicos):

- **General:** Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019
- **Específicos:**
  - Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019
  - Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019
  - Determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019

Al momento de analizar cada norma, debe considerarse:

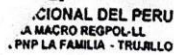
- i. citación para la audiencia de medidas de protección
- ii. tiempo entre la citación y la audiencia
- iii. participación del denunciado en la audiencia
- iv. pronunciamiento de sala respecto al derecho de defensa

- v. observaciones finales

#### **4. CIERRE.**

Finalmente luego de haber realizado el análisis de involucrados, confrontado ideas, aportado al desarrollo de la misma y haber obtenido los presupuestos necesarios para la validación de la hipótesis; se deberá realizar una revisión integral de los resultados y se presentaran los mismos.

**Anexo 12: INFORME N° 210-19-III MACREGPOL LL/DIVOPUS-T/CPNP FAMILIA.SEC.**

  
POLICIA NACIONAL DEL PERU  
LA MACRO REGPOL-LL  
PNP LA FAMILIA - TRUJILLO

**INFORME N° 210-19-III MACREGPOL LL/DIVOPUS-T/CPNP FAMILIA.SEC.**

**Señor** : COMANDANTE PNP.  
Marco Antonio QUEZADA TAVARA.  
JEFE DE DIVOPUS PNP TRUJILLO

**Asunto** : Emite informe respecto a la ejecución de las medidas protección desde el día 02MAY2018 a la fecha de esta CPNP Especializada La Familia.

**Ref.** : Decreto N° 1387-2019-III-MRP.LL/REGPOL.LL/DIVOPUS-T-SEC., Del 06NOV2019.

1. Procedente de la DIVOPUS PNP- TRUJILLO, se recepciono el documento de la referencia, proveniente del presidente de la comisión de trabajo Distrito Judicial La Libertad encargada del programa de implementación de la Ley N° 30364, solicitando se informe el Reporte de las Medidas de Protección Ejecutadas desde el día 02MAY2018 a la fecha, en el marco de la Ley N°30364; pertenecientes a esta CPNP Especializada la Familia.
2. Con respecto a las medidas de protección del año 2018, que realizada la verificación de los archivos pasivos que obran en esta Dependencia Policial en el área de medidas de protección, existe un cuaderno "Cuaderno de Registro de Medidas de Protección" donde se registra un total de TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES (353) medidas de protección provenientes del Juzgado de Familia, las mismas que fueron evacuadas a las diferentes comisarías de La Libertad a fin de que sean ejecutadas e informadas a los juzgados correspondientes.
3. Asimismo, las medidas de protección del año 2019, realizada la verificación de los archivos pasivos y activos que obran en esta Dependencia Policial en el área de medidas de protección, se corrobora que existe UN (01) cuaderno, denominado "Cuaderno de registro de Medidas de Protección "en el cual se registra un total de TRESCIENTOS SESENTA Y UNO (361) medidas de protección provenientes del Juzgado de Familia, de las cuales DOSCIENTOS CINCUENTA (250) fueron evacuadas a las diferentes comisarías de La Libertad y CIENTO ONCE (111) fueron ejecutadas y monitoreadas por esta SubUnidad PNP, cumpliendo en el plazo establecido con la evacuación de los informes respectivos a la autoridad competente.

Lo que cumpla en Informar a Ud., para los fines que estime por conveniente.

V°B°

Trujillo, 06 de noviembre del 2019.



OA- 331870  
Andrea Julissa CACERES OBREGON  
MAYOR PNP  
COMISARIO DE LA CPNP ESPECIALIZADA, LA FAMILIA - TRUJILLO



OA- 371525  
Katty Y. MARCELO MONTERO  
ALFZ. PNP

## Anexo 13: INFORME N° 28-2019-ADM-MJIVMIGF-CSJLL



PODER JUDICIAL  
DEL PERÚ

### CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

#### MODULO DE FAMILIA SUB ESPECIALIDAD EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

#### INFORME N° 28-2019-ADM-MJIVMIGF-CSJLL

**PARA:** DR. JUAN VIRGILIO CHUNGA BERNAL  
Presidente de la Comisión Distrital de Implementación de la Ley N°  
30364 Corte Superior de Justicia de la Libertad

**DE:** YSELA CARRERA RENGIFO  
Administradora del MJL en Violencia contra la Mujer e Integrantes del  
Grupo Familiar.

**ASUNTO:** INFORME SOBRE MÓDULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA  
CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.

**FECHA:** Trujillo, 31 de Diciembre de 2019.

Señor Presidente:

En mi condición de Administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra La Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, (en adelante Módulo de Violencia) tengo el honor de dirigirme a su Despacho, a efectos de elevar el presente informe con la finalidad de hacer de su conocimiento la situación funcional, estructural, y carga procesal del Módulo de Violencia al 31 de diciembre del año 2019.

#### I. ANTECEDENTES.

Por Resolución Administrativa N° 0412-2019- P-CSJLL/PJ, de fecha 31 de Mayo del año 2019, se resuelve designar a mi persona, a partir del 01 de Junio del 2019, en el cargo de confianza de Administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra Las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar adscrita a la Corte Superior de Justicia de La Libertad

#### II. JUECES Y PERSONAL ADSCRITO

##### a) Jueces.

JUZGADO	NOMBRE DE MAGISTRADO
7°	ANA KARINA ARMAS CUEVA
8°	COLETTE MARIA UCEDA VELIZ
9°	JOSÉ ANTONIO GALVEZ VIDAL
10°	KATHERINE DORA GRANDA FERNANDEZ

#### MEDIDAS DE PROTECCION DICTADAS 2019

ENERO	1018
FEBRERO	725
MARZO	1042
ABRIL	1080
MAYO	1044
JUNIO	889
JULIO	837
AGOSTO	777
OCTUBRE	745
NOVIEMBRE	614
SETIEMBRE	864
DICIEMBRE	569
<b>Total general</b>	<b>10,204</b>

#### IV. ESTADO ACTUAL DE ÁREAS DEL MODULO DE VIOLENCIA.

Con fecha 24 de Junio del Presente año, en reunión con integrantes de la Comisión Distrital de Implementación de la Ley 30364, se aprobó la propuesta elevada mediante Informe N° 10-2019-ADM-MJIVMIGF-CSJLL, por la cual se suprimió el área de redacción de actas y estructuralmente el Módulo queda con las siguientes áreas:

- α) **Área de recepción y calificación de denuncias escritas y/o verbales y redacción de autos de citación.** En el área antes precisada, los Secretarios verifican a través de la búsqueda en el sistema integrado judicial la existencia de otras denuncias procesos penales seguidos entre las mismas partes y que se tramitan en otros Juzgados; y en el caso de existir antecedentes, se imprimen las resoluciones que resolvieron dichos casos y con todo ello dan cuenta a los ocho Jueces para la calificación de las denuncias y emisión del auto de citación audiencia. En esta misma área el personal de apoyo notifica al demandante vía telefónica, correo electrónico o a través de cédula física, y también se elaboran oficios al Instituto de Medicina Legal para la remisión de los certificados médicos y protocolos psicológicos.



## Anexo 14: DOCUMENTO 1

15° JUZGADO DE FAMILIA - SUB ESPEC VIOLENC. CONTRA MUJ.  
EXPEDIENTE : C  
MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR  
JUEZ :  
ESPECIALISTA :  
DEMANDADO :  
AGRAVIADO :  
DEMANDANTE :

### RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO

Guadalupe, veinte de junio del año  
dos mil diecinueve.

**AUTOS Y VISTOS**, dado cuenta con la Denuncia presentada a través del centro de Emergencia Mujer San José de fecha 07 de mayo del 2019, Informe social de la agraviada y actuados policiales remitidos por la Comisaria PNP Ciudad de Dios con fecha 07 de junio de 2019 ; **AGREGUESE A LOS AUTOS y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** La ley N° 30364 "Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar", en su artículo 14° establece que, los Jueces de Familia o los que cumplan sus funciones, son competentes, para conocer las "denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar".

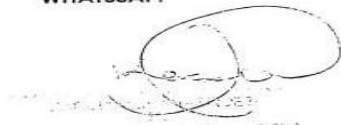
Mediante Resolución Administrativa N° 046-2018-CE-PJ, se crea el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las mujeres e integrantes del Grupo Familiar dentro de la Corte Superior de Justicia La Libertad, siendo así este Despacho resulta competente para conocer denuncias al respecto.

**SEGUNDO.** Del contenido de la Denuncia presentada a través del centro de Emergencia Mujer San José de fecha 07 de mayo del 2019 y actuados policiales remitidos por la Comisaria PNP Ciudad de Dios con fecha 07 de junio de 2019, se advierte actos de violencia contra la mujer en la modalidad de violencia física en agravio de

por lo corresponde proceder conforme a ley.

Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 16 de la Ley N° 30364, **SE RESUELVE:**

- **SEÑALAR** la realización de la diligencia de **AUDIENCIA DE DECISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN** para el día **VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2019 A LAS OCHO DE LA MAÑANA**, hora exacta, en el local del Décimo Quinto Juzgado de Familia de Guadalupe sito en calle 05 de marzo N° 166 (segundo piso), con la concurrencia obligatoria de las partes.
- **INTERRUMPASE** el plazo debido al saturado rol de audiencias, conforme lo establece el artículo 317° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso.
- **NOTIFIQUESE A LAS PARTES VIA TELEFONICA.**
- **NOTIFIQUESE AL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER SAN JOSE VIA WHATSSAP.**



SHARON YESABEL FLORES BEYODAS  
SECRETARÍA JUDICIAL

## Anexo 15: DOCUMENTO 2



### Corte Superior de Justicia de La Libertad Primera Sala Civil

actos de violencia familiar en su contra, y que permitan sustentar racionalmente una decisión jurisdiccional.

[2] Se afectaría el derecho al debido proceso y el derecho de defensa del denunciado con una medida como la solicitada, pues, pese a su condición de denunciado (agresor) tiene innegable derecho al debido proceso y a la defensa, comprendiendo este último la necesidad de conocer los cargos que se le imputan (en contra de sus hijos) y producir la prueba y contraprueba correspondiente; debiendo recordarse que estos son derechos fundamentales que están contemplados en el artículo 139, incisos 3º y 14 de la Constitución, y que todo Juez debe observar como condición de validez de sus decisiones.

Anexo 16: DOCUMENTO 3

hora exacta en el local del juzgado, con tal fin **CÍTESE** al agraviado para su concurrencia a la referida audiencia. Cabe precisar que esta resolución no se notificará a la parte demandada, pues el artículo 35 del DECRETO SUPREMO N° 009-2016-MIMP, establece: "35.1. *El Juzgado de Familia puede realizar audiencia con la sola presencia de las víctimas o sin ellas. En caso que las circunstancias lo ameriten, dicta las medidas de protección o cautelares correspondientes, en el plazo de 72 horas que establece la ley. Cuando el Juzgado lo considere necesario entrevista a la persona denunciada. Para efectos del cómputo de los plazos se considera las dificultades geográficas en zonas rurales.* 35.2. *Si la persona denunciada asiste a la audiencia se le tiene por notificada en el mismo acto, de conformidad con el artículo 204 del Código Procesal Civil.* 35.3. *La citación a la víctima se realiza a través de cédula, facsímil, teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación", es decir, la referida norma exige que se notifique a la parte agraviada con la resolución que señala fecha para la audiencia de medidas de protección, pero no exige que dicha resolución también se notifique a la persona denunciada, salvo que asista por su cuenta a la audiencia, en donde se le notificará con la resolución que se emita en dicho acto. La audiencia se señala en la fecha indicada debido a la excesiva carga procesal de esta secretaría y a que este juzgado no cuenta con técnicos ni auxiliares. Dada la distancia del domicilio (Usquil) del agraviado y contándose con su número telefónico, **NOTIFIQUESELE vía telefónica.-***



## Anexo 17: DOCUMENTO 4

### IV. FUNDAMENTOS DE LA SALA.

4.1. La Sala advierte que no es posible realizar ninguna labor de *revisión* de la resolución número dos impugnada, por cuanto los hechos que se exponen en el recurso de apelación no constituyen *agravios* directamente relacionados con su contenido y los juicios de valor emitidos por la señora Juez de primera instancia; así como tampoco es posible su *integración*, pues, los mismos hechos que se invocan no han sido materia de pronunciamiento en ninguno de sus extremos.

4.2. Debe tenerse en cuenta que **los medios impugnatorios están concebidos como correctivos al alcance de los justiciables para eliminar un posible defecto en el proceso o acto procesal, o la injusticia de una decisión.** Surgen por voluntad exclusiva de las partes en ejercicio del *principio dispositivo* que gobierna el proceso civil, cuyas reglas se aplican, en materia recursiva, a los procedimientos de violencia familiar. Tratándose del recurso de *apelación*, este es expresión del **principio constitucional de doble instancia** previsto en el artículo 139, inciso 6°, de la Constitución; y **es el recurso ordinario cuyo objeto es que el órgano jurisdiccional superior examine una resolución que, a juicio del apelante, contiene vicio de forma que la invalida o juicio**

**erróneo sustentado en una defectuosa o equivocada valoración de los hechos y de las pruebas que sustentan, a su vez, una decisión que entiende injusta;** y que es precisamente la razón en que se apoya el pedido de revisión, conforme así se deduce de lo previsto por el artículo 364 del Código Procesal Civil.

4.3. De otro lado, según informa la Doctrina sobre la materia<sup>1</sup>, en cuanto al objeto de la apelación existen dos sistemas: uno que permite la total revisión de lo resuelto por la primera instancia, y el otro que sólo controla la resolución. El Código Procesal Civil adopta este segundo sistema al prescribir en su artículo 364 que ésta [la apelación] "(...) *tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine (...) la resolución que le produzca agravio*". De tal manera que el **agravio se convierte en la condición que la parte debe alegar para estar habilitada a impugnar una resolución determinada, a fin de reparar el perjuicio que le produce, sea con su anulación o revocación total o parcial.** Así "*El agravio o perjuicio mide el interés que se requiere como presupuesto para apelar* (...) **La ausencia de agravio genera el rechazo de la apelación**"<sup>2</sup>.

4.4. De otro lado, **el artículo 366 del Código Procesal Civil establece como condición indispensable del recurso de apelación su fundamentación, la indicación del error de hecho o de derecho incurrido en la resolución que se cuestiona, precisando la naturaleza del agravio y sustentando la pretensión impugnatoria.** Esto es, se exige exponer una crítica concreta y razonada en torno al contenido de la resolución que se cuestiona, ya sea que se indique error en la valoración de los hechos en razón de haberse formado convicción o certeza sobre la base de una apreciación defectuosa o insuficiente de la prueba o, de lo contrario, haya efectuado una aplicación errónea del derecho al caso o haya interpretado indebidamente la norma que lo subsume; pero, debe existir una exposición precisa de aquello que se considera erróneo en la resolución que se impugna, porque sólo de esa manera se permite también la labor de revisión del órgano superior y, a la vez, determina cuales extremos, al no ser impugnados, quedan firmes para las partes.

## Anexo 18: DOCUMENTO 5

EXPDTA No  
Especialista:  
Escrito No 01  
Cuaderno Principal  
APELA DE RESOLUCION No 02

Señor(a)(ita) Juez del Juzgado de Familia

con DNI No  
con domicilio real en el Jr. Trujillo No C.  
P. San Martín de Porres-Distrito de  
con domicilio legal en esta localidad en calle  
Tomás La Fera No Albuja y Guarniz  
con los seguidos  
bre VIOLENCIA FAMILIAR, a Ud. digo:

Que NO encuentro arreglada a Ley NI al mérito  
de los actuados la RESOLUCION No 02 por la que se DICTA MEDI  
DAS DE PROTECCION a favor de la actora, en consecuencia APE  
LO DE ELLA por ante la Superior Sala Civil que revisa este  
tipo de controversias DONDE LA PERO ALCANZAR SU REVOCATORIA.  
FUNDAMENTACION DEL AGRAVIO, ERRORES DE HECHO Y DERECHO :

1.-Es insólito que se ordene que cumpla con me  
didas de protección a favor de la actora, sino he sido legal  
mente emplazada, pues, se hizo la notificación por celular, pe  
ro esta se hizo en la tarde del día anterior al día de la  
citación a su Despacho, NO HABIENDOSE CUMPLIDO CON EL PLAZO -  
ESTABLECIDO POR LEY; esto es tres días entre la notificación y  
el acto procesal, por lo que TAMPOCO HE SIDO ESCUCHADO Y ME  
NOS VENCIDO en proceso regular. Error de derecho.

2.- Se ha violado mi derecho A LA TUTELA JURIS  
DICCIONAL EFECTIVA para el ejercicio y defensa de mis dere  
chos o intereses con Sujeción a UN DEBIDO PROCESO afectando -  
inclusive el Art. 16 de la Ley 30364, ya que, debido a la in -  
concurrencias de las partes NO SE HA EFECTUADO NINGUNA AU  
DIENCIA.- Otro error de Derecho.

3.- Para pronunciarse su Despacho ha tomado en  
cuenta: (considerado SEXTO) la DENUNCIA que hizo la actora -  
al Centro de Emergencia de la MUJER, esto, es UN DICHO que  
NO tiene valor legal sino se prueba. EL INFORME PSICOLOGICO  
No 66-2019, que NO VIENE A SER SINO UN RELATO DE LA DENUN  
CIANTE en el que concluye el Psicólogo: "....Presenta afectación  
psicológica cognitivo conductual y emocional asociados a he -

de violencia ejercidos dentro del ámbito familiar su esposo". El psicólogo no explica que medio utilizó para llegar a tan curiosa conclusión y por lo que se aprecia de ella no viene a ser SINO LO DICHO POR LA PERITADA, pero, en otros términos, por lo que dicha pericia ADOLECE DE LA DEBIDA MOTIVACION CIENTIFICA que EXPLIQUE EL POR QUE DE SU PRONUNCIAMIENTO, esto es CUAL ES ESA APERCIBACION a la que se refiere, cuales son sus manifestaciones, nada de ello figura en el documento en cuestión el mismo que es meramente narrativo. -Este es un error de hecho, EL INFORME SOCIAL No 66-2019, sólo tiene por argumento LO QUE LA ACTORA HA MANIFESTADO y con ello se pronuncia y sobre el RECURRENTE sin siquiera haber conversado o haberme entrevistado CONCLUYE "QUE TENGO CELOS PATOLOGICOS Y QUE EJERZO MALTRATO PSICOLOGICO A LA USUARIA...", que sitúa una situación tan preocupante QUE SIN SIQUIERA CONOCERME HAGA UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE MI CARACTER, PERSONALIDAD Y FINALMENTE MI COMPORTAMIENTO y LA DECLARACION DE LA ACTORA quien inventa una agresión psicológica de mi parte para pretender encubrir EL ABANDONO INJUSTIFICADO DEL HOGAR CONYUGAL EL MISMO QUE SE OPERA EL 05.04.2009 sin IMPORTARLE EL RECURRENTE Y MENOS SUS MENORES HIJOS habidos con ella (CORRENTE) para despues fingir una agresión CON EL FIN DE ELIMINAR SU DESDENABLE Y DESNATURALIZADO COMPORTAMIENTO CON SUS ALUDIDOS HIJOS no importándole su dolor y sentimientos, PARA AHORA SER PREMIADA CON MEDIDAS DE PROTECCION, significando a Ud. QUE LO QUE MOTIVA ESTA INVESTIGACION SE OPERO, EN EL DICTADO DE LA DEMANDANTE, LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE MAYO 2019, esto es, AL MES DE SU ABANDONO, cuando NO SE TENIA NINGUN VINCULO ¿entonces como si ya hubo separación de hecho cómo es que se haya producido la agresión que se denuncia ?

Todo lo que expongo llega Sr.(a)(ita) Juez a desvirtuar lo denunciado, pues, NO EXISTE NINGUN MEDIO PROBATORIO CONSISTENTE QUE CORROBORE EL DICHO DE LA ACTORA. Todo lo que expongo refleja el error de hecho de su Despacho para emitir la resolución que se cuestiona.

4.-Del mismo modo su Despacho para convalidar su pronunciamiento que se apela se AMPARA en los Arts. 1o y 2o de la Constitución Política, pero lo hace unilateralmente YO TAMBIEN SOY PERSONA Y COMO TAL TENGO DERECHOS QUE NO ME LOS APLICA, HACIENDO UNA APERCIBION UNILATERAL, NO RESPETANDO LA IGUALDAD DE LAS PARTES y LA PRESUNCION DE INOCENCIA, etc.

## Anexo 19: DOCUMENTO 6

[3] Nada obsta a que el abogado del centro de Emergencia Mujer en Comisaría El Milagro solicite, con los medios de prueba o datos indiciarios mínimos, medidas de protección para los referidos menores, pero, siempre bajo las garantías enunciadas; debiendo recordarse que bajo las reglas previstas por el artículo 16 de la ley N° 30364, y artículo 35 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, las medidas de protección se dictan en audiencia a la que deben ser citadas las partes (incluido el denunciado) y sólo en caso de riesgo severo puede el Juez prescindir de citación a audiencia; de tal manera que cualquier decisión que se adopte al respecto **no puede hacerse en instancia única**, como se pretende, pues, se afectaría severamente los enunciados derechos constitucionales del denunciado.



## Anexo 20: DOCUMENTO 7

4.4. Particularmente, en relación al **derecho de defensa** habría que decir que éste se proyecta como un principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha puntualizado que "(...) **el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra**" [Expediente N° 0649-2002-AA/TC FJ 4].

**El debido proceso y el derecho de defensa en el marco de la Ley N° 30364 y su Reglamento.**

## **Anexo 21: PROYECTO DE LEY SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE TUTELA**

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

#### **I. Objeto del Proyecto**

La presente propuesta legislativa tiene por objetivo incorporar la oposición a las medidas de protección en el ámbito de tutela regulado por la Ley N° 30364 y su Reglamento, pues es un mecanismo que garantiza el derecho de defensa del denunciado.

#### **II. Fundamentación de la iniciativa Legislativa**

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en la Constitución Política del Perú (Const. PP), protegen el derecho de defensa con un énfasis especial en los procesos penales, estableciéndose como regla: “El juez o tribunal no podrá resolver válidamente si no escuchó de manera previa a ambas partes en condiciones de plena igualdad”, y como excepción: “El ejercicio del derecho de defensa se diferirá cuando sea necesario preservar los intereses de la justicia”; lo cual valida la existencia de procesos cautelares inaudita pars, en los que el derecho de defensa no se suprime sino que se difiere; por lo tanto, el ámbito de tutela de la Ley N° 30364 y su Reglamento resulta contrario a estos textos normativos de rango constitucional, pues suprime el derecho de defensa del denunciado en los casos de riesgo severo; y, si bien en los casos de riesgo leve y moderado permite su notificación para la audiencia, con ello afecta directamente la prohibición establecida en el artículo 25 de la Ley 30364 que establece: “En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. (...)”.

Por otro lado, en la doctrina, el derecho de defensa se manifiesta por excelencia en el derecho a la contradicción, el cual implica la posibilidad - en igualdad plena - de las partes de refutar la tesis expuesta en su contra, como

acto previo a la emisión de una decisión judicial; sin embargo, atendiendo a la justificación de los procesos cautelares y de protección a la víctima de violencia, el derecho de defensa puede ejercerse en bilateralidad plena o bilateralidad diferida; pero, nunca habrá de suprimirse o restringirse desproporcionalmente .

Finalmente, la oposición es un mecanismo de defensa que le asiste al afectado con medida cautelar, y teniendo en cuenta que las medidas de protección se tramitan conjuntamente con las cautelares, no existe justificación alguna para que el ámbito de tutela no contemple ningún mecanismo de defensa eficaz y proporcional a favor del denunciado.

En consecuencia, la regulación normativa del ámbito de tutela no garantiza el derecho de defensa del denunciado, porque no contempla la posibilidad de formular oposición a las medidas de protección; por ello, resulta necesaria la incorporación normativa de la oposición a las medidas de protección en el ámbito de tutela.

### **III. Análisis Costo Beneficio**

Si bien la incorporación de la oposición a las medidas de protección generará un leve aumento en la actividad jurisdiccional ante el juez de instancia; sin embargo, ello se compensa con la finalidad de la presente propuesta, pues contribuye al cumplimiento eficaz de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, brindando una mayor y mejor protección al derecho de defensa del denunciado; además, genera la posibilidad de que el ámbito de tutela no llegue a segunda instancia, sino que culmine en primera instancia resolviéndose la oposición; asimismo, los juzgados con sub especialidad en violencia familiar únicamente conocen el ámbito de tutela, el mismo que es bastante corto y célere, motivo por el cual es plenamente razonable que asuman el conocimiento de las oposiciones a las medidas de protección y/o cautelares.

### **IV. Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional**

La norma que se propone guarda absoluta coherencia con las normas contenidas en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, 08 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 1°, 2°, 55°, 56° y 138° de la Constitución Política del Perú de 1993.

La entrada en vigencia del presente Proyecto de Ley implicará la modificación del texto del artículo 16 de la Ley N° 30364, así como los artículos 35, 36 y 37 del D.S. N° 009-2016-MIMP

Asimismo, constará de cinco artículos.

## **FORMULA LEGAL**

### **PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 30364, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 37 DEL D.S. N° 009-2016-MIMP**

El Presidente de la república por cuanto:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

#### **Artículo 1.- Objeto**

La presente Ley tiene por objeto fortalecer la prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, mejorando los mecanismos de atención y protección de las víctimas, especialmente el marco de la no confrontación en el ámbito de tutela y la garantía del derecho de defensa del denunciado.

#### **Artículo 2.- Incorporación del inciso d) al artículo 16 de la Ley N° 30364**

Incorpóranse el inciso d) al artículo 16 de la Ley N° 30364, en los siguientes términos:

“Artículo 16 de la Ley N° 30364:



(...)

d) En los supuestos de los incisos a, b y c, las medidas de protección y cautelares son concedidas o rechazadas sin conocimiento de la parte denunciada. Procede apelación contra el auto que deniega las medidas. En este caso, el demandado no es notificado y el superior absuelve el grado sin admitirle intervención alguna.

Dictadas las medidas de protección o cautelares, la parte denunciada puede formular oposición dentro de un plazo de tres (3) días, contado desde que toma conocimiento del auto que dicta dichas medidas, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de las medidas.

De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto las medidas de protección y/o cautelares.

La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo (...).”.

### **Artículo 3.- Modificación de los numerales 35.1 y 35.2 del artículo 35 del D.S. N° 009-2016-MIMP**

Modifícanse los numerales 35.1 y 35.2 del artículo 35 del D.S. N° 009-2016-MIMP, en los siguientes términos:

“Artículo 35.- Convocatoria a la audiencia

35.1 El Juzgado de Familia cita a la víctima a través del medio más célere como facsímil, teléfono, correo electrónico personal o cualquier otro medio de comunicación, sea de manera directa o a través de su representante legal, dejando constancia de dicho acto.

Puede ser convocada mediante cédula de notificación sin exceder del plazo previsto en la ley para su realización.

35.2 Cuando el Juzgado de Familia no logre ubicar a la víctima para la citación o notificación a la audiencia, se deja constancia de ello y se lleva a cabo la audiencia.”

**Artículo 4.- Derogación del numeral 35.4 del artículo 35 del D.S. N° 009-2016-MIMP**

Derógase el numeral 35.4 del artículo 35 del D.S. N° 009-2016-MIMP que establece: “35.4. Si la persona denunciada asiste a la audiencia, se le tiene por notificada en el acto”.

**Artículo 5.- Incorporación del numeral 37.7 al artículo 37 del D.S. N° 009-2016-MIMP**

Incorpórase el numeral 37.7 al artículo 37 del D.S. N° 009-2016-MIMP, en los siguientes términos:

“Artículo 37.- Resolución final y su comunicación para la ejecución

(...)

37.7.- Dictadas las medidas de protección y/o cautelares, la parte denunciada puede formular oposición dentro de un plazo de tres (3) días, contado desde que toma conocimiento del auto que las dicta. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de las medidas.

Si se ampara la oposición, el juez deja sin efecto las medidas de protección y/o cautelares.

La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo”.

# **Anexo 22: ARTÍCULO CIENTÍFICO CON ESQUEMA UCV**

## **1. TÍTULO**

Ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado - Distrito Judicial La Libertad, 2019.

## **2. AUTOR**

Raúl Martínez Gonzáles

[rmartinez@ucvvirtual.edu.pe](mailto:rmartinez@ucvvirtual.edu.pe)

Universidad Privada César Vallejo

## **3. RESUMEN**

La Ley N° 30364 divide el proceso especial de lucha contra la violencia, en ámbito de tutela y de sanción; el primero no permite participar al denunciado en las mismas condiciones que la denunciante; frente a ello, se realizó esta investigación con el objetivo de determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, cuya importancia reside en que demostró la vulneración del derecho de defensa del denunciado, sirviendo de base para proponer la modificación del ámbito de tutela y garantizar el derecho de defensa del denunciado.

Se usó una investigación mixta, no experimental y correlacional causal, aplicándose encuesta a 18 Jueces, entrevista a 5 expertos y análisis documental de resoluciones judiciales y escritos de las partes, empleando Alfa de Cronbach, prueba Shapiro – Wilk y prueba Rho de Spearman.

En los resultados se observó que el denunciado no es citado a audiencia en los casos de riesgo severo y no puede ejercer su derecho de defensa después de ejecutadas las medidas de protección; por lo tanto, existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en la vulneración del contenido esencial y en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado; sin embargo, no existe incidencia en las restricciones de su derecho de defensa, pues dicho ámbito no lo restringe, sino lo suprime; resultados que sirvieron para determinar que urge modificar del ámbito de tutela a fin de garantizar el derecho de defensa del denunciado.

## **4. PALABRAS CLAVE**

Ámbito de tutela especial, derecho de defensa del denunciado, medidas de protección y cautelares.

## **5. ABSTRACT**

Law No. 30364 divides the special process of fighting violence, in the area of guardianship and sanction; The first does not allow the accused to participate under the same conditions as the complainant; In light of this, this investigation was carried out with the aim of determining the incidence of the area of special protection in the defense right of the accused in the Judicial District of La Libertad during 2019, the importance of which is that it demonstrated the violation of the right of defense of the accused, serving as a basis to propose the modification of the scope of protection and guarantee the right of defense of the accused.

A mixed, non-experimental and causal correlational investigation was used, applying a survey to 18 Judges, an interview with 5 experts and a documentary analysis of the parties' judicial and written pronouncements, using Cronbach's Alpha, Shapiro-Wilk test and Spearman's Rho test.

In the results, it was observed that the accused is not summoned to a hearing in cases of severe risk and cannot exercise his right of defense after the protection measures have been executed; therefore, there is a significant incidence of the area of special protection in the violation of the essential content and in the manifestations of the right of defense of the accused; However, there is no effect on the restrictions of their right of defense, since this area does not restrict it, but suppresses it; results that served to determine that there is an urgent need to modify the area of protection in order to guarantee the right of defense of the accused.

## **6. KEYWORDS**

Scope of special protection, right of defense of the accused, protection and precautionary measures.

## **7. INTRODUCCIÓN**

La violencia, en el pensamiento de Merleau-Ponty, es parte de la existencia humana colectiva (Mansilla, 2019), un problema social global (Herreira, T., & Labronici, L., 2011), histórico (Izcurdia y Puhl, 2017), generacional (Dobrianskyj, 2017), imposible de negar (Manero, 2016) pero no se le puede tolerar (Moura, et al., 2013) ya que es una inaceptable violación de los derechos humanos (Pereira, N., et al., 2013). En diversos países la violencia es un reto principal para la salud pública (Da Silva & Dalbosco, 2016), pues afecta la calidad de vida de las víctimas (Macedo & Godoy, 2016), de allí que a nivel internacional exista la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En Perú, la Ley N° 30364 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, regulan el proceso judicial para el trámite de denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El artículo 16 de la Ley establece que si la ficha de valoración determina que existe riesgo severo, el juez tiene 24 horas para dictar las medidas de protección y/o cautelares en favor de la víctima, pudiendo prescindir de la audiencia; el Reglamento establece en su artículo 6-A que el proceso especial está integrado por dos ámbitos no preclusivos y paralelos, uno de tutela especial donde se emiten medidas de protección y/o cautelares, y el otro de sanción donde se investigan y sancionan los hechos denunciados sean faltas o delitos; sin embargo, el artículo 35 del Reglamento no es claro en lo referente al derecho de defensa del denunciado, pues si bien en su numeral 35.1 refiere que el juzgado debe citar a las partes a la audiencia, dando a entender que se debe emplazar a la parte denunciante y denunciada, pero en su numeral 35.4. refiere que si la parte denunciada asiste a la audiencia se le tendrá por notificada en el acto, dando a entender que no se debería de citar a audiencia a dicha parte, pero en caso de que asista a la audiencia, se le deberá de notificar con el acta respectiva.

Si no se cita al denunciado a la audiencia, entonces admitiremos que este nuevo proceso especial simplifica y concentra actos procesales para proteger a la víctima pero a costa del derecho de defensa del denunciado, pues no le permite ejercer su derecho de defensa en el ámbito de tutela, y solo podrá apelar la resolución que dicta las medidas de protección; por otro lado, si asumimos la interpretación de que si se debe citar al denunciado a la audiencia, entonces estaríamos en contra del artículo 25 de la Ley 30364 que prohíbe la confrontación entre las partes.

En La Libertad se han emitido pronunciamientos opuestos sobre la citación al denunciado a la audiencia; incluso cuando se les cita, el tiempo que tienen para ejercer su defensa es mínimo debido a los plazos sumarásimos que establece la Ley N° 30364 y a la carga procesal que ostentan los juzgados, la misma que conforme al Informe N° 28-2019-ADM-MJIVMIGF-CSJLL (2019), al 01 de diciembre del 2019, asciende a un total de 10204 expedientes ingresados en el año 2019.

En este contexto, el problema general es: ¿De qué manera incide el ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019?; su objetivo general es: determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019; los objetivos específicos son: OE1: determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019; OE2: determinar la incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019 y OE3: determinar la incidencia del

ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019; y, la hipótesis general planteada es: existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019.

### **Marco Teórico**

Como antecedentes internacionales Rodríguez, L. (2015) refiere que el sistema interamericano aborda la violencia de género exigiendo a los Estados el respeto y garantía de los derechos humanos, rechaza la doble victimización de la parte agraviada y exige la emisión de medidas de protección y/o cautelares a favor de la víctima y su familia; Voria, M. (2019) sostiene que la violencia es sintomática de la ausencia de normativas de protección y cuidado; Sánchez R. (2014) refiere que el derecho de defensa tiene como supuesto esencial al derecho a ser informado de la acusación; Vera, R. (2014) concluye que la Ley de violencia contra la familia y mujer permite otorgar indiscriminadamente medidas de amparo a favor del presunto agredido, por ello, propone que se establezca de manera obligatoria la previa notificación al demandado a fin de garantizar su derecho a la contradicción e igualdad de armas; Terán, M. (2017) afirma que el procedimiento de delitos flagrantes de violencia intrafamiliar es demasiado expeditivo y célere a tal punto que no posibilita al abogado del denunciado realizar una adecuada defensa.

En el contexto nacional, Salas, E. (2019), afirma que los procesos de violencia contra la mujer pretenden proteger la dignidad de las víctimas a partir de una mínima presunción de riesgo o peligro en ellas; Infante, J. (2019) sostiene que las medidas de protección tienen como finalidad proteger a las víctimas frente a nuevos actos de violencia; Santillán, O. (2019) sostiene que en los procesos por violencia psicológica se vulnera el derecho de defensa de la persona denunciada, pues la Ley N° 30364 afecta derechos como el de ser notificado previamente con la denuncia, la oportunidad de presentar pruebas o el hecho mismo de citar a audiencia con pocas horas de anticipación; Burgos, V. (2002) refiere que el derecho de defensa es una garantía de alcance constitucional atribuible a toda persona con legítimo interés en la solución de una controversia o incertidumbre para comparecer a lo largo de todo el proceso y defender sus intereses.

En lo referente al aspecto teórico del derecho de defensa, es una garantía de alcance constitucional atribuible a toda persona con legítimo interés en la solución de una controversia o incertidumbre para comparecer a lo largo de todo el proceso y defender sus intereses (Burgos, 2002); permite a las partes ser oídas, alegando, probando y rebatiendo cada una de sus posiciones; irradia a todo el ordenamiento jurídico sentando las bases de su irrenunciabilidad (Castillo, 2015); así, aparece

reconocido en el artículo 2° numeral 23 de la Constitución Política del Perú, resultando de aplicación obligatoria a todo tipo de procesos (Santillán, 2019) y característico de un estado democrático de derecho (Alarcón, 2007); el Tribunal Constitucional Peruano, ha establecido que el contenido esencial del derecho de defensa se afecta cuando, en un proceso judicial, cualquiera de las partes es impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios suficientes, eficaces y necesarios para defender sus derechos e intereses legítimos (STC 1230-2002-HC/TC); la Corte Suprema, en la Casación N° 4693-2015-La Libertad (2016), citando a Chamorro, F., sostiene que el derecho de defensa es un componente indivisible del debido proceso, pues garantiza a los litigantes el derecho a ser oídos, a contar con las posibilidades de oposición y defensa adecuadas para la protección de sus pretensiones, al amparo del principio *audiatur et altera pars*; sin embargo, como excepción, el derecho de defensa puede ejercerse bajo la modalidad *in audita pars* como ocurre en el proceso cautelar donde el Juez resuelve la solicitud cautelar sin conocimiento de la otra parte, quien tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de manera diferida (Veramendi, 2010).

En lo referente al aspecto teórico del ámbito de tutela especial, el artículo 6-A: 6-A.1 del Reglamento de la Ley N° 30364 lo define como el ámbito de actuación en el cual el juez de familia dicta las medidas de protección o cautelares a favor de la presunta víctima; asimismo, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la resolución de vista número DOS del 11 de junio del 2018, emitida en el Expediente N° 005098-2017-93-1601-JR-FC-02, señala que la Ley 30364 exige al juez una respuesta casi inmediata frente a las denuncias por violencia, de allí que el proceso y las medidas de protección tengan una naturaleza *sui generis* y especial, regida por principios inherentes y únicos que buscan proteger a las víctimas.

Las medidas de protección, según Cerda y Felices (2011) y Salas (2019), son órdenes dictadas por el juez, las mismas que pueden ser de oficio o a pedido de parte (Ledesma, 2017) cuyo objetivo fundamental es garantizar que la víctima no vuelva a ser maltratada (Straka, 2015) y a diferencia de las medidas cautelares en las que se otorga tutela anticipada, en las medidas de protección se otorga tutela de prevención, de allí que no es necesaria una minuciosa actividad probatoria, pues en algunos casos basta la mera alegación para dictarlas (Ledesma, 2017).

Por otro lado, conforme al artículo 16-C de la Ley N° 30364, la resolución que dicta medidas de protección o cautelares es apelable; por lo que cabe recordar que la apelación se basa en el principio de pluralidad de instancias (Guerra, 2016), es el medio impugnatorio utilizado para cuestionar la decisión del juez, buscando se revoque total o parcialmente por el superior jerárquico (Rioja, 2016).

## **8. METODOLOGÍA**

La investigación es de tipo no experimental, porque no se manipuló las variables y sólo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos; su diseño es correlacional causal porque se investigó el grado de relación causa efecto entre las variables; según el enfoque es mixta porque se emplearon cuestionarios de encuesta para recabar datos con medición numérica; y, guías de entrevista y análisis documental para recabar datos sin medición numérica, con el fin de desarrollar capacidades de comprensión, descripción y teorización del tema de estudio; asimismo, se empleó la guía de técnica legislativa para elaborar una propuesta legislativa. La variable independiente es el ámbito de tutela especial, mientras que la dependiente es el derecho de defensa del denunciado. La población y muestra son los 18 Jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (9 especializados y 9 superiores) con competencia para conocer el ámbito de tutela especial, empleándose el muestreo no probabilístico puesto que se utilizó como muestra toda la población; la unidad de análisis es cada juez encuestado, cada juez entrevistado y cada expediente estudiado en función a las incidencias relacionadas al estudio.

## **9. RESULTADOS**

La encuesta permitió obtener como resultados la existencia de una correlación positiva altamente significativa entre el ámbito de tutela especial y el derecho de defensa del denunciado ( $R_s=0,649$ ;  $p < 0,01$ ), el grado de correlación es alto y considerando que la correlación es positiva, la relación entre las variables es directa; La significación bilateral  $P$ -valor  $< 0,01$  nos da evidencia altamente significativa suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa: Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019; asimismo, que existe una correlación positiva altamente significativa entre el ámbito de tutela especial y el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado ( $R_s=0,631$ ;  $p < 0,01$ ), con grado de correlación alto y positivo; que existe correlación positiva moderada altamente significativa entre el ámbito de tutela especial y las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado ( $R_s=0,520$ ;  $p < 0,01$ ), con grado de correlación moderado y positivo; sin embargo, no existe correlación entre el ámbito de tutela especial y las restricciones del derecho de defensa del denunciado ( $R_s=-0,128$ ;  $p > 0,05$ ).

Tras las entrevistas aplicadas a los magistrados así como al abogado experto Juan Alberto Castañeda Méndez, se obtuvo que el ámbito de tutela especial no permite que el denunciado ejerza su defensa en los casos de riesgo severo, pues se busca proteger a la víctima, por ello es necesario implementar la oposición como mecanismo de defensa del denunciado. Del mismo modo, tras el



análisis documental, se obtuvo que en los casos de riesgo severo no se cita al denunciado, quien solo tiene la posibilidad de apelar pero no de ejercer su derecho de defensa.

## **10. DISCUSIÓN**

Los resultados obtenidos en la encuesta, análisis de documentos, entrevistas, y teoría como la expuesta por la Doctora Ledezma, permiten advertir que el derecho de defensa se ve afectado cuando se cita al denunciado pero no se le pone en conocimiento los hechos denunciados, las pruebas en su contra y las medidas a debatirse en la audiencia, asimismo, cuando no se le otorga el tiempo necesario para preparar su defensa; también se ve vulnerado en los casos de riesgo severo, donde no se le cita y se emiten medidas de protección en instancia única.

## **11. CONCLUSIONES**

Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado, pues en los casos de riesgo leve y moderado su derecho es restringido por la falta de información de los hechos y pruebas en su contra, además del limitado tiempo que cuenta para preparar su defensa, mientras que en los casos de riesgo severo no se le cita y se emiten medidas de protección en instancia única, quedando impedido de ejercer su defensa.

Existe incidencia del ámbito de tutela especial en las manifestaciones del derecho de defensa del denunciado, pues si bien en los casos de riesgo leve y moderado se cita al denunciado, sin embargo ello no garantiza que pueda manifestar su defensa de manera adecuada, debido a la prontitud del tiempo entre la citación y la audiencia, mientras que en el caso de riesgo severo la posibilidad de manifestar su defensa es nula pues no se le cita a la audiencia.

No existe incidencia del ámbito de tutela especial en las restricciones del derecho de defensa del denunciado, pues no restringe el derecho de defensa del denunciado, sino que lo suprime.

Existe incidencia significativa del ámbito de tutela especial en el derecho de defensa del denunciado en el Distrito Judicial La Libertad durante el 2019, pues el ámbito de tutela afecta el contenido esencial del derecho de defensa del denunciado al dejarlo impedido de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos; asimismo, afecta la manifestación del derecho de defensa del denunciado porque se encuentra en desventaja frente a la parte denunciante al momento de manifestar su defensa; y, restringe ineficazmente el derecho de defensa del denunciado en los casos de riesgo leve y moderado, mientras que suprime completamente dicho derecho en los casos de riesgo severo.

## **FORMULA LEGAL**

### **PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 30364, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 37 DEL D.S. N° 009-2016-MIMP**

El Presidente de la república por cuanto:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

#### **Artículo 1.- Objeto**

La presente Ley tiene por objeto fortalecer la prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, mejorando los mecanismos de atención y protección de las víctimas, especialmente el marco de la no confrontación en el ámbito de tutela y la garantía del derecho de defensa del denunciado.

#### **Artículo 2.- Incorporación del inciso d) al artículo 16 de la Ley N° 30364**

Incorpóranse el inciso d) al artículo 16 de la Ley N° 30364, en los siguientes términos: “Artículo 16 de la Ley N° 30364: (...) d) En los supuestos de los incisos a, b y c, las medidas de protección y cautelares son concedidas o rechazadas sin conocimiento de la parte denunciada. Procede apelación contra el auto que deniega las medidas. En este caso, el demandado no es notificado y el superior absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. Dictadas las medidas de protección o cautelares, la parte denunciada puede formular oposición dentro de un plazo de tres (3) días, contado desde que toma conocimiento del auto que dicta dichas medidas, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de las medidas. De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto las medidas de protección y/o cautelares. La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo (...)”.

#### **Artículo 3.- Modificación de los numerales 35.1 y 35.2 del artículo 35 del D.S. N° 009-2016-MIMP**

Modifícanse los numerales 35.1 y 35.2 del artículo 35 del D.S. N° 009-2016-MIMP, en los siguientes términos: “Artículo 35.- Convocatoria a la audiencia: 35.1 El Juzgado de Familia cita a la víctima a través del medio más célere como facsímil, teléfono, correo electrónico personal o cualquier otro medio de comunicación, sea de manera directa o a través de su representante legal, dejando constancia de dicho acto. Puede ser convocada mediante cédula de notificación sin exceder del plazo previsto en la ley para su realización. 35.2 Cuando el Juzgado de Familia no logre ubicar a la víctima para la citación o notificación a la audiencia, se deja constancia de ello y se lleva a cabo la audiencia.”

**Artículo 4.- Derogación del numeral 35.4 del artículo 35 del D.S. N° 009-2016-MIMP**

Derógase el numeral 35.4 del artículo 35 del D.S. N° 009-2016-MIMP que establece: “35.4. Si la persona denunciada asiste a la audiencia, se le tiene por notificada en el acto”.

**Artículo 5.- Incorporación del numeral 37.7 al artículo 37 del D.S. N° 009-2016-MIMP**

Incorpórase el numeral 37.7 al artículo 37 del D.S. N° 009-2016-MIMP, en los siguientes términos:  
“Artículo 37.- Resolución final y su comunicación para la ejecución: (...) 37.7.- Dictadas las medidas de protección y/o cautelares, la parte denunciada puede formular oposición dentro de un plazo de tres (3) días, contado desde que toma conocimiento del auto que las dicta. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de las medidas. Si se ampara la oposición, el juez deja sin efecto las medidas de protección y/o cautelares. La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo”.

## 12. REFERENCIAS

- Alarcón, G. (2007). Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. Pautas para la racionalidad jurídico – política desde Elías Díaz. Madrid, España: Dykinson.
- Burgos, V. (2002). El Proceso Penal Peruano: una investigación sobre su constitucionalidad (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
- Castillo, G. (2015). El Plenario Probatorio en la Tutela ejecutiva en la búsqueda de la ponderación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y del derecho de defensa del ejecutado (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado el 20 de diciembre del 2019 de: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6883>
- Cerda, R., y Felices, M. (2011). El Nuevo Proceso Penal: Constitucionalización, principios y racionalidad probatoria (Primera ed.). Lima, Peru: Grijley E.I.R.L.
- Corte Suprema de la República del Perú (2016). Casación N° 4693-2015-La Libertad.
- Da Silva, D. & Dalbosco, D.(2016). Exposure to Domestic and Community Violence and Subjective Well-Being in Adolescents. *Paidéia*, 26(65), 299-305. Recuperado el 11 de noviembre del 2019 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305447005004>
- Decreto Legislativo N° 1386. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 04 de setiembre del 2018.
- Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 07 de marzo del 2019.
- Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 27 de julio del 2016.
- Dobrianskyj, T. (2017). How adolescent's family satisfaction and attachment quality correlate in cases of domestic violence. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 145-155. Recuperado el 05 de diciembre del 2019 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349853220015>
- Guerra, M (2016). El Principio de Pluralidad de Instancia como fundamento del recurso de apelación. En *La Apelación en el proceso civil* (pp. 09-22). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Herreira, T. & Labronici, L. (2011). Chemical Dependency As A Risk Factor For Domestic Violence Against Women. *Online Brazilian Journal of Nursing*, 10(2), 1-9. Recuperado el 19 de enero del 2020: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361441674005>

- Infante, J. (2019). Análisis de las medidas de protección frente a la violencia contra la mujer. Los Olivos, 2018. (Tesis para obtener el grado académico de: Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal). Universidad César Vallejo. Lima, Perú.
- Izcurdia, M., & Puhl, S. (2017). Violencia familiar y de género: intervenciones transdisciplinarias. Anuario de Investigaciones (XXIV), 239-250. Recuperado el 20 de agosto del 2019 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369155966029>
- Ledesma, M. (2017). La tutela de prevención en los procesos por violencia familiar. Revista Ius Et Veritas, (54), 172-183. DOI Recuperado el 30 de setiembre del 2019 de: <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.201702.008>
- Macedo, L. & Godoy, R. (2016). Gender subordination in the vulnerability of women to domestic violence. Investigación y Educación en Enfermería, 34(2), 261-270. Recuperado el 21 de julio del 2019: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105246033003>
- Manero, R. (2016). Encrucijadas psicosociales de la violencia. El Cotidiano, (197), 113-120. Recuperado el 17 de noviembre del 2019 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32545857014>
- Mansilla, K. (2019). Expresión y contingencia en el pensamiento político de Maurice Merleau-Ponty (Tesis Doctoral). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
- Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (2019). Informe N° 28-2019-ADM-MJIVMIGF-CSJLL (2019).
- Moura, L., Nunes, M., Xavier, L., Almeida, A., Basílio, C., Monteiro, F. (2013). Consequences of Exposure to Domestic Violence for Children: A Systematic Review of the Literature. Paidéia, 23-(55), 263-271. Recuperado el 8 de agosto del 2019: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305429104014>
- Pereira, N., Erdmann, L., Guedes, J., Santos, R. De Souza, M. & Schlindwein, B. (2013). Caring for women facing domestic violence: Grounded Theory. Online Brazilian Journal of Nursing, 12(4), 782-793. Recuperado el 20 de enero del 2020 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361433919003>
- Rioja, A. (2016). El agravio en el recurso de apelación. En La Apelación en el proceso civil (pp. 101-117). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

- Rodríguez, L. (2015). La perspectiva de género como aporte del feminismo para el análisis del derecho y su reconstrucción: el caso de la violencia de género. . (Tesis Doctoral). Universidad Carlos III de Madrid. Getafe, España.
- Salas, E. (2019). Incidencia de la incorporación de los artículos 23-A, 23-B y 23-C, en la ejecución de las medidas de protección por violencia contra la mujer, dictadas por los Juzgados de Familia – Tarapoto, en el año 2018. (Tesis para obtener el grado académico de: Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal). Universidad César Vallejo. Tarapoto, Perú.
- Sánchez, R. (2014). Terrorismo y derecho de defensa. De la garantía de los derechos fundamentales a la investigación penal contrterrorista. (Tesis Doctoral). Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Getafe, España.
- Santillán, O. (2019). La vulneración del derecho de defensa del denunciado y los procesos de violencia psicológica en la provincia de Moyobamba, durante el año 2018. (Tesis para obtener el grado académico de: Maestro en Derecho Civil Empresarial). Universidad César Vallejo. Tarapoto, Perú.
- Straka, Ú. (2015). Violencia de género. Área de Posgrado en Derecho Universidad Católica Andrés Bello, 134-135. Recuperado el 17 de octubre del 2019: [https://www.kas.de/wf/doc/kas\\_43210-1522-4-30.pdf?151111201130](https://www.kas.de/wf/doc/kas_43210-1522-4-30.pdf?151111201130)
- Teran, M. (2017). Procedimiento directo aplicado en delitos flagrantes de violencia intrafamiliar con carácter psicológico según el código orgánico integral penal. (Tesis de pregrado). Universidad Central de Quito. Quito, Ecuador.
- Tribunal Constitucional Peruano. STC 1230-2002-HC/TC
- Vera, R. (2014). Violencia Intra familiar: Las Medidas de Amparo y El Principio de Contradicción. (Tesis para obtener el Grado de Maestro). Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Guayaquil, Ecuador.
- Veramendi, E. (2010). La impugnación de decisión cautelar: a propósito de la oposición: Recuperado el 05 de setiembre del 2019 de: <http://boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/Art%C3%ADculo%20-%20LA%20IMPUGNACI%C3%93N%20DE%20DECISI%C3%93N%20CAUTELAR.pdf>
- Voria, M. (2019). Las políticas públicas frente al dilema de la violencia de género y del cuidado: paradojas del programa "Ellas Hacen" en Argentina. Revista de Estudios de Género. La

ventana, VI. 205-230. Recuperado el 11 de diciembre del 2019 de:  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7042448>

**Anexo 23: DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL  
ARTÍCULO CIENTÍFICO**

Yo, Raúl Martínez Gonzáles, estudiante del Programa Doctorado en Derecho de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 47204767 con el artículo titulado: “Ámbito de tutela especial y su incidencia en el derecho de defensa del denunciado - Distrito Judicial La Libertad, 2019”, declaro bajo juramento que:

- 1) El artículo pertenece a mi autoría
- 2) El artículo no ha sido plagiado ni total ni parcialmente.
- 3) El artículo no ha sido autoplagiado; es decir, no ha sido publicado ni presentado anteriormente para alguna revista.
- 4) De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.
- 5) Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la Universidad.

Trujillo, 21 de junio del 2020